

AUGUSTO B. LEGUIA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA.

Por cuanto: en la Sexta Conferencia Internacional Panamericana, reunida en La Habana, en 1928, se firmó el 20 de febrero de ese año, por los Delegados del Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, República Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana, Estados Unidos de América y Cuba, la Convención de Derecho Internacional Privado con el Código anexo, que, por acuerdo de la misma Conferencia, del 13 de febrero, lleva por título oficial el nombre de "Código Bustamante", cuyos textos son los siguientes:

CONVENCIÓN

(DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO)

Los Presidente de las Repúblicas de Perú, de Uruguay, de Panamá, de Ecuador, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Costa Rica, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Haití, de República Dominicana, de Estados Unidos de América y de Cuba.

Deseando que sus países respectivos estuvieran representados en la Sexta Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenios y tratados que juzgaren útiles a los intereses de América, los siguientes señores Delegados:

PERÚ:

Jesús Melquiades Salazar.
Víctor Maúrtua.
Enrique Castro Oyanguren.
Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

Jacobo Varela Acevedo.
Juan José Amézaga.
Leonel Aguirre.
Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

Ricardo J. Alfaro.
Eduardo Chiari.

ECUADOR:

Gonzalo Zaldumbide.
Víctor Zevallos.
Colón Eloy Alfaro.

MÉXICO:

Julio García.
Fernando González Roa.
Salvador Urbina.
Aquiles Elorduy.

EL SALVADOR:

Gustavo Guerrero.
Héctor David Castro.
Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

Carlos Salazar.
Bernardo Alvarado Tello.
Luis Beltranena.
José Azurdia.

NICARAGUA:

Carlos Cuadra Pazos.
Joaquín Gómez.
Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

José Antezana.
Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

Santiago Key Ayala.
Francisco Gerardo Yáñez.
Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

Enrique Olaya Herrera.
Jesús M. Yepes.
Roberto Urdaneta Arbeláez.
Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

Fausto Dávila.
Mariano Vázquez

COSTA RICA:

Ricardo Castro Beeche.
J. Rafael Oreamuno.
Arturo Tinoco.

CHILE:

Alejandro Lira.
Alejandro Alvarez.
Carlos Silva Vildósola.
Manuel Bianchi.

BRASIL:

Raúl Fernandes.
Lindolfo Collor.
Alarico da Silveira.
Sampaio Correa.
Eduardo Espínola.

ARGENTINA:

Honorio Pueyrredón.
Laurentino Olascoaga.
Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

Lisandro Díaz León.

HAITÍ:

Fernando Dennis.
Charles Riboul.

REPÚBLICA DOMINICANA:

Francisco J. Peynado.
Gustavo A. Díaz.
Elías Brache.

Angel Morales.
Tulio M. Cesteros.
Ricardo Pérez Alfonseca.
Jacinto R. de Castro.
Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

Charles Evans Hughes.
Noble Brandon Judah.
Henry P. Fletcher.
Oscar W. Underwood.
Dwight W. Morrow.
Morgan J. O'Brien.
James Brown Scott.
Ray Lyman Wilbur.
Leo S. Rowe.

CUBA:

Antonio S. de Bustamante.
Orestes Ferrara.
Enrique Hernández Cartaya.
José Manuel Cortina.
Arístides Agüero.
José B. Alemán.
Manuel Márquez Sterling.
Fernando Ortiz.
Néstor Carbonell.
Jesús María Barraqué.

Los cuales, después de habérse comunicado sus plenos poderes y hallándose en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:

Artículo Primero.—Las Repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente Convenio.

Artículo Segundo.—Las disposiciones de este Código no serán aplicables sino entre las Repúblicas contratantes y entre los demás Estados que se adhieran a él en la forma que más adelante se consigna.

Artículo Tercero.—Cada una de las Repúblicas contratantes, al ratificar el presente Convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del Código anexo y no la obligarán las disposiciones a que la reserva se refiera.

Artículo Cuarto.—El Código entrará en vigor para las Repúblicas que lo ratifiquen, a los treinta días del depósito de la respectiva ratificación y siempre que por lo menos lo hayan ratificado dos.

Artículo Quinto.—Las ratificaciones se depositarán en la Oficina de la Unión Panamericana, que trasmisirá copia de ellas a cada una de las Repúblicas contratantes.

Artículo Sexto.—Los Estados o personas jurídicas internacionales no contratantes que deseen adherirse a este Convenio y en todo o en parte al Código anexo, lo notificarán a la Oficina de la Unión Panamericana, que a su vez lo comunicará a todos los Estados hasta entonces contratantes o adheridos. Transcurridos seis meses desde esa comunicación, el Estado o persona jurídica internacional interesados podrá depositar en la Oficina de la Unión Panamericana el instrumento de adhesión y quedará ligado por este Convenio, con carácter recíproco, treinta días después de la adhesión, respecto de todos los regidos por el mismo que no hayan hecho en esos plazos reserva alguna en cuanto a la adhesión solicitada.

Artículo Séptimo.—Cualquiera República Americana ligada por este Convenio que desee modificar en todo o en parte el Código anexo, presentará la proposición correspondiente a la Conferencia Internacional Americana para la resolución que proceda.

Artículo Octavo.—Si alguna de las personas jurídicas internacionales contratantes o adheridas quisiera denunciar el presente Convenio, notificará la denuncia por escrito a la Unión Panamericana, la cual trasmisirá inmediatamente copia literal certificada de la notificación a las demás, dándoles a conocer la fecha en que la ha recibido. La denuncia no surtirá efecto sino respecto del contratante que la haya notificado y al año de recibida en la Oficina de la Unión Panamericana.

Artículo Noveno.—La Oficina de la Unión Panamericana llevará un registro de las fechas de recibo de ratificaciones y recibo de adhesiones y denuncias, y expedirá copias certificadas de dicho Registro a todo contratante que lo solicite.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman el presente Convenio y ponen en él el sello de la Sexta Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la ciudad de la Habana, República de Cuba, el día veinte de febrero de mil novecientos veintiocho, en cuatro ejemplares escritos respectivamente en castellano, inglés, francés y portugués que se depositarán en la Oficina de la Unión Panamericana, a fin de que envíe una copia certificada de todos a cada una de las Repúblicas signatarias.

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

TITULO PRELIMINAR

REGLAS GENERALES

Artículo 1

Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales.

Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero.

Artículo 2

Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes.

Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos.

Artículo 3

Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes:

I.—Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno.

II.—Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional.

III.—Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado.

Artículo 4

Los preceptos constitucionales son de orden público internacional.

Artículo 5

Todas las reglas de protección individual y colectiva, establecidas por el Derecho político y el administrativo, son también de orden público internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo contrario.

Artículo 6

En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 3.

Artículo 7

Cada Estado contratante aplicará como leyes personales la del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior.

Artículo 8

Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional.

LIBRO PRIMERO

DERECHO CIVIL INTERNACIONAL

TITULO PRIMERO

DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I

Nacionalidad y Naturalización

Artículo 9

Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona indi-

vidual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo.

Artículo 10

A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté interesado el Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las nacionalidades discutida en que tenga su domicilio la persona de que se trate.

Artículo 11

A falta de ese domicilio se aplicarán al caso previsto en el artículo anterior los principios aceptados por la ley del juzgador.

Artículo 12

Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva nacionalidad, se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida.

Artículo 13

A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia de un Estado se aplicará la ley del Estado nuevo, si ha sido reconocida por el Estado juzgador, y en su defecto la del antiguo, todo sin perjuicio de las estipulaciones contractuales entre los dos Estados interesados, que serán siempre preferentes.

Artículo 14

A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de la nacionalidad perdida.

Artículo 15

La recuperación de la nacionalidad se somete a la ley de la nacionalidad que se recobra.

Artículo 16

La nacionalidad de origen de las Corporaciones y de las Fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe.

Artículo 17

La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exigiere ese requisito la legislación local.

Artículo 18

Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que establezca el contrato social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección principal.

Artículo 19

Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reuna normalmente la junta general de accionistas y, en su defecto, por la del lugar en que radique su principal Junta o Consejo directivo o administrativo.

Artículo 20

El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la nueva.

Si cambiare la soberanía territorial, en el caso de independencia, se aplicará la regla establecida en el artículo trece para las naturalizaciones colectivas.

Artículo 21

Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refieren a personas jurídicas y las de los artículos 16 y 20, no serán aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas.

CAPÍTULO II

Domicilio

Artículo 22

El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial.

Artículo 23

El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su Gobierno o para estudios científicos o artísticos, será el último que hayan tenido en su territorio nacional.

Artículo 24

El domicilio legal del jefe de la familia se extiende a la mujer y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador o los menores o incapacitados bajo su guardia, si no dispone lo contrario la legislación personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro.

Artículo 25

Las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas se resolverán de acuerdo con la ley del Tribunal, si fuere el de uno de los Estados interesados, y en su defecto por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio.

Artículo 26

Para las personas que no tengan domicilio se entenderá como tal el de su residencia, o en donde se encuentren.

CAPÍTULO III

Nacimiento, extinción y consecuencias de la personalidad civil.

SECCIÓN I.—DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES

Artículo 27

La capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este Código o por el derecho local.

Artículo 28

Se aplicará la ley personal para decidir si el nacimiento determina la personalidad y si al concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, así como para la viabilidad y los efectos de la prioridad del nacimiento en el caso de partos dobles o múltiples.

Artículo 29

Las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea en defecto de prueba, se regulan por la ley personal de cada uno de los fallecidos en cuanto a su respectiva sucesión.

Artículo 30

Cada Estado aplica su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas, así como para decidir si la menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la personalidad, que permiten derechos y aun ciertas obligaciones.

SECCIÓN II.—DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 31

Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitarse derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local.

Artículo 32

El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial.

Artículo 33

Salvo las restricciones establecidas en los dos artículos anteriores, la capacidad civil de las Corporaciones se rige por la ley que las hubiere creado o reconocido; la de las fundaciones por las reglas de su institución, aprobadas por la autoridad correspondiente, si lo exigiere su derecho nacional, y la de las asociaciones por sus estatutos, en iguales condiciones.

Artículo 34

Con iguales restricciones, la capacidad civil de las sociedades civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

Artículo 35

La ley local se aplica para atribuir los bienes de las personas jurídicas que dejan de existir, si el caso no está previsto de otro modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales, o en el derecho vigente respecto de las sociedades.

CAPÍTULO IV

Del Matrimonio y el Divorcio.

SECCIÓN I.—CONDICIONES JURÍDICAS QUE HAN DE PRECEDER A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

Artículo 36

Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa.

Artículo 37

Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficientes la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación.

Artículo 38

La legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezca y que no sean dispensables, a la forma del consentimiento, a la fuerza obligatoria o no de los espousales, a la oposición al matrimonio, a la obligación de denunciar los impedimentos y las consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las diligencias preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo.

Artículo 39

Se rige por la ley personal común de las partes y, en su defecto, por el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de matrimonio incumplida o por la publicación de proclamas en igual caso.

Artículo 40

Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por extranjeros, que contrarie sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el matrimonio de uno de ellos y a la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable.

SECCIÓN II.—DE LA FORMA DEL MATRIMONIO

Artículo 41

Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, el matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz las leyes del país en que se efectúe. Sin embargo, los Estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma.

Artículo 42

En los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes, se ajustarán a su ley personal, sin perjuicio de que les sean aplicables las disposiciones del artículo cuarenta.

SECCIÓN III.—EFECTOS DEL MATRIMONIO EN CUANTO A LAS PERSONAS DE LOS CÓNYUGES

Artículo 43

Se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, si fuera diverso, el del marido, en lo que toque a los deberes respectivos de protección y obediencia, a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando cambie de residencia, a la disposición y administración de los bienes comunes y a los demás efectos especiales del matrimonio.

Artículo 44

La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia en juicio.

Artículo 45

Se sujetan al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Artículo 46

También se aplica imperativamente el derecho local que priva de efectos civiles al matrimonio del bígamo.

SECCIÓN IV.—NULIDAD DEL MATRIMONIO Y SUS EFECTOS

Artículo 47

La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive.

Artículo 48

La coacción, el miedo y el rapto como causas de nulidad del matrimonio se rigen por la ley del lugar de la celebración.

Artículo 49

Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges, si fuere común; en su defecto la del cónyuge que haya obrado de buena fe, y, a falta de ambas, la del varón, a las reglas sobre el cuidado de los hijos de matrimonios nulos, en los casos en que no puedan o no quieran estipular nada sobre esto los padres.

Artículo 50

La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles del matrimonio nulo, excepto los que ha de producir respecto de los bienes de los cónyuges, que seguirán la ley del régimen económico matrimonial.

Artículo 51

Son de orden público internacional las reglas que señalan los efectos judiciales de la demanda de nulidad.

SECCIÓN V.—SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DIVORCIO

Artículo 52

El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio si no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges.

Artículo 53

Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admite su derecho personal.

Artículo 54

Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges.

Artículo 55

La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de los cónyuges y de los hijos.

Artículo 56

La separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los artículos que preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del Tribunal que los otorga, en los demás Estados contratantes, salvo lo dispuesto en el artículo cincuenta y tres.

CAPÍTULO V

Paternidad y Filiación.

Artículo 57

Son reglas de orden público interno, debiendo aplicarse la ley personal del hijo si fuere distinta a la del padre, las relativas a presunción de legitimidad y sus condiciones, las que confieren el derecho al apellido y las que determinan las pruebas de la filiación y regulan la sucesión del hijo.

Artículo 58

Tienen el mismo carácter, pero se aplica la ley personal del padre, las que otorguen a los hijos legitimados derechos sucesorios.

Artículo 59

Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos.

Artículo 60

La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre y la capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas.

Artículo 61

La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden público internacional.

Artículo 62

Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla se someten a la ley personal del hijo.

Artículo 63

La investigación de la paternidad y de la maternidad y su prohibición se regulan por el derecho territorial.

Artículo 64

Dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen las acciones a ese efecto, conceden o niegan el apellido y señalan causas de nulidad.

Artículo 65

Se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos y a la personal del hijo los de los padres ilegítimos.

Artículo 66

La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos ilegítimos se subordinan al derecho territorial.

CAPÍTULO VI

Alimentos entre parientes

Artículo 67

Se sujetarán a la ley personal del alimentado el concepto legal de los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de ese derecho.

Artículo 68

Son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que se deben y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder ese derecho.

CAPÍTULO VII

Patria potestad

Artículo 69

Están sometidas a la ley personal del hijo la existencia y el alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así como las causas de su extinción y recobro y la limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar.

Artículo 70

La existencia del derecho de usufructo y las demás reglas aplicables a las diferentes clases de peculio, se someten también a la ley personal del hijo, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.

Artículo 71

Lo dispuesto en el artículo anterior ha de entenderse en territorio extranjero, sin perjuicio de los derechos de tercero que la ley local otorgue y de las disposiciones locales sobre publicidad y especialidad de garantías hipotecarias.

Artículo 72

Son de orden público internacional las disposiciones que determinen la naturaleza y límites de la facultad del padre para corregir y castigar y su recurso a las autoridades, así como las que lo priven de la potestad por incapacidad, ausencia o sentencia.

CAPÍTULO VIII

Adopción

Artículo 73

La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados.

Artículo 74

Se regulan por la ley personal del adoptante sus efectos en cuanto a la sucesión de éste y por la del adoptado lo que se refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve respecto de su familia natural, así como a su sucesión respecto del adoptante.

Artículo 75

Cada uno de los interesados podrá impugnar la adopción de acuerdo con las prescripciones de su ley personal.

Artículo 76

Son de orden público internacional las disposiciones que en esta materia regulan el derecho a alimentos y las que establecen para la adopción formas solemnes.

Artículo 77

Las disposiciones de los cuatro artículos precedentes no se aplicarán a los Estados cuyas legislaciones no reconozcan la adopción.

CAPÍTULO IX

De la ausencia

Artículo 78

Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional.

Artículo 79

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se designará la representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal.

Artículo 80

La ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los administradores.

Artículo 81

El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace y surte efecto la declaración de ausencia y cuándo y cómo debe cesar la administración de los bienes del ausente, así como a la obligación y forma de rendir cuentas.

Artículo 82

Todo lo que se refiera a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales, se regula por su ley personal.

Artículo 83

La declaración de ausencia o de su presunción, así como su cesación y la de presunción de muerte del ausente, tienen eficacia extraterritorial, incluso en cuanto al nombramiento y facultades de los administradores.

CAPÍTULO X

Tutela

Artículo 84

Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies.

Artículo 85

La propia ley debe observarse en cuanto a la institución del prototor.

Artículo 86

A las incapacidades y excusas para la tutela, curatela y protutela deben aplicarse simultáneamente las leyes personales del tutor, curador o prototor y del menor o incapacitado.

Artículo 87

El afianzamiento de la tutela o curatela y las reglas para su ejercicio se someten a la ley personal del menor o incapacitado. Si la fianza fuere hipotecaria o pignorática deberá constituirse en la forma prevenida por la ley local.

Artículo 88

Se rigen también por la ley personal del menor o incapacitado las obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden penal, que son territoriales.

Artículo 89

En cuanto al registro de tutelas se aplicarán simultáneamente la ley local y las personales del tutor o curador y del menor o incapacitado.

Artículo 90

Son de orden público internacional los preceptos que obligan al Ministerio público o a cualquier funcionario local a solicitar la declaración de incapacidad de dementes y sordomudos y los que fijen los trámites de esa declaración.

Artículo 91

Son también de orden público internacional las reglas que establecen las consecuencias de la interdicción.

Artículo 92

La declaratoria de incapacidad y la interdicción civil surten efectos extraterritoriales.

Artículo 93

Se aplicará la ley local a la obligación del tutor o curador de alimentar al menor o incapacitado y a la facultad de corregirlos sólo moderadamente.

Artículo 94

La capacidad para ser miembro de un Consejo de familia se regula por la ley personal del interesado.

Artículo 95

Las incapacidades especiales y la organización, funcionamiento, derechos y deberes del Consejo de familia, se someten a la ley personal del sujeto a tutela.

Artículo 96

En todo caso, las actas y acuerdos del Consejo de familia deberán ajustarse a las formas y solemnidades prescritas por la ley del lugar en que se reuna.

Artículo 97

Los Estados contratantes que tengan por ley personal la del domicilio podrán exigir, cuando cambie el de los incapaces de un país para otro, que se ratifique o se discrierna de nuevo la tutela o curatela.

CAPÍTULO XI

De la prodigalidad

Artículo 98

La declaración de prodigalidad y sus efectos se sujetan a la ley personal del pródigio.

Artículo 99

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se aplicará la ley del domicilio a la declaración de prodigalidad de las personas cuyo derecho nacional desconozca esta institución.

Artículo 100

La declaración de prodigalidad, hecha en uno de los Estados contratantes, tiene eficacia extraterritorial respecto de los demás, en cuanto el derecho local lo permita.

CAPÍTULO XII

Emancipación y mayor edad

Artículo 101

Las reglas aplicables a la emancipación y la mayor edad son las establecidas por la legislación personal del interesado.

Artículo 102

Sin embargo, la legislación local puede declararse aplicable a la mayor edad como requisito para optar por la nacionalidad de dicha legislación.

CAPÍTULO XIII

Del Registro Civil

Artículo 103

Las disposiciones relativas al Registro Civil son territoriales, salvo en lo que toca al que lleven los agentes consulares o funcionarios diplomáticos.

Lo prescrito en este artículo no afecta los derechos de otro Estado en relaciones jurídicas sometidas al derecho internacional público.

Artículo 104

De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los Estados contratantes, que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por la vía diplomática, certificación literal y oficial al país del interesado.

TITULO SEGUNDO

DE LOS BIENES

CAPÍTULO I

Clasificación de los bienes

Artículo 105

Los bienes, sea cual fuere su clase, están sujetos a la ley de la situación.

Artículo 106

Para los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta, respecto de los bienes muebles corporales y para los títulos representativos de créditos de cualquier clase, el lugar de su situación ordinaria o normal.

Artículo 107

La situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse efectivos, y, si no estuviere precisado, por el domicilio del deudor.

Artículo 108

La propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran situados donde se hayan registrado oficialmente.

Artículo 109

Las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido legalmente.

Artículo 110

A falta de toda otra regla y además para los casos no previstos en este Código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario, o, en su defecto, en el del tenedor.

Artículo 111

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cosas dadas en prenda, que se consideran situadas en el domicilio de la persona en cuya posesión se hayan puesto.

Artículo 112

Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 113

A la propia ley territorial se sujetan las demás clasificaciones y calificaciones jurídicas de los bienes.

CAPÍTULO II

De la propiedad

Artículo 114

La propiedad de familia inalienable y exenta de gravámenes y embargos, se regula por la ley de la situación.

Sin embargo, los nacionales de un Estado contratante en que no se admita o regule esa clase de propiedad, no podrán tenerla u organizarla en otro, sino en cuanto no perjudique a sus herederos forzosos.

Artículo 115

La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden.

A falta de ellos, su obtención, registro y disfrute quedarán sometidos al derecho local que las otorgue.

Artículo 116

Cada Estado contratante tiene la facultad de someter a reglas especiales respecto de los extranjeros la propiedad minera, la de buques de pesca y cabotaje, las industrias en el mar territorial y en la zona marítima y la obtención y disfrute de concesiones y obras de utilidad pública y de servicio público.

Artículo 117

Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que rigen las aguas de dominio público y privado y sus aprovechamientos, son de orden público internacional.

CAPÍTULO III

De la comunidad de bienes

Artículo 118

La comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo o voluntad de las partes y en su defecto por la ley del lugar. Este último se tendrá como domicilio de la comunidad a falta de pacto en contrario.

Artículo 119

Se aplicará siempre la ley local, con carácter exclusivo, al derecho de pedir la división de la cosa común y las formas y condiciones de su ejercicio.

Artículo 120

Son de orden público internacional las disposiciones sobre deslinde y amojonamiento y derecho a cerrar las fincas rústicas y las relativas a edificios ruinosos y árboles que amenacen caerse.

CAPÍTULO IV

De la posesión

Artículo 121

La posesión y sus efectos se rigen por la ley local.

Artículo 122

Los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada uno de ellos, según su naturaleza.

Artículo 123

Se determinan por la ley del tribunal los medios y trámites utilizables para que se mantenga en posesión al poseedor inquietado, perturbado o despojado a virtud de medidas o acuerdos judiciales o por consecuencia de ellos.

CAPÍTULO V

Del usufructo, del uso y de la habitación

Artículo 124

Cuando el usufructo se constituya por mandato de la ley de un Estado contratante, dicha ley lo regirá obligatoriamente.

Artículo 125

Si se ha constituido por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos o *mortis causa*, se aplicarán respectivamente la ley del acto o la de la sucesión.

Artículo 126

Si surge por prescripción, se sujetará a ley local que la establezca.

Artículo 127

Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva o no de fianza al padre usufructuario.

Artículo 128

Se subordina a la ley de la sucesión la necesidad de que preste fianza el cónyuge superviviente por el usufructo hereditario y la obligación del usufructuario de pagar ciertos legados o deudas hereditarios.

Artículo 129

Son de orden público internacional las reglas que definen el usufructo y las formas de su constitución, las que fijan las causas legales por las que se extingue y la que lo limita a cierto número de años para los pueblos, corporaciones o sociedades.

Artículo 130

El uso y la habitación se rigen por la voluntad de la parte o partes que los establezcan.

CAPÍTULO VI

De las servidumbres

Artículo 131

Se aplicará el derecho local al concepto y clasificación de las servidumbres, a los modos no convencionales de adquirirlas y de extinguirse y a los derechos y obligaciones en este caso de los propietarios de los predios dominante y sirviente.

Artículo 132

Las servidumbres de origen contractual o voluntario se someten a la ley del acto o relación jurídica que las origina.

Artículo 133

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la comunidad de pastos en terrenos públicos y la redención del aprovechamiento de leñas y demás productos de los montes de propiedad particular, que están sujetas a la ley territorial.

Artículo 134

Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres legales que se imponen en interés o por utilidad particular.

Artículo 135

Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumeración de las servidumbres legales y a la regulación no convencional de las de aguas, paso, medianería, luces y vistas, desagüe de edificios, y distancias y obras intermedias para construcciones y plantaciones.

CAPÍTULO VII

De los registros de la propiedad.

Artículo 136

Son de orden público internacional las disposiciones que establecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen su necesidad respecto de terceros.

Artículo 137

Se inscribirán en los registros de la propiedad de cada uno de los Estados contratantes los documentos o títulos inscribibles otorgados en otro, que tengan fuerza en el primero con arreglo a este Código, y las ejecutorias a que de acuerdo con el mismo se dé cumplimiento en el Estado a que el registro corresponde, o tengan en él fuerza de cosa juzgada.

Artículo 138

Las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado, de las provincias o de los pueblos, son de orden público internacional.

Artículo 139

La hipoteca legal que algunas leyes acuerdan en beneficio de ciertas personas individuales, sólo será exigible cuando la ley personal concuerde con la ley del lugar en que se hallen situados los bienes afectados por ella.

TITULO TERCERO

DE VARIOS MODOS DE ADQUIRIR

CAPÍTULO I

De las donaciones

Artículo 140

Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de los cuales no haya en este Código disposiciones en contrario.

CAPÍTULO II

De las donaciones

Artículo 141

Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedarán sometidas, para su perfección y efectos entre vivos, a las reglas generales de los contratos.

Artículo 142

Se sujetará a la ley personal respectiva del donante y del donatario la capacidad de cada uno de ellos.

Artículo 143

Las donaciones que hayan de producir efecto por muerte del donante, participarán de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas internacionales establecidas en este Código para la sucesión testamentaria.

CAPÍTULO III

De las sucesiones en general

Artículo 144

Las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.

Artículo 145

Es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.

CAPÍTULO IV

De los testamentos

Artículo 146

La capacidad para disponer por testamento se regula por la ley personal del testador.

Artículo 147

Se aplicará la ley territorial a las reglas establecidas por cada Estado para comprobar que el testador demente está en un intervalo lúcido.

Artículo 148

Son de orden público internacional las disposiciones que no admiten el testamento mancomunado, el ológrafo y el verbal, y las que lo declaran acto personalísimo.

Artículo 149

También son de orden público internacional las reglas sobre forma de papeles privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorgado con violencia, dolo o fraude.

Artículo 150

Los preceptos sobre forma de los testamentos son de orden público internacional, con excepción de los relativos al testamento otorgado en el extranjero, y al militar y marítimo en los casos en que se otorgue fuera del país.

Artículo 151

Se sujetan a la ley personal del testador la procedencia, condiciones y efectos de la revocación de un testamento, pero la presunción de haberlo revocado se determina por la ley local.

CAPÍTULO V

De la herencia

Artículo 152

La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por la ley personal del heredero o legatario.

Artículo 153

No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, son de orden público internacional las incapacidades para suceder que los Estados contratantes consideren como tales.

Artículo 154

La institución de herederos y la sustitución se ajustarán a la ley personal del testador.

Artículo 155

Se aplicará, no obstante, el derecho local a la prohibición de sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo grado o que se hagan a favor de personas que no vivan al fallecimiento del testador y de las que envuelvan prohibición perpetua de enajenar.

Artículo 156

El nombramiento y las facultades de los albaceas o ejecutores testamentarios, dependen de la ley personal del difunto y deben ser reconocidos en cada uno de los Estados contratantes de acuerdo con esa ley.

Artículo 157

En la sucesión intestada, cuando la ley llame al Estado como heredero, en defecto de otros, se aplicará la ley personal del causante; pero si lo llama como ocupante de cosas *nullius* se aplica el derecho local.

Artículo 158

Las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda quede encinta, se sujetarán a lo dispuesto en la legislación del lugar en que se encuentre.

Artículo 159

Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficio de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar se ajustarán a la ley del lugar en que la sucesión se abra, bastando eso para sus efectos extraterritoriales.

Artículo 160

Es de orden público internacional el precepto que se refiera a la proindivisión ilimitada de la herencia o establezca la participación provisional.

Artículo 161

La capacidad para solicitar y llevar a cabo la división se sujeta a la ley personal del heredero.

Artículo 162

El nombramiento y las facultades del contador o perito partidor dependen de la ley personal del causante.

Artículo 163

A la misma ley se subordina el pago de las deudas hereditarias. Sin embargo, los acreedores que tuvieran garantía de carácter real, podrán hacerla efectiva de acuerdo con la ley que rija esa garantía.

TITULO CUARTO

DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

CAPÍTULO I

De las obligaciones en general.

Artículo 164

El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial.

Artículo 165

Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido.

Artículo 166

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este Código.

Artículo 167

Las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo derecho que el delito o falta de que procedan.

Artículo 168

Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine.

Artículo 169

La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, así como su extinción, se rigen por la ley de la obligación de que se trata.

Artículo 170

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la ley local regula las condiciones del pago y la moneda en que debe hacerse.

Artículo 171

También se somete a la ley del lugar la determinación de quién debe satisfacer los gastos judiciales que origine el pago, así como su regulación.

Artículo 172

La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su admisión y eficacia, a la ley que rija la obligación misma.

Artículo 173

La impugnación de la certeza del lugar del otorgamiento de un documento privado, si influye en su eficacia, podrá hacerse siempre por el tercero a quien perjudique, y la prueba estará a cargo de quien la aduzea.

Artículo 174

La presunción de cosa juzgada por sentencia extranjera será admisible, siempre que la sentencia reuna las condiciones necesarias para su ejecución en el territorio, conforme al presente Código.

CAPÍTULO II

(De los contratos en general)

Artículo 175

Son reglas de orden público internacional las que impiden establecer pactos, cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público y la que prohíbe el juramento y lo tiene por no puesto.

Artículo 176

Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que determinen la capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento.

Artículo 177

Se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación y el dolo, en relación con el consentimiento.

Artículo 178

Es también territorial toda regla que prohíbe que sean objeto de los contratos, servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y cosas que estén fuera del comercio.

Artículo 179

Son de orden público internacional las disposiciones que se refieren a causa ilícita en los contratos.

Artículo 180

Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y la de su ejecución, a la necesidad de otorgar escritura o documento público para la eficacia de determinados convenios y a la de hacerlos constar por escrito.

Artículo 181

La rescisión de los contratos por incapacidad o ausencia, se determina por la ley personal del ausente o incapacitado.

Artículo 182

Las demás causas de rescisión y su forma y efectos se subordinan a la ley territorial.

Artículo 183

Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarán a la ley de que la causa de la nulidad dependa.

Artículo 184

La interpretación de los contratos debe efectuarse, como regla general, de acuerdo con la ley que los rija.

Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determina en los artículos 186 y 187, aunque eso lleve a aplicar al contrato una ley distinta como resultado de la interpretación de voluntad.

Artículo 185

Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consignen para casos especiales, en los contratos de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara.

Artículo 186

En los demás contratos y para el caso previsto en el artículo anterior, se aplicará en primer término la ley personal común a los contratantes y en su defecto la del lugar de la celebración.

CAPÍTULO III

Del contrato sobre bienes con ocasión de matrimonio

Artículo 187

Este contrato se rige por la ley personal común de los contratantes y en su defecto por la del primer domicilio matrimonial.

Las propias leyes determinan, por ese orden, el régimen legal supletorio a falta de estipulación.

Artículo 188

Es de orden público internacional el precepto que veda celebrar capitulaciones durante el matrimonio, o modificarlas, o que se altere el régimen de bienes por cambios de nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo.

Artículo 189

Tienen igual carácter los preceptos que se refieren al mantenimiento de las leyes y las buenas costumbres, a los efectos de las capitulaciones respecto de terceros y a su forma solemne.

Artículo 190

La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las donaciones por razón de matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, a la salvaguardia de derechos legitimarios y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige, y siempre que no afecte el orden público internacional.

Artículo 191

Las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de la ley personal de la mujer.

Artículo 192

Es de orden público internacional la regla que repudia la inalienabilidad de la dote.

Artículo 193

Es de orden público internacional la prohibición de renunciar a la sociedad de gananciales durante el matrimonio.

CAPÍTULO IV

Compra-venta, cesión de crédito y permuto

Artículo 194

Son de orden público internacional las disposiciones relativas a enajenación forzosa por utilidad pública.

Artículo 195

Lo mismo sucede con las que fijan los efectos de la posesión y de la inscripción entre varios adquirentes, y las referentes al retracto legal.

CAPÍTULO V

Arrendamiento

Artículo 196

En el arrendamiento de cosas, debe aplicarse la ley territorial a las medidas para dejar a salvo el interés de terceros y a los derechos y deberes del comprador de finca arrendada.

Artículo 197

Es de orden público internacional, en el arrendamiento de servicios, la regla que impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto tiempo.

Artículo 198

También es territorial la legislación sobre accidentes del trabajo y protección social del trabajador.

Artículo 199

Son territoriales, en los transportes por agua, tierra y aire, las leyes y reglamentos locales especiales.

CAPÍTULO VI

Censos

Artículo 200

Se aplica la ley territorial a la determinación del concepto y clases de los censos, a su carácter redimible, a su prescripción, y a la acción real que de ellos se deriva.

Artículo 201

Para el censo enfitéutico son asimismo territoriales las disposiciones que fijan sus condiciones y formalidades, que imponen un reconocimiento cada cierto número de años y que prohíben la subenfiteusis.

Artículo 202

En el censo consignativo, es de orden público internacional la regla que prohíbe que el pago en frutos pueda consistir en una parte alícuota de los que produzca la finca acensuada.

Artículo 203

Tiene en el mismo carácter en el censo reservativo la exigencia de que se valorice la finca acensuada.

CAPÍTULO VII

Sociedad

Artículo 204

Son leyes territoriales las que exigen un objeto lícito, formas solemnes, e inventario cuando hay inmuebles.

CAPÍTULO VIII

Préstamo.

Artículo 205

Se aplica la ley local a la necesidad del pacto expreso de intereses y a su tasa.

CAPÍTULO IX

Depósito

Artículo 206

Son territoriales las disposiciones referentes al depósito necesario y al secuestro.

CAPÍTULO X

Contratos aleatorios

Artículo 207

Los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato de juego, se determinan por la ley personal del interesado.

Artículo 208

La ley local define los contratos de suerte y determina el juego y la apuesta permitidos o prohibidos.

Artículo 209

Es territorial la disposición que declara nula la renta vitalicia sobre la vida de una persona, muerta a la fecha del otorgamiento, o dentro de un plazo si se halla padeciendo de enfermedad incurable.

CAPÍTULO XI

Transacciones y compromisos

Artículo 210

Son territoriales las disposiciones que prohíben transigir o sujetar a compromiso determinadas materias.

Artículo 211

La extensión y efectos del compromiso y la autoridad de cosa juzgada de la transacción, dependen también de la ley territorial.

CAPÍTULO XII

De la fianza

Artículo 212

Es de orden público internacional la regla que prohíbe al fiador obligarse a más que el deudor principal.

Artículo 213

Corresponden a la misma clase las disposiciones relativas a la fianza legal o judicial.

CAPÍTULO XIII

Prenda, hipoteca y anticresis

Artículo 214

Es territorial la disposición que prohíbe al acreedor apropiarse las cosas recibidas en prenda o hipoteca.

Artículo 215

Lo son también los preceptos que señalan los requisitos esenciales del contrato de prenda, y con ellos debe cumplirse cuando la cosa pignorada se traslade a un lugar donde sean distintos de los exigidos al constituirlo.

Artículo 216

Igualmente son territoriales las prescripciones en cuya virtud la prenda deba quedar en poder del acreedor o de un tercero, la que requiere para perjudicar a extraños que conste por instrumento público la certeza de la fecha y la que fija el procedimiento para su enajenación.

Artículo 217

Los reglamentos especiales de los Montes de Piedad y establecimientos públicos análogos, son obligatorios territorialmente para todas las operaciones que con ellos se realicen.

Artículo 218

Son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condiciones, requisitos, alcance e inscripción del contrato de hipoteca.

Artículo 219

Lo es asimismo la prohibición de que el acreedor adquiera la propiedad del inmueble en la anticresis, por falta de pago de la deuda.

CAPÍTULO XIV

Cuasi-contratos

Artículo 220

La gestión de negocios ajenos se regula por la ley del lugar en que se efectúa.

Artículo 221

El cobro de lo indebido se somete a la ley personal común de las partes y, en su defecto, a la del lugar en que se hizo el pago.

Artículo 222

Los demás cuasi-contratos se sujetan a la ley que regule la institución jurídica que los origine.

CAPÍTULO XV

Concurrencia y prelación de créditos

Artículo 223

Si las obligaciones concurrentes no tienen carácter real y están sometidas a una ley común, dicha ley regulará también su prelación.

Artículo 224

Para las garantías con acción real, se aplicará la ley de la situación de la garantía.

Artículo 225

Fuera de los casos previstos en los artículos anteriores, debe aplicarse a la prelación de créditos la ley del tribunal que haya de decidirla.

Artículo 226

Si la cuestión se planteare simultáneamente en tribunales de Estados diversos, se resolverá de acuerdo con la ley de aquel que tenga realmente bajo su jurisdicción los bienes o numerario en que haya de hacerse efectiva la prelación.

CAPÍTULO XVI

Prescripción

Artículo 227

La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar en que estén situados.

Artículo 228

Si las cosas muebles cambiasen de situación estando en camino de prescribir, se regirá la prescripción por la ley del lugar en que se encuentren al completarse el tiempo que requiera.

Artículo 229

La prescripción extintiva de acciones personales se rige por la ley a que esté sujeta la obligación que va a extinguirse.

Artículo 230

La prescripción extintiva de acciones reales se rige por la ley del lugar en que esté situada la cosa a que se refiera.

Artículo 231

Si en el caso previsto en el artículo anterior se tratase de cosas muebles y hubieren cambiado de lugar durante el plazo de prescripción, se aplicará la ley del lugar en que se encuentren al cumplirse allí el término señalado para prescribir.

LIBRO SEGUNDO

DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

TITULO PRIMERO

DE LOS COMERCIANTES Y DEL COMERCIO EN GENERAL

CAPÍTULO I

De los comerciantes

Artículo 232

La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles, se regula por la ley personal de cada interesado.

Artículo 233

A la misma ley personal se subordina las incapacidades y su habilitación.

Artículo 234

La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe aplicarse a las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por medio de sus representantes los incapacitados, o por sí las mujeres casadas.

Artículo 235

La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el ejercicio del comercio de los empleados públicos y de los agentes de comercio y corredores.

Artículo 236

Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o disposiciones especiales en determinado territorio, se regirá por el derecho del mismo.

Artículo 237

Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos y agentes consulares, se apreciará por la ley del Estado que los nombra. El país en que residen tiene igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio del comercio.

Artículo 238

El contrato social y en su caso la ley a que esté sujeto se aplica a la prohibición de que los socios colectivos o comanditarios realicen operaciones mercantiles, o cierta clase de ellas, por cuenta propia o de otros.

CAPÍTULO II

De la cualidad de comerciante y de los actos de comercio

Artículo 239

Para todos los efectos de carácter público, la cualidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto o ejercido la industria de que se trate.

Artículo 240

La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley territorial.

CAPÍTULO III

Del Registro Mercantil

Artículo 241

Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en el Registro Mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeros.

Artículo 242

Tienen el mismo carácter las reglas que señalan el efecto de la inscripción en dicho Registro de créditos o derechos de terceros.

CAPÍTULO IV

Lugares y casas de contratación mercantil y cotización oficial de efectos públicos y documentos de crédito al portador

Artículo 243

Las disposiciones relativas a los lugares y casas de contratación mercantil y cotización oficial de efectos públicos y documentos de crédito al portador, son de orden público internacional.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales sobre los contratos de comercio

Artículo 244

Se aplicarán a los contratos de comercio las reglas generales establecidas para los contratos civiles en el capítulo segundo, título cuarto, libro primero de este Código.

Artículo 245

Los contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados sino mediante el cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la legislación de todos los contratantes.

Artículo 246

Son de orden público internacional las disposiciones relativas a contratos ilícitos y a términos de gracia, cortesía u otros análogos.

TITULO SEGUNDO

DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO

CAPÍTULO I

De las compañías mercantiles

Artículo 247

El carácter mercantil de una sociedad colectiva o comanditaria se determina por la ley a que esté sometido el contrato social, y en su defecto por la del lugar en que tenga su domicilio comercial.

Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles, se aplicará el derecho del país en que la cuestión se someta a juicio.

Artículo 248

El carácter mercantil de una sociedad anónima depende de la ley del contrato social; en su defecto, de la del lugar en que celebre las juntas generales de accionistas y por su falta de la de aquel en que residan normalmente su Consejo o Junta Directiva.

Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles, tendrá uno u otro carácter según que esté o no inscrita en el Registro Mercantil del país donde la cuestión haya de juzgarse. A falta de Registro Mercantil se aplicará el derecho local de este último país.

Artículo 249

Lo relativo a la constitución y manera de funcionar de las sociedades mercantiles y a la responsabilidad de sus órganos, está sujeto al contrato social y en su caso a la ley que lo rija.

Artículo 250

La emisión de acciones y obligaciones en un Estado contratante, las formas y garantías de publicidad y la responsabilidad de los gestores de agencias y sucursales respecto de terceros, se someten a la ley territorial.

Artículo 251

Son también territoriales las leyes que subordinen la sociedad a un régimen especial por razón de sus operaciones.

Artículo 252

Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un Estado contratante disfrutarán de la misma personalidad jurídica en los demás, salvo las limitaciones del derecho territorial.

Artículo 253

Son territoriales las disposiciones que se refieran a la creación, funcionamiento y privilegios de los bancos de emisión y descuento, compañías de almacenes generales de depósitos y otras análogas.

CAPÍTULO II

De la comisión mercantil

Artículo 254

Son de orden público internacional las prescripciones relativas a la forma de la venta urgente por el comisionista para salvar en lo posible el valor de las cosas en que la comisión consista.

Artículo 255

Las obligaciones del factor se sujetan a la ley del domicilio mercantil del mandante.

CAPÍTULO III

Del depósito y préstamo mercantiles

Artículo 256

Las responsabilidades no civiles del depositario se rigen por la ley del lugar del depósito.

Artículo 257

La tasa o libertad del interés mercantil son de orden público internacional.

Artículo 258

Son territoriales las disposiciones referentes al préstamo con garantía de efectos cotizables, hecho en bolsa, con intervención de agente colegiado o funcionario oficial.

CAPÍTULO IV

Del transporte terrestre

Artículo 259

En los casos de transporte internacional no hay más que un contrato, regido por la ley que le corresponda según su naturaleza.

Artículo 260

Los plazos y formalidades para el ejercicio de acciones surgidas de este contrato y no previstas en el mismo, se rigen por la ley del lugar en que se produzcan los hechos que las originen.

CAPÍTULO V

De los contratos de seguro

Artículo 261

El contrato de seguro contra incendios se rige por la ley del lugar donde radique, al efectuarlo, la cosa asegurada.

Artículo 262

Los demás contratos de seguro siguen la regla general, regulándose por la ley personal común de las partes o en su defecto por la del lugar de la celebración; pero las formalidades externas para comprobar hecho u omisiones necesarios al ejercicio o a la conservación de acciones o derechos, se sujetan a la ley del lugar en que se produzca el hecho o la omisión que les hace surgir.

CAPÍTULO VI

Del contrato y letra de cambio y efectos mercantiles análogos

Artículo 263

La forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice.

Artículo 264

A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre el librador y el tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira.

Artículo 265

En igual caso, las obligaciones y derechos entre el aceptante y el portador se regulan por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación.

Artículo 266

En la misma hipótesis, los efectos jurídicos que el endoso produce entre endosante, y endosatario, dependen de la ley del lugar en que la letra ha sido endosada.

Artículo 267

La mayor o menor extensión de las obligaciones de cada endosante, no altera los derechos y deberes originarios del librador y el tomador.

Artículo 268

El aval, en las propias condiciones, se rige por la ley del lugar en que se presta.

Artículo 269

Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regulan, a falta de pacto, por la ley del lugar en que el tercero interviene.

Artículo 270

Los plazos y formalidades para la aceptación, el pago y el protesto, se someten a la ley local.

Artículo 271

Las reglas de este capítulo son aplicables a las libranzas, vales, pagarés y mandatos o cheques.

CAPÍTULO VII

De la falsedad, robo, hurto o extravío de documentos de crédito y efectos al portador.

Artículo 272

Las disposiciones relativas a la falsedad, robo, hurto o extravío de documentos de crédito y efectos al portador son de orden público internacional.

Artículo 273

La adopción de las medidas que establezca la ley del lugar en que el hecho se produce, no dispensa a los interesados de tomar cualesquiera otra que establezca la ley del lugar en que esos documentos y efectos se coticen y la del lugar de su pago.

TITULO TERCERO

DEL COMERCIO MARÍTIMO Y AÉREO

CAPÍTULO I

De los buques y aeronaves

Artículo 274

La nacionalidad de las naves se prueba por la patente de navegación y la certificación del registro, y tiene el pabellón como signo distintivo aparente.

Artículo 275

La ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas para la transmisión de la propiedad de una nave.

Artículo 276

A la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar y vender judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada.

Artículo 277

Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la venta de la nave, y la extinción de los mismos

Artículo 278

La hipoteca marítima y los privilegios o seguridades de carácter real constituidos de acuerdo con la ley del pabellón, tienen efectos extraterritoriales aun en aquellos países cuya legislación no conozca o regule esa hipoteca o esos privilegios.

Artículo 279

Se sujetan también a la ley del pabellón los poderes y obligaciones del capitán y la responsabilidad de los propietarios y navieros por sus actos.

Artículo 280

El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía sanitaria, dependen de la ley territorial.

Artículo 281

Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden interno del buque, se sujetan a la ley del pabellón.

Artículo 282

Las disposiciones precedentes de este capítulo se aplican también a las aeronaves.

Artículo 283

Son de orden público internacional las reglas sobre nacionalidad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, así como de los oficiales y la tripulación.

Artículo 284

También son de orden público internacional las disposiciones sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje o entre determinados lugares del territorio de los Estados contratantes, así como para la pesca y otros aprovechamientos submarinos en el mar territorial.

CAPÍTULO II

De los contratos especiales del comercio marítimo y aéreo

Artículo 285

El fletamento, si no fuere un contrato de adhesión, se regirá por la ley del lugar de salida de las mercancías.

Los actos de ejecución del contrato se ajustarán a la ley del lugar en que se realicen.

Artículo 286

Las facultades del capitán para el préstamo a la gruesa se determinan por la ley del pabellón.

Artículo 287

El contrato de préstamo a la gruesa, salvo pacto en contrario, se sujeta a la ley del lugar en que el préstamo se efectúa.

Artículo 288

Para determinar si la avería es simple o gruesa y la proporción en que contribuyen a soportarla la nave y el cargamento, se aplica la ley del pabellón.

Artículo 289

El abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional se somete a la ley del pabellón si fuere común.

Artículo 290

En el propio caso, si los pabellones difieren, se aplica la ley del lugar.

Artículo 291

La propia ley local se aplica en todo caso al abordaje culpable en aguas territoriales o aire nacional.

Artículo 292

Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se le aplica la ley del pabellón si todos los buques o aeronaves tuvieran el mismo.

Artículo 293

En su defecto, se regulará por el pabellón del buque o aeronave abordados, si el abordaje fuere culpable.

Artículo 294

En los casos de abordaje fortuito en alta mar o aire libre, entre naves o aeronaves de diferente pabellón cada una soportará la mitad de la suma total del daño, repartido según la ley de una de ellas, y la mitad restante repartida según la ley de la otra.

TITULO CUARTO

DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 295

La prescripción de las acciones nacidas de los contratos y actos mercantiles, se ajustará a las reglas establecidas en este Código respecto de las acciones civiles.

LIBRO TERCERO

DERECHO PENAL INTERNACIONAL

CAPÍTULO I

De las leyes penales

Artículo 296

Las leyes penales obligan a todos los que residen en el territorio, sin más excepciones que las establecidas en este capítulo.

Artículo 297

Están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante los Jefes de los otros Estados, que se encuentren en su territorio.

Artículo 298

Gozan de igual exención los Representantes diplomáticos de los Estados contratantes en cada uno de los demás, así como sus empleados extranjeros, y las personas de la familia de los primeros, que vivan en su compañía.

Artículo 299

Tampoco son aplicables las leyes penales de un Estado a los delitos cometidos en el perímetro de las operaciones militares, cuando autorice el paso por su territorio de un ejército de otro Estado contratante, salvo que no tengan relación legal con dicho ejército.

Artículo 300

La misma exención se aplica a los delitos cometidos en aguas territoriales o en el aire nacional, a bordo de naves o aeronaves extranjeras de guerra.

Artículo 301

Lo propio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales o aire nacional en naves o aeronaves mercantes extranjeras, si no tienen relación alguna con el país y sus habitantes ni perturban su tranquilidad.

Artículo 302

Cuando los actos de que se componga un delito se realicen en Estados contratantes diversos, cada Estado puede castigar el acto realizado en su país, si constituye por sí solo un hecho punible.

De lo contrario, se dará preferencia al derecho de la soberanía local en que el delito se haya consumado.

Artículo 303

Si se trata de delitos conexos en territorios de más de un Estado contratante, sólo estará sometido a la ley penal de cada uno el cometido en su territorio.

Artículo 304

Ningún Estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás.

CAPÍTULO II

Delitos cometidos en un Estado extranjero contratante

Artículo 305

Están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada Estado contratante, los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa del mismo o contra su crédito público, sea cual fuere la nacionalidad o el domicilio del delincuente.

Artículo 306

Todo nacional de un Estado contratante o todo extranjero domiciliado en él, que cometa en el extranjero un delito contra la independencia de ese Estado, queda sujeto a sus leyes penales.

Artículo 307

También estarán sujetos a las leyes penales del Estado extranjero en que puedan ser aprehendidos y juzgados, los que cometan fuera del territorio un delito, como la trata de blancas, que ese Estado contratante se haya obligado a reprimir por un acuerdo internacional.

CAPÍTULO III

Delitos cometidos fuera de todo territorio nacional

Artículo 308

La piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el derecho internacional, cometidos en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados aún en Estado, se castigarán por el captor de acuerdo con sus leyes penales.

Artículo 309

En los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire, entre naves o aeronaves de distinto pabellón, se aplicará la ley penal de la víctima.

CAPÍTULO IV

Cuestiones varias

Artículo 310

Para el concepto legal de la reiteración o de la reincidencia, se tendrá en cuenta la sentencia dictada en un Estado extranjero contratante, salvo los casos en que opusiere la legislación local.

Artículo 311

La pena de interdicción civil tendrá efecto en los otros Estados mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos.

Artículo 312

La prescripción del delito se subordina a la ley del Estado a que corresponda su conocimiento.

Artículo 313

La prescripción de la pena se rige por la ley del Estado que la ha impuesto.

LIBRO CUARTO

DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL

TITULO PRIMERO

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 314

La ley de cada Estado contratante determina la competencia de los Tribunales, así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias y los recursos contra sus decisiones.

Artículo 315

Ningún Estado contratante organizará o mantendrá en su territorio tribunales especiales para los miembros de los demás Estados contratantes.

Artículo 316

La competencia *ratione loci* se subordina, en el orden de las relaciones internacionales, a la ley del Estado contratante que la establece.

Artículo 317

La competencia *ratione materiae* y *ratione personae*, en el orden de las relaciones internacionales, no debe basarse por los Estados contratantes en la condición de nacionales o extranjeras de las personas interesadas, en perjuicio de éstas.

TITULO SEGUNDO

COMPETENCIA

CAPÍTULO I

De las reglas generales de competencia en lo civil y mercantil

Artículo 318

Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan

expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario.

La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de su situación.

Artículo 319

La sumisión sólo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo grado.

Artículo 320

En ningún caso podrán las partes someterse expresa o tácitamente para un recurso a juez o tribunal diferente de aquel a quien esté subordinado, según las leyes locales, el que haya conocido en primera instancia.

Artículo 321

Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se sometan.

Artículo 322

Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía.

Artículo 323

Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligación o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia.

Artículo 324

Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles, será competente el juez de la situación, y si no fuere conocida del demandante, el del domicilio, y en su defecto el de la residencia del demandado.

Artículo 325

Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, será juez competente el de la situación de los bienes.

Artículo 326

Si en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores hubiere bienes situados en más de un Estado contratante, podrá acudirse a los jueces de cualquiera de ellos, salvo que lo prohíba para los inmuebles la ley de la situación.

Artículo 327

En los juicios de testamentaría o abintestato será juez competente el del lugar en que tuvo el finado su último domicilio.

Artículo 328

En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en ese estado, será juez competente el de su domicilio.

Artículo 329

En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso de estar entre ellos, el del domicilio del deudor, si éste o la mayoría de los acreedores lo reclamasen.

Artículo 330

Para los actos de jurisdicción voluntaria y salvo también el caso de sumisión y el derecho local, será competente el juez del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio, o en su defecto, la residencia, la persona que los motive.

Artículo 331

Respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio y fuera del caso de sumisión y salvo el derecho local, será competente el juez del lugar en que la obligación deba cumplirse o, en su defecto, el del lugar del hecho que los origine.

Artículo 332

Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente de los diversos jueces se ajustará a su derecho nacional.

CAPÍTULO II

Excepciones a las reglas generales de competencia en lo civil y en lo mercantil.

Artículo 333

Los jueces y tribunales de cada Estado contratante serán incompetentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás Estados contratantes o sus Jefes, si se ejerce una acción personal, salvo el caso de sumisión expresa o de demandas reconvencionales.

Artículo 334

En el mismo caso y con la propia excepción, serán incompetentes cuando se ejercent acciones reales, si el Estado contratante o su Jefe han actuado en el asunto como tales y en su carácter público, debiendo aplicarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 318.

Artículo 335

Si el Estado extranjero contratante o su Jefe han actuado como particulares o personas privadas, serán competentes los jueces o tribunales para conocer de los asuntos en que se ejercent acciones reales o mixtas, si esta competencia les corresponde conforme a este Código.

Artículo 336

La regla del artículo anterior será aplicable a los juicios universales sea cual fuere el carácter con que en ellos actúen el Estado extranjero contratante o su Jefe.

Artículo 337

Las disposiciones establecidas en los artículos anteriores, se aplicarán a los funcionarios diplomáticos extranjeros y a los comandantes de buques o aeronaves de guerra.

Artículo 338

Los Cónsules extranjeros no estarán exentos de la competencia de los jueces y tribunales civiles del país en que actúen, sino para sus actos oficiales.

Artículo 339

En ningún caso podrán adoptar los jueces o tribunales medidas coercitivas o de otra clase que hayan de ser ejecutadas en el interior de las Legaciones o Consulados o sus archivos, ni respecto de la correspondencia diplomática o consular, sin el consentimiento de los respectivos funcionarios diplomáticos o consulares.

CAPÍTULO III

Reglas generales de competencia en lo penal

Artículo 340

Para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competentes los jueces y tribunales del Estado contratante en que se hayan cometido.

Artículo 341

La competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas a que haya de aplicarse la ley penal del Estado conforme a las disposiciones de este Código.

Artículo 342

Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidas en el extranjero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio de inmunidad.

CAPÍTULO IV

Excepciones a las reglas generales de competencia en materia penal.

Artículo 343

No están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los Estados contratantes, las personas y los delitos y faltas a que no alcanza la ley penal del respectivo Estado.

TITULO TERCERO

DE LA EXTRADICIÓN

Artículo 344

Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición.

Artículo 345

Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo.

Artículo 346

Cuando, con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado o condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se le juzgue y cumpla la pena.

Artículo 347

Si varios Estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente por el mismo delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se haya cometido.

Artículo 348

Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el Estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, según la legislación del Estado requerido.

Artículo 349

Si todos los hechos imputados tuvieran igual gravedad, será preferido el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradición. De ser simultáneas, decidirá el Estado requerido, pero debe conceder la preferencia al Estado de origen o, en su defecto, al del domicilio del delincuente, si fuere uno de los solicitantes.

Artículo 350

Las anteriores reglas sobre preferencia no serán aplicables si el Estado contratante estuviere obligado con un tercero, a virtud de tratados vigentes anteriores a este Código, a establecerla de un modo distinto.

Artículo 351

Para conceder la extradición, es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables sus leyes penales de acuerdo con el libro tercero de este Código.

Artículo 352

La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores, cómplices o encubridores de delito.

Artículo 353

Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de delito en la legislación del Estado requirente y en la del requerido.

Artículo 354

Asimismo se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados, según su calificación provisional o definitiva por el juez o tribunal competente del Estado que solicita la extradición, no sea menor de un año de privación de libertad y que esté autorizada o acordada la prisión o detención preventiva del procesado, si no hubiere aún sentencia firme. Esta debe ser de privación de libertad.

Artículo 355

Están excluidos de la extradición los delitos políticos y conexos, según la calificación del Estado requerido.

Artículo 356

Tampoco se acordará, si se probare que la petición de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter político, según la misma calificación.

Artículo 357

No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o asesinato del Jefe de un Estado contratante o de cualquiera persona que en él ejerza autoridad.

Artículo 358

No será concedida la extradición si la persona reclamada ha sido ya juzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la pena, o está pendiente de juicio, en el territorio del Estado requerido, por el mismo delito que motiva la solicitud.

Artículo 359

Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la pena conforme a las leyes del Estado requirente o del requerido.

Artículo 360

La legislación del Estado requerido posterior al delito, no podrá impedir la extradición.

Artículo 361

Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes consulares, pueden pedir que se arreste y entregue a bordo de un buque o aeronave de su país, a los oficiales, marinos o tripulantes de sus naves o aeronaves de guerra o mercantes, que hubiesen desertado de ellas.

Artículo 362

Para los efectos del artículo anterior, exhibirán a la autoridad local correspondiente, dejándole además copia auténtica, los registros del buque o aeronave, rol de la tripulación o cualquier otro documento oficial en que la solicitud se funde.

Artículo 363

En los países limítrofes podrán pactarse reglas especiales para la extradición en las regiones o localidades de la frontera.

Artículo 364

La solicitud de la extradición debe hacerse por conducto de los funcionarios debidamente autorizados para eso por las leyes del Estado requirente.

Artículo 365

Con la solicitud definitiva de extradición deben presentarse:

I.—Una sentencia condenatoria o un mandamiento o auto de prisión o un documento de igual fuerza, o que obligue al interesado a comparecer periódicamente ante la jurisdicción represiva, acompañado de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate.

II.—La filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan servir para identificarlo.

III.—Copia auténtica de las disposiciones que establezcan la calificación legal del hecho que motiva la solicitud de entrega, definan la participación atribuída en él al inculpado y precisen la pena aplicable.

Artículo 366

La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese caso, los documentos mencionados en el artículo anterior se presentarán al país requerido o a su Legación o Consulado general en el país requirente, dentro de los dos meses siguientes a la detención del inculpado. En su defecto será puesto en libertad.

Artículo 367

Si el Estado requirente no dispone de la persona reclamada dentro de los tres meses siguientes a haber quedado a sus órdenes, será puesta también en libertad.

Artículo 368

El detenido podrá utilizar, en el Estado a que se haga la solicitud de extradición, todos los medios legales concedidos a los nacionales para recobrar su libertad, fundando su ejercicio en las disposiciones de este Código.

Artículo 369

También podrá el detenido, a partir de ese hecho, utilizar los recursos legales que procedan, en el Estado que pida la extradición, contra las calificaciones y resoluciones en que se funde.

Artículo 370

La entrega debe hacerse con todos los objetos que se encontraren en poder de la persona reclamada, ya sean producto del delito imputado, ya piezas que puedan servir para la prueba del mismo, en cuanto fuere practicable con arreglo a las leyes del Estado que la efectúa, y respetando debidamente los derechos de tercero.

Artículo 371

La entrega de los objetos a que se refiere el artículo anterior, podrá hacerse, si la pidiere el Estado solicitante de la extradición, aunque el detenido muera o se evada antes de efectuarla.

Artículo 372

Los gastos de detención y entrega serán de cuenta del Estado requirente, pero no tendrá que sufragar ninguno por los servicios que prestaren los empleados públicos con sueldo del Gobierno a quien se pida la extradición.

Artículo 373

El importe de los servicios prestados por empleados públicos u oficiales que sólo perciban derechos o emolumentos, no excederá de los que habitualmente cobraren por esas diligencias o servicios según las leyes del país en que residan.

Artículo 374

Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la detención provisional, será de cargo del Estado que la solicite.

Artículo 375

El tránsito de la persona extraditada y de sus custodios por el territorio de un tercer Estado contratante, se permitirá mediante la exhibición del ejemplar original o de una copia auténtica del documento que concede la extradición.

Artículo 376

El Estado que obtenga la extradición de un acusado que fuere luego absuelto, estará obligado a comunicar al que la concedió una copia auténtica del fallo.

Artículo 377

La persona entregada no podrá ser detenida en prisión ni juzgada por el Estado contratante a quien se entregue, por un delito distinto del que hubiere motivado la extradición y cometido con anterioridad a la misma, salvo que consienta en ello el Estado requerido, o que permanezca el extraditado libre en el primer tres meses después de juzgado y absuelto por el delito que originó la extradición o de cumplida la pena de privación de libertad impuesta.

Artículo 378

En ningún caso se impondrá o ejecutará la pena de muerte por el delito que hubiese sido causa de la extradición.

Artículo 379

Siempre que proceda el abono de la prisión preventiva, se computará como tal el tiempo transcurrido desde la detención del extraditado en el Estado a quien se le haya pedido.

Artículo 380

El detenido será puesto en libertad, si el Estado requirente no presentase la solicitud de extradición en un plazo razonable, dentro del menor tiempo posible, habida cuenta de la distancia y las facilidades de comunicaciones postales entre los dos países, después del arresto provisional.

Artículo 381

Negada la extradición de una persona, no se puede volver a solicitar por el mismo delito.

TITULO CUARTO

DEL DERECHO DE COMPARCER EN JUICIO Y SUS MODALIDADES

Artículo 382

Los nacionales de cada Estado contratante gozarán en cada uno de los otros del beneficio de defensa por pobre, en las mismas condiciones que los naturales.

Artículo 383

No se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los Estados contratantes en cuanto a la prestación de la fianza para comparecer en juicio.

Artículo 384

Los extranjeros pertenecientes a un Estado contratante, podrán ejercitar en los demás la acción pública en materia penal, en iguales condiciones que los nacionales.

Artículo 385

Tampoco necesitarán esos extranjeros prestar fianza para querellarse por acción privada, en los casos en que no se exija a los nacionales.

Artículo 386

Ninguno de los Estados contratantes impondrá a los nacionales de otro la caución *judicio sisti* o el *onus probandi*, en los casos en que no se exijan a sus propios naturales.

Artículo 387

No se autorizarán embargos preventivos, ni fianza de cárcel segura ni otras medidas procesales de índole análoga, respecto de los nacionales de los Estados contratantes, por su sola condición de extranjeros.

TITULO QUINTO

EXHORTOS O COMISIONES ROGATORIAS

Artículo 388

Toda diligencia judicial que un Estado contratante necesite practicar en otro, se efectuará mediante exhorto o comisión rogatoria cursados por la vía diplomática. Sin embargo, los Estados contratantes podrán pactar o aceptar entre sí en materia civil o criminal cualquier otra forma de trasmisión.

Artículo 389

Al juez exhortante corresponde decidir respecto a su competencia y a la legalidad y oportunidad del acto o prueba, sin perjuicio de la jurisdicción del juez exhortado.

Artículo 390

El juez exhortado resolverá sobre su propia competencia *ratione materiae* para el acto que se le encarga.

Artículo 391

El que reciba el exhorto o comisión rogatoria debe ajustarse en cuanto a su objeto a la ley del comitente y en cuanto a la forma de cumplirlo a la suya propia.

Artículo 392

El exhorto será redactado en la lengua del Estado exhortante y será acompañado de una traducción hecha en la lengua del Estado exhortado, debidamente certificada por intérprete juramentado.

Artículo 393

Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas rogatorias de naturaleza privada deberán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos que estos apoderados y las diligencias ocasionen.

TITULO SEXTO

EXCEPCIONES QUE TIENEN CARÁCTER INTERNACIONAL

Artículo 394

La litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes, podrá alegarse en materia civil cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos haya de producir en el otro los efectos de cosa juzgada.

Artículo 395

En asuntos penales no podrá alegarse la excepción de litis pendencia por causa pendiente en otro Estado contratante.

Artículo 396

La excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de otro Estado contratante, sólo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia con la comparecencia de las partes o de sus representantes legítimos, sin que se haya suscitado cuestión de competencia del tribunal extranjero basada en disposiciones de este Código.

Artículo 397

En todos los casos de relaciones jurídicas sometidas a este Código, podrán promoverse cuestiones de competencia por declinatoria fundada en sus preceptos.

TITULO SEPTIMO

DE LA PRUEBA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales sobre la prueba

Artículo 398

La ley que rija el delito o la relación de derecho objeto del juicio civil o mercantil, determina a quién incumbe la prueba.

Artículo 399

Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse en cada caso, es competente la ley del lugar en que se ha realizado el acto o hecho que se trate de probar, exceptuándose los no autorizados por la ley del lugar en que se sigue el juicio.

Artículo 400

La forma en que ha de practicarse toda prueba se regula por la ley vigente en el lugar en que se lleva a cabo.

Artículo 401

La apreciación de la prueba depende de la ley del juzgador.

Artículo 402

Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes:

1.—Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza;

2.—Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley personal;

3.—Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos;

4.—Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea.

Artículo 403

La fuerza ejecutiva de un documento se subordina al derecho local.

Artículo 404

La capacidad de los testigos y su recusación dependen de la ley a que se someta la relación de derecho objeto del juicio.

Artículo 405

La forma del juramento se ajustará a la ley del juez o tribunal ante quien se preste y su eficacia a la que rija el hecho sobre el cual se jura.

Artículo 406

Las presunciones derivadas de un hecho se sujetan a la ley del lugar en que se realiza el hecho de que nacen.

Artículo 407

La prueba indiciaria depende de la ley del juez o tribunal.

CAPÍTULO II

Reglas especiales sobre la prueba de leyes extranjeras

Artículo 408

Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere.

Artículo 409

La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada.

Artículo 410

A falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquier razón la estimaren insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía diplomática, que el Estado de cuya legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho aplicable.

Artículo 411

Cada Estado contratante se obliga a suministrar a los otros, en el más breve plazo posible, la información a que el artículo anterior se refiere y que deberá proceder de su Tribunal Supremo o de cualquiera de sus Salas o Secciones, o del Ministerio Fiscal, o de la Secretaría o Ministerio de Justicia.

TITULO OCTAVO

DEL RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 412

En todo Estado contratante donde exista el recurso de casación o la institución correspondiente, podrá interponerse por infracción, interpretación errónea o aplicación indebida de una ley de otro Estado contratante, en las mismas condiciones y casos que respecto del derecho nacional.

Artículo 413

Serán aplicables al recurso de casación las reglas establecidas en el capítulo segundo del título anterior, aunque el juez o tribunal inferior haya hecho ya uso de ellas.

TITULO NOVENO

DE LA QUIEBRA O CONCURSO

CAPÍTULO I

Unidad de la quiebra o concurso

Artículo 414

Si el deudor concordatario concursado o quebrado no tiene más que un domicilio civil o mercantil, no puede haber más que un juicio de procedimientos preventivos de concurso o quiebra, o una suspensión de pagos, o quita y espera, para todos sus bienes y todas sus obligaciones en los Estados contratantes.

Artículo 415

Si una misma persona o sociedad tuviere en más de un Estado contratante varios establecimientos mercantiles enteramente separados económicamente, puede haber tantos juicios de procedimientos preventivos y de quiebra como establecimientos mercantiles.

CAPÍTULO II

Universalidad de la quiebra o concurso, y sus efectos

Artículo 416

La declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado tiene en los Estados contratantes efectos extraterritoriales mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos.

Artículo 417

El auto de declaratoria de quiebra o concurso dictado en uno de los Estados contratantes, se ejecutará en los otros en los casos y forma establecidos en este Código para las resoluciones judiciales; pero producirá, desde que quede firme y para las personas respecto de las cuales lo estuviere, los efectos de cosa juzgada.

Artículo 418

Las facultades y funciones de los Síndicos nombrados en uno de los Estados contratantes con arreglo a las disposiciones de este Código, tendrán efecto extraterritorial en los demás, sin necesidad de trámite alguno local.

Artículo 419

El efecto retroactivo de la declaración de quiebra o concurso y la anulación de ciertos actos por consecuencia de esos juicios, se determinarán por la ley de los mismos y serán aplicables en el territorio de los demás Estados contratantes.

Artículo 420

Las acciones reales y los derechos de la misma índole continuarán sujetos, no obstante la declaración de quiebra o concurso, a la ley de la situación de las cosas a que afecten y a la competencia de los jueces del lugar en que éstas se encuentren.

CAPÍTULO III

Del convenio y la rehabilitación

Artículo 421

El convenio entre los acreedores y el quebrado o concursado, tendrá efectos extraterritoriales en los demás Estados contratantes, salvo el derecho de los acreedores por acción real que no lo hubiesen aceptado.

Artículo 422

La rehabilitación del quebrado tiene también eficacia extra-territorial en los demás Estados contratantes, desde que quede firme la resolución judicial en que se disponga, y conforme a sus términos.

TITULO DECIMO

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS

CAPÍTULO I

Materia civil

Artículo 423

Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reune las siguientes condiciones:

- 1.—Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado;
- 2.—Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio;
- 3.—Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que quiere ejecutarse.
- 4.—Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;
- 5.—Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado;
- 6.—Que el documento en que conste reuna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.

Artículo 424

La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legislación interior.

Artículo 425

Contra la resolución judicial, en el caso a que el artículo anterior se refiere se otorgarán todos los recursos que las leyes de ese Estado concedan respecto de las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía.

Artículo 426

El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla, y por término de 20 días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal o Ministerio Público.

Artículo 427

La citación de la parte a quien deba oírse se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en este Código, si tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante, o en la forma establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el Estado requerido.

Artículo 428

Pasado el término que el juez o tribunal señale para la comparecencia, continuará la marcha del asunto, haya o no comparecido el citado.

Artículo 429

Si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que la hubiese presentado.

Artículo 430

Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos.

Artículo 431

Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reunen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo las relativas a su ejecución.

Artículo 432

El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores se aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables compendores, siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite.

Artículo 433

Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal internacional, que se refieran a personas o intereses privados.

CAPÍTULO II

Actos de jurisdicción voluntaria.

Artículo 434

Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio, por jueces o tribunales de un Estado contratante o por sus agentes consulares, se ejecutarán en los demás mediante los trámites y en la forma señalados en el capítulo anterior.

Artículo 435

Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil procedentes de un Estado contratante, se aceptarán por los demás si reunen las condiciones exigidas por este Código para la eficacia de los documentos otorgados en país extranjero y proceden de juez o tribunal competente, y tendrán en consecuencia eficacia extraterritorial.

CAPÍTULO III

Materia penal

Artículo 436

Ningún Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en uno de los otros en materia penal, en cuanto a las sanciones de esc orden que impongan.

Artículo 437

Podrán sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo que toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, si han sido dictadas por juez o tribunal competente según este Código, y con audiencia del interesado, y se cumplen las demás condiciones formales y de trámite que el capítulo primero de este título establece.

Por tanto: y habiendo sido aprobados dichos Convención y Código Bustamante por resolución legislativa número 6442, del 31 de diciembre de 1928, he venido en aceptarlos, aprobarlos y ratificarlos, teniéndolos como leyes del Estado y comprometiendo para su observancia el honor nacional.

En fe de lo cual, firmo la presente ratificación, sellada con las armas de la República y refrendada por el Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, en Lima, el ocho de enero de mil novecientos veintinueve.

CONVENTION.

Les Présidents des Républiques du Pérou, de l'Uruguay, du Panama, de l'Equateur, du Mexique, du Salvador, du Guatemala, du Nicaragua, de la Bolivie, du Vénézuela, de la Colombie, de Honduras, de Costa-Rica, du Chili, du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay, de Haïti, de la République Dominicaine, des Etats-Unis de l'Amérique, de Cuba, désireux de voir leurs pays respectifs représentés à la Sixième Conférence Internationale des Etats Américains, y ont envoyé les délégués ci-après, qu'ils ont dûment autorisés à approuver les recommandations, résolutions, conventions et traités qu'ils jugeraient utiles aux intérêts de l'Amérique :

PÉROU:

Jesús Melquiades Salazar.
Víctor Maúrtua.
Enrique Castro Oyanguren.
Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

Jacobo Varela Acevedo.
Juan José Amézaga.
Leonel Aguirre.
Pedro Erasmo Callorda.

PANAMA:

Ricardo J. Alfaro.
Eduardo Chiari.

EQUATEUR:

Gonzalo Zaldumbide.
Víctor Zevallos.
Colón Eloy Alfaro.

MEXIQUE:

Julio García.
Fernando González Roa.
Salvador Urbina.
Aquiles Elorduy.

SALVADOR:

Gustavo Guerrero.
Héctor David Castro.
Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

Carlos Salazar.
Bernardo Alvarado Tello.
Luis Beltranena.
José Azurdia.

NICARAGUA:

Carlos Cuadra Pazos
Joaquín Gómez.
Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

José Antezana.
Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

Santiago Key Ayala.
Francisco Gerardo Yanes.
Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

Enrique Olaya Herrera.
Jesús M. Yepes.
Roberto Urdaneta Arbeláez.
Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

Fausto Dávila.
Mariano Vázquez.

COSTA RICA:

Ricardo Castro Beeche.
J. Rafael Oreamuno.
Arturo Timoco.

CHILI:

Alejandro Lira.
Alejandro Alvarez.
Carlos Silva Vildósola.
Manuel Bianchi.

BRÉSIL:

Raúl Fernandes.
Lindolfo Collor.
Alarico da Silveira.
Sampaio Correa.
Eduardo Espínola.

ARGENTINE:

Honorio Pueyrredón.
Laurentino Olascoaga.
Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

Lisandro Díaz León.

HAITÍ:

Fernando Dennis.
Charles Riboul.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:

Francisco J. Peynado.
Gustavo A. Díaz.
Elías Brache.
Angel Morales.
Tulio M. Cesteros.
Ricardo Pérez Alfonsca.
Jacinto R. de Castro.
Federico C. Alvarez.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

Charles Evans Hughes.
Noble Brandon Judah.
Henry P. Fletcher.
Oscar W. Underwood.
Dwight W. Morrow.
Morgan J. O'Brien.
James Brown Scott.
Ray Lyman Wilbur.
Leo S. Rowe.

CUBA:

Antonio S. de Bustamante.
Orestes Ferrara.
Enrique Hernández Cartaya.
José Manuel Cortina.
Arístides Agüero.
José B. Alemán.
Manuel Márquez Sterling.
Fernando Ortiz.
Néstor Carbonell.
Jesús María Barraqué.

lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Article 1.—Les Républiques contractantes acceptent et mettent en vigueur le Code de Droit Internationale Privé annexé à la présente Convention.

Article 2.—Les dispositions de ce Code ne seront applicables que parmi les Républiques contractantes et parmi tous les autres Etats qui y adhèrent de la manière prévue ci-après.

Article 3.—Chacune des Républiques contractantes, au moment de la ratification de la présente Convention, peut déclarer qu'elle se réserve l'acceptation d'un ou de plusieurs articles du Code annexé et les dispositions auxquelles s'applique cette réserve ne lieront pas la dite République.

Article 4.—Le Code entrera en vigueur, en ce qui concerne les Républiques qui le ratifieront, trente jours après le dépôt de leurs ratifications respectives et à la condition qu'il soit ratifié au moins par deux d'entre elles.

Article 5.—Les ratifications seront déposées au Bureau de l'Union Pan-Américaine, lequel en transmettra une copie à chacune des Républiques contractantes.

Article 6.—Les Etats ou personnes juridiques internationales non signataires de la présente Convention, qui seraient désireux d'adhérer en tout ou en partie au Code annexé, notifieront leur intention au Bureau de l'Union Pan-Américaine qui, à son tour, la communiquera à tous les Etats déjà contractants ou adhérents. Six mois après cette communication, l'Etat ou la personne juridique internationale intéressés pourra déposer au Bureau de l'Union Pan-Américaine son adhésion et sera lié par cette Convention d'une manière réciproque, trente jours après son adhésion, vis à vis de tous ceux qui en font partie et qui n'aient fait, pendant cette période, aucune réserve totale ou partielle concernant l'adhésion sollicitée.

Article 7.—Toute République américaine liée par la présente Convention et désireuse de voir modifier, en tout ou en partie, le Code annexé, présentera les propositions correspondantes à la prochaine conférence internationale des Etats américains en vue d'établir la résolution qui convient.

Article 8.—Si l'une quelconque des personnes juridiques internationales contractantes ou adhérentes désire dénoncer la présente Convention, elle le notifiera par écrit au Bureau de l'Union Pan-Américaine, lequel transmettra immédiatement une copie certifiée conforme à la notification, à toutes les autres, leur indiquant la date de réception de cette notification.

La dénonciation ne deviendra effective qu'à l'égard de la partie contractante qui l'ait notifiée et un an après sa réception au Bureau de l'Union Pan-Américaine.

Article 9.—Le Bureau de l'Union Pan-Américaine tiendra un registre des dates de dépôt des ratifications et de réception

des adhésions ou dénonciations et délivrera des copies certifiées dudit registre à chacune des parties contractantes qui en fera la demande.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et apposé le sceau de la Sixième Conférence Internationale des Etats Américains.

Fait à la Havane, le vingt Février mil neuf cent vingt huit en quatre exemplaires, redigés respectivement en espagnol, en français, en anglais et en portuguais, lesquels seront déposés au Bureau de l'Union Pan-Américaine afin que ce dernier en communique une copie certifiée conforme à chacune des Républiques signataires.

CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

TITRE PRÉLIMINAIRE

RÈGLES GÉNÉRALES

Article 1

Les Etrangers appartenant à l'un des Etats contractants jouissent, sur le territoire des autres Etats, des mêmes droits civils qui sont accordés aux nationaux.

Chaque Etat contractant peut, pour des raisons d'ordre public, refuser ou subordonner à des conditions spéciales, l'exercice de certains droits civils aux ressortissants des autres Contractants et chacun de ces Etats peut dans ces cas refuser ou subordonner à des conditions spéciales le même exercice aux nationaux du premier.

Article 2

Les Ressortissants de l'un des Etats contractants jouiront également sur le territoire des autres de garanties individuelles identiques à celles des Nationaux, sauf les limitations établies dans la Constitution et les Lois de chacun d'eux.

Les garanties individuelles identiques ne s'étendent pas, sauf dispositions spéciales de la législation interne, à l'exercice des fonctions publiques, au droit de suffrage, ni aux autres droits publics.

Article 3

Pour l'exercice des droits civils et des garanties individuelles identiques, les lois et les règles en vigueur dans chaque Etat contractant sont considérées comme rentrant dans les trois catégories suivantes :

I. Celles qui s'appliquent aux personnes, en raison de leur

domicile ou de leur nationalité et les suivent même quand elles changent de pays, appelées personnelles ou d'ordre public interne.

II. Celles qui obligent également ceux qui résident sur le territoire, qu'ils soient ou non des nationaux, appelées territoriales, locales ou d'ordre public international.

III. Celles qui s'appliquent seulement par l'expression, l'interprétation ou la présomption de volonté des parties ou de l'une d'elles, appelées volontaires ou d'ordre privé.

Article 4

Les règles constitutionnelles sont d'ordre public international.

Article 5

Toutes les règles de protection individuelle ou collective, établies par le droit constitutionnel et administratif sont également d'ordre public international sauf le cas où il y aurait des dispositions expresses en sens contraire.

Article 6

Dans tous les cas non prévus par le présent Code, chacun des Etats contractants appliquera ses propres qualifications aux institutions ou relations juridiques qui doivent correspondre aux groupes de lois mentionnés à l'article 3.

Article 7

Chaque Etat contractant appliquera comme Lois Personnelles la Loi du domicile, la Loi de la Nationalité ou celles qu'aurait adoptées ou adopterait plus tard sa législation interne.

Article 8

Les droits acquis conformément aux règles du présent Code ont de pleins effets extraterritoriaux dans les Etats contractants, sauf quand une règle d'ordre public international s'oppose à l'un de ces effets ou conséquences.

LIVRE I

DROIT CIVIL INTERNATIONAL

TITRE I

DES PERSONNES

CHAPITRE I

NATIONALITÉ ET NATURALISATION

Article 9

Chaque Etat contractant appliquera son propre droit à la dé-

termination de la nationalité d'origine de toute personne individuelle ou juridique, et à l'acquisition, perte, réintégration postérieures réalisées dans ou hors de son territoire lorsqu'une des nationalités, objet de la controverse, appartient au dit Etat. Dans les autres cas, l'on appliquera les dispositions établies par les autres articles de ce présent chapitre.

Article 10

Pour les conflits sur la nationalité d'origine, auxquels n'est pas intéressé l'Etat où ils sont soulevés, on appliquera la loi de celui des pays en litige où la personne dont il s'agit a son domicile.

Article 11

A défaut de ce domicile, on appliquera au cas prévu dans l'article précédent, les règles adoptées par la loi du tribunal.

Article 12

Les conflits portant sur l'acquisition individuelle d'une nouvelle nationalité sont résolus suivant la loi de la nationalité supposée acquise.

Article 13

Pour les naturalisations collectives, par suite de l'indépendance d'un Etat, on appliquera la loi de l'Etat nouvellement formé, s'il a établi sur le territoire une souveraineté effective reconnue par l'Etat saisi du différend, à défaut de quoi, ce sera celle de l'ancien Etat, le tout sans préjudice des stipulations contractuelles entre les deux Etats intéressés, qui prévaudront toujours.

Article 14

A la perte de la nationalité doit s'appliquer la loi de la nationalité perdue.

Article 15

Le recouvrement de la nationalité est soumis à la loi de la nationalité recouvrée.

Article 16

La nationalité d'origine des corporations et des fondations est déterminée par la loi de l'Etat qui les autorise ou les approuve.

Article 17

La nationalité d'origine des Associations sera celle du Pays où elles sont constituées et dans lequel elles doivent être enregistrées ou inscrites si la Législation locale exige cette condition.

Article 18

Les Sociétés civiles, commerciales ou industrielles, qui ne sont pas anonymes, auront la nationalité établie par le contrat social et, le cas échéant, celle du lieu où siègent habituellement leur administration ou leur Direction principale.

Article 19

Pour les Sociétés anonymes, la nationalité sera déterminée par le contrat social et le cas échéant par la Loi du lieu où se réunit normalement l'Assemblée générale de leurs actionnaires, et à défaut, par celle du lieu où siègent leur principale Assemblée ou Conseil de Direction et d'Administration.

Article 20

Le changement de nationalité des corporations, fondations, établissements et sociétés, sauf les cas de variation dans la souveraineté territoriale, devra être soumis aux conditions exigées par leur ancienne loi et par leur nouvelle.

En cas de changement de la souveraineté territoriale, par le fait de l'indépendance, on appliquera la règle établie par l'article 13 pour les naturalisations collectives.

Article 21

Les dispositions de l'article 9, en ce qui concerne les personnes juridiques et celles des articles 16 et 20 ne s'appliqueront pas dans les Etats Contractants qui n'accordent pas de nationalité à ces personnes juridiques.

CHAPITRE II

Domicile

Article 22

La nature, l'acquisition, la perte et la récupération du domicile général et spécial des personnes individuelles ou juridiques seront régies par la loi territoriale.

Article 23

Le domicile des agents diplomatiques, et des personnes qui

résident temporairement à l'étranger, par suite de leurs fonctions ou pour remplir une mission officielle ou pour s'y livrer à des études scientifiques ou artistiques, sera le dernier qu'ils auront eu sur le territoire national.

Article 24

Le domicile légal du chef de famille s'étend à la femme et aux enfants non émancipés, et celui du tuteur ou curateur, aux mineurs ou incapables confiés à sa garde, sauf dispositions contraires de la législation personnelle de ceux à qui est attribué le domicile d'un autre.

Article 25

Les questions relatives au changement de domicile des personnes individuelles ou juridiques sont résolues conformément à la loi du tribunal, si c'est celui d'un des Etats intéressés et à défaut par la loi du lieu du dernier domicile que l'on pretend acquis.

Article 26

Quand les personnes n'auront pas de domicile, on considérera comme tel le lieu de leur résidence ou celui où elles se trouvent.

CHAPITRE III

Naissance, extinction et effets de la personnalité civile

Section I.—Des Personnes Individuelles

Article 27

La capacité des personnes individuelles est déterminée par la loi personnelle, sauf les restrictions apportées à son application par le présent code ou par le droit local.

Article 28

On appliquera la loi personnelle pour décider si la naissance détermine la personnalité, et si l'enfant conçu doit être considéré comme né pour tout ce qui lui est favorable, de même que pour la viabilité et les effets de la priorité de la naissance en cas d'accouchements doubles ou multiples.

Article 29

Les présomptions de survie ou de mort simultanée, à défaut de preuve, sont régies par la loi personnelle de chacun des défunt quant à leur succession respective.

Article 30

Chaque Etat applique sa propre législation pour déclarer éteinte la personnalité civile en cas de mort naturelle des personnes physiques ou de disparition ou de dissolution officielle des personnes civiles de même que pour décider si la minorité, la démenace ou l'imbécillité, la surdi-mutité, la prodigalité et l'interdiction civile, sont uniquement des restrictions de la personnalité, qui permettent des droits et aussi certaines obligations.

Section II.—Des personnes juridiques

Article 31

Chaque Etat contractant, en sa qualité de personne juridique, a la capacité d'acquérir et d'exercer des droits civils et de contracter des obligations de même catégorie sur le territoire des autres, sans autres restrictions que celles qui sont établies expressément par le droit local.

Article 32

La nature et la reconnaissance des personnes juridiques seront déterminées par la loi du territoire.

Article 33

Sauf les restrictions établies aux articles précédents, la capacité civile des corporations est régie par la loi qui les a créés ou reconnus; celle des fondations, par les règles de leur institution, approuvées par l'autorité compétente, si leur droit national l'exige, et celle des associations, par leurs statuts dans les mêmes conditions.

Article 34

Avec les mêmes restrictions, la capacité civile des sociétés civiles, commerciales ou industrielles est régie par les dispositions relatives au contrat de société.

Article 35

La Loi locale s'applique pour l'attribution des biens des personnes juridiques qui cessent d'exister, si le cas n'est pas autrement prévu dans leurs statuts, chartes de fondation ou dans le droit en vigueur pour les Sociétés.

CHAPITRE IV

Du mariage et du divorce

Section I.—Conditions juridiques qui doivent précéder la célébration du mariage

Article 36

Les contractants sont soumis à leur loi personnelle pour tout ce qui se réfère à leur capacité pour contracter mariage, au consentement ou au conseil des parents, aux empêchements et aux dispenses.

Article 37

Les étrangers doivent prouver avant de se marier qu'ils remplissent les conditions exigées par leurs lois personnelles conformément aux dispositions de l'article précédent. Ils pourront en justifier par une attestation de leurs agents diplomatiques ou consulaires ou par d'autres moyens jugés suffisants par l'autorité locale, qui aura, en tout cas, liberté d'appréciation complète.

Article 38

La législation locale est applicable aux étrangers quant aux empêchements qu'elle institue et qui ne sont pas susceptibles de dispense, à la forme du consentement, à la force obligatoire ou non des fiançailles, à l'opposition au mariage, à l'obligation d'aviser des empêchements et aux conséquences civiles des fausses déclarations, à la forme des diligences préliminaires et à l'autorité compétente pour la célébration.

Article 39

L'obligation de payer ou non une indemnité pour promesse de mariage non tenue et publication des bans dans le même cas, est régie par la loi personnelle commune des parties et à son défaut, par le droit local.

Article 40

Les Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître le mariage célébré dans l'un d'eux par leurs nationaux ou des étrangers, quand il est contraire à leurs dispositions relatives à la nécessité de la dissolution d'un mariage antérieur, au degré de parenté ou d'alliance qui créerait un empêchement absolu, à la prohibition de se marier concernant les coupables de l'adultère qui a causé la dissolution du mariage et à la même prohibition interdisant à celui qui s'est rendu coupable d'un attentat contre la vie de l'un des époux, d'épouser le survivant, ou à toute autre cause de nullité non susceptible de dispense.

Section II.—De la forme du mariage

Article 41

L'on tiendra à tous égards pour valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant celle qui est reconnue comme valable par les lois du pays où il est conclu. Cependant, les Etats, dont la législation exige une cérémonie religieuse, pourront refuser toute validité aux mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans observer cette formalité.

Article 42

Dans les Pays, où la législation le permet, les mariages contractés devant les Agents diplomatiques ou Consulaires des deux conjoints, seront célébrés suivant leur loi personnelle, sans préjudice des dispositions de l'article 40 qui leur sont applicables.

*Section III.—Effets du mariage concernant la personne
des deux époux*

Article 43

La loi personnelle des époux, et, si elle est différente, celle du mari, s'appliquera pour tout ce qui concerne les devoirs de protection et d'obéissance, l'obligation pour la femme de suivre ou non son mari quand il change de résidence, la disposition et l'administration des biens de la communauté, et les autres effets spéciaux du mariage.

Article 44

La loi personnelle de la femme mariée s'appliquera à la disposition et l'administration de ses propres biens et à son droit d'ester en justice.

Article 45

L'obligation pour les époux de vivre ensemble, de se garder fidélité et de se secourir mutuellement est soumise au droit local.

Article 46

Le droit local qui prive d'effets civils le mariage du bigame s'applique également d'une manière impérative.

Section IV.—Nullité du mariage et ses effets

Article 47

La nullité du mariage doit être régie par la même loi que celle à laquelle est soumise la condition intrinsèque ou extrinsèque qui motive cette nullité.

Article 48

La violence, la crainte ou le rapt comme cause de nullité du mariage sont régis par la loi du lieu de célébration.

Article 49

Pour la garde des enfants issus de mariages nuls, l'on appliquera la loi personnelle des époux, si elle est commune à tous les deux ; à son défaut, l'on appliquera celle de l'époux qui aura agi de bonne foi, et à défaut des deux, celle du mari, quand les époux ne peuvent ni veulent rien décider à cet égard.

Article 50

La même loi personnelle doit s'appliquer aux autres effets civils du mariage nul, sauf à ceux qu'il doit produire relativement aux biens des époux, pour lesquels sera suivie la loi sur le régime matrimonial.

Article 51

Les règles qui fixent les effets judiciaires de la demande en nullité sont d'ordre public international.

Section V.—Séparation de corps et divorce

Article 52

Le droit à la séparation de corps ou au divorce est régi par la loi du domicile conjugal, mais il ne peut être fondé sur des causes antérieures à l'acquisition du dit domicile, si la loi personnelle des époux ne les reconnaît pas avec les mêmes effets.

Article 53

Chaque Etat contractant a le droit d'autoriser ou de reconnaître ou non le divorce ou le nouveau mariage de personnes divorcées à l'étranger, dans les cas, avec des effets ou pour des causes que n'admet pas leur droit personnel.

Article 54

Les causes de divorce et de séparation de corps sont soumises à la loi du lieu de la demande, pourvu que les époux y soient domiciliés.

Article 55

La loi du juge devant lequel est porté le litige, détermine les conséquences judiciaires de la demande et le dispositif du jugement vis-à-vis des conjoints et de leurs enfants.

Article 56

La séparation de corps et le divorce, obtenus conformément aux articles qui précèdent, produisent leurs effets civils selon la législation du tribunal qui les prononce, dans les autres États contractants, sauf les dispositions de l'article 53.

CHAPITRE V

Paternité et filiation

Article 57

Les règles relatives à la présomption de paternité et ses conditions, celles qui confèrent le droit au nom de famille, celles qui déterminent les preuves de la filiation et règlent la succession de l'enfant sont d'ordre public interne, la loi personnelle de l'enfant devant s'appliquer, si elle est différente de celle du père.

Article 58

Les lois qui accordent aux enfants légitimés des droits de succession ont le même caractère, mais c'est la loi personnelle du père qui s'applique.

Article 59

La règle qui donne à l'enfant légitime le droit à la pension alimentaire est d'ordre public international.

Article 60

La capacité pour légitimer est régie par la loi personnelle du père et la capacité pour être légitimé, par la loi personnelle de l'enfant, mais la légitimation exige la réunion des conditions prévues par les deux lois.

Article 61

L'interdiction de légitimer des enfants autres que les enfants naturels simples, est d'ordre public international.

Article 62

Les conséquences de la légitimation et l'action pour la contester, sont soumises à la loi personnelle de l'enfant.

Article 63

La recherche de la paternité et de la maternité et leur interdiction sont régies par le droit territorial.

Article 64

Les règles qui fixent les conditions de la reconnaissance, obligent à l'effectuer dans certains cas, déterminent les actions à cet effet, accordent ou refusent le nom de famille et énumèrent les causes de nullité, dépendent de la loi personnelle de l'enfant.

Article 65

Les droits de succession des enfants naturels sont soumis à la loi personnelle du père, ceux des parents naturels à la loi personnelle de l'enfant.

Article 66

La forme et les circonstances de la reconnaissance des enfants naturels sont régies par la loi locale.

CHAPITRE VI

Obligation alimentaire entre parents

Article 67

Sont soumis à la loi personnelle du créancier d'aliments: la conception légale de l'obligation alimentaire, l'ordre dans lequel elle est exigible, le mode de prestation et l'extinction de ce droit.

Article 68

Les dispositions qui fixent l'obligation alimentaire, le montant, la réduction et l'augmentation de la pension, les circonstances dans lesquelles ils sont dus et la forme de leur prestation, de même que celles qui interdisent de renoncer à ce droit et de le céder sont d'ordre public international.

CHAPITRE VII

Puissance paternelle

Article 69

Sont soumises à la loi personnelle de l'enfant l'existence et la portée générale de la puissance paternelle vis-à-vis de la personne et des biens, ainsi que ses causes d'extinction et de recouvrement et la limitation du droit de correction, en cas de remariage.

Article 70

L'existence du droit d'usufruit et les autres règles applicables aux différentes catégories de pécules sont soumises également à la loi personnelle de l'enfant, quels que soient la nature des biens et le lieu où ils se trouvent.

Article 71

La disposition de l'article précédent est applicable en territoire étranger, sans préjudice des droits des tiers que la loi locale accorde et des dispositions locales sur la spécialité et la publicité des garanties hypothécaires.

Article 72

Sont d'ordre public international les dispositions qui déterminent la nature et les limites du droit paternel de correction et de châtiment et autorisent le recours aux autorités, de même que celles qui déterminent la perte de la puissance paternelle en cas d'incapacité, d'absence ou de condamnation.

CHAPITRE VIII

Adoption

Article 73

La capacité pour adopter et être adopté et les conditions et limitations de l'adoption sont soumises à la loi personnelle de chacun des intéressés.

Article 74

La Loi personnelle de l'adoptant régit les effets de l'adoption quant à sa succession, celle de l'adopté en ce qui se réfère au nom de famille et aux droits et devoirs qu'il conserve vis-à-vis de sa famille naturelle, ainsi qu'à sa succession vis-à-vis de l'adoptant.

Article 75

Chacun des intéressés pourra contester l'adoption, conformément aux prescriptions de sa loi personnelle.

Article 76

Sont d'ordre public international les dispositions qui en cette matière réglementent le droit aux aliments et celles qui établissent pour l'adoption des formes solennelles.

Article 77

Les dispositions des quatre articles précédents, ne s'appliqueront pas aux Etats, dont la législation ne reconnaît pas l'adoption.

CHAPITRE IX

De l'absence

Article 78

Les mesures provisoires en cas d'absence sont d'ordre public international.

Article 79

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, la représentation du présumé absent sera désignée conformément à sa loi personnelle.

Article 80

La loi personnelle de l'absent détermine à qui appartient l'action pour demander la déclaration et fixe l'ordre et les conditions qui concernent les administrateurs.

Article 81

Le droit local doit s'appliquer pour décider quand a lieu et produit ses effets la déclaration d'absence, et quand et comment doit cesser l'administration des biens de l'absent, de même que l'obligation et la manière de rendre compte.

Article 82

Tout ce qui se réfère à la présomption de mort de l'absent et à ses droits éventuels est régi par sa loi personnelle.

Article 83

La déclaration d'absence ou de sa présomption, ainsi que la manière dont elle prend fin, et celle de présomption de décès de l'absent ont un effet extraterritorial, y compris ce qui a trait à la nomination et aux pouvoirs des administrateurs.

CHAPITRE X

Tutelle

Article 84

La loi personnelle du mineur ou de l'incapable s'appliquera pour tout ce qui touche à l'objet de la tutelle ou curatelle, à son organisation et à sa classification.

Article 85

La même loi doit être observée quant à l'institution du protecteur.

Article 86

Aux incapacités et aux excuses relatives à la tutelle, à la curatelle et à la protutelle devront s'appliquer simultanément les lois personnelles du tuteur, curateur ou protecteur et du mineur ou de l'incapable.

Article 87

Les garanties à fournir par le tuteur ou curateur et les règles

pour l'exercice de la tutelle ou curatelle sont soumises à la loi personnelle du mineur ou de l'incapable. Si la garantie est une hypothèque ou un nantissement, elle devra être constituée dans la forme prévue par la loi locale.

Article 88

Sont régies également par la loi personnelle du mineur ou de l'incapable les obligations relatives aux comptes, sauf les responsabilités d'ordre pénal qui sont territoriales.

Article 89

Quant à l'enregistrement des tutelles on appliquera simultanément la loi locale et les lois personnelles du tuteur ou curateur et du mineur ou incapable.

Article 90

Sont d'ordre public international les règles qui obligent le ministère public ou tout autre fonctionnaire local à demander la déclaration d'incapacité des déments et sourds-muets et celles qui fixent les formalités de cette déclaration.

Article 91

Sont également d'ordre public international les règles qui fixent les formalités de cette déclaration.

Article 92

La déclaration d'incapacité et l'interdiction civile produisent des effets extraterritoriaux.

Article 93

On appliquera la loi locale à l'obligation pour le tuteur ou curateur de donner des aliments au mineur ou incapable et à la faculté de le corriger d'une manière modérée.

Article 94

La capacité pour être membre d'un Conseil de Famille est établie par la loi personnelle de l'intéressé.

Article 95

Les incapacités spéciales et l'organisation, le fonctionnement, les droits et devoirs du conseil de famille sont régis par la loi personnelle de la personne soumise à la tutelle.

Article 96

En tous cas, les actes et décisions du conseil de famille doivent suivre les formes et solennités prescrites par la loi du lieu où il se réunit.

Article 97

Les Etats contractants qui reconnaissent, comme loi personnelle, celle du domicile, pourront exiger, quand des incapables passeront d'un pays à un autre, la ratification ou l'établissement à nouveau de la tutelle ou curatelle.

CHAPITRE XI

De la prodigalité

Article 98

La déclaration de prodigalité et ses effets sont soumis à la loi personnelle du prodigue.

Article 99

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, la loi du domicile ne s'appliquera pas à la déclaration de prodigalité des personnes dont le droit personnel ignore cette institution.

Article 100

La déclaration de prodigalité, intervenue dans un des Etats contractants, produit des effets extraterritoriaux vis-à-vis des autres, en tant que le permet le droit local.

CHAPITRE XII

Emancipation et majorité

Article 101

Les règles applicables à l'émancipation et à la majorité sont celles qui sont fixées par la législation personnelle de l'intéressé.

Article 102

Cependant la législation locale peut être déclarée applicable à la majorité comme condition d'option pour la nationalité de la dite législation.

CHAPITRE XIII

Du registre d'Etat Civil

Article 103

Les dispositions relatives au registre d'Etat Civil sont territo-

riales, sauf en ce qui concerne celui que tiennent les agents diplomatiques ou consulaires. La disposition de cet article n'affecte pas les droits d'un autre Etat, concernant les relations juridiques soumises au Droit International Public.

Article 104

L'on devra envoyer gratuitement et par la voie diplomatique au pays de l'intéressé, une copie officielle certifiée conforme de toute inscription relative à un natif de l'un des Etats contractants, portée sur le Registre Civil d'un autre Etat.

TITRE II

DES BIENS

CHAPITRE I

Classification des biens

Article 105

Les biens, quelle que soit leur catégorie, sont soumis à la loi de leur situation.

Article 106

Aux effets de l'article précédent, on tiendra compte, en ce qui concerne les biens meubles corporels et les titres représentatifs de créances de toute nature, du lieu de leur situation ordinaire ou normale.

Article 107

La situation des créances est déterminée d'après le lieu où l'obligation doit être acquittée et, si ce lieu n'est pas précisément, d'après le domicile du débiteur.

Article 108

La propriété industrielle, la propriété intellectuelle et les autres droits analogues de nature pécuniaire, qui autorisent l'exercice de certaines activités accordées par la loi, sont considérés comme situés là où ils sont officiellement enregistrés.

Article 109

Les concessions sont considérées comme situées là où elles ont été obtenues légalement.

Article 110

A défaut de toute autre règle et en outre pour tous les cas non prévus dans le présent code, on admettra que les meubles de

toute catégorie sont situés au domicile de leur propriétaire, ou à défaut, de leur possesseur.

Article 111

Sont exceptées de la disposition de l'article précédent les choses données en gage, qui sont considérées comme situées au domicile de la personne en possession de laquelle elles ont été mises.

Article 112

On appliquera toujours la loi territoriale pour la distinction entre les meubles et immeubles sans préjudice des droits acquis par les tiers.

Article 113

Les autres classifications et qualifications juridiques des biens sont soumises à la même loi territoriale.

CHAPITRE II

De la Propriété

Article 114

La propriété de famille inaliénable, exempte de charges et insaisissable est régie par la loi de la situation.

Toutefois les ressortissants d'un État contractant dans lequel cette sorte de propriété n'est pas admise ou réglementée ne pourront en avoir et organiser une dans un autre Etat, qu'en tant qu'elle ne lèse pas les héritiers légitimes.

Article 115

La propriété intellectuelle et la propriété industrielle sont régies par les clauses des conventions internationales spéciales en vigueur ou par celles qui interviendront à l'avenir.

A défaut de ces conventions, l'obtention, l'enregistrement et la jouissance de ces droits sont soumis au droit local qui les confère.

Article 116

Chaque État contractant a la faculté de soumettre à des règles spéciales pour les étrangers la propriété minière, celle des bateaux de pêche ou de cabotage, celle des industries dans l'étendue de la mer territoriale et dans la zone maritime et l'obtention et la jouissance de concessions et travaux d'utilité publique et de service public.

Article 117

Les règles générales sur la propriété et ses modes d'acquisition

tion ou d'aliénation, entre personnes vivantes, y compris celles qui s'appliquent au trésor caché, de même que les règles qui régissent les eaux du domaine public et privé et leur jouissance, sont d'ordre public international.

CHAPITRE III

De la Communauté de biens

Article 118

La communauté de biens est régie en général par l'accord ou la volonté des parties et à son défaut par la loi du lieu. Elle aura son domicile au lieu où elle est soumise à cette loi à défaut de convention contraire.

Article 119

On appliquera toujours la loi locale, avec un caractère exclusif, au droit de demander le partage de la chose commune et aux formes et conditions de son exercice.

Article 120

Sont d'ordre public international les dispositions relatives à la délimitation, au bornage et au droit de clore les immeubles ruraux ainsi que celles relatives aux édifices en ruine et aux arbres qui menacent de tomber.

CHAPITRE IV

De la possession

Article 121

La possession et ses effets sont régis par la loi locale.

Article 122

Les modes d'entrer en possession sont régis par la loi applicable à chacun d'eux suivant sa nature.

Article 123

Sont déterminées par la loi du tribunal les mesures et formalités qui peuvent être utilisées pour maintenir en possession le possesseur inquiété, troublé ou dépossédé en vertu ou en conséquence de mesures ou de décisions judiciaires.

CHAPITRE V

De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation

Article 124

Quand l'usufruit est constitué conformément à la loi d'un État contractant, la dite loi le régira d'une manière obligatoire.

Article 125

Si l'usufruit est constitué par la volonté des particuliers, exprimée dans un acte entre vivants ou *mortis causa*, la loi de l'acte ou celle de la succession s'appliqueront respectivement.

Article 126

S'il résulte de la prescription, il sera soumis à la loi locale qui l'a établi.

Article 127

La règle qui dispense ou non le père usufruitier de donner caution dépend de la loi personnelle de l'enfant.

Article 128

Est subordonnée à la loi de la succession, l'obligation de donner caution imposée au conjoint survivant pour l'usufruit héréditaire et l'obligation pour l'usufruitier de payer certains legs ou dettes héréditaires.

Article 129

Sont d'ordre public international les règles qui définissent l'usufruit et ses formes de constitution, ses causes légales d'extinction et celles qui le limitent à un certain nombre d'années pour les villes, corporations et sociétés.

Article 130

L'usage et l'habitation sont régis par la volonté de la partie ou des parties qui les établissent.

CHAPITRE VI

Des servitudes

Article 131

On appliquera le droit local à la définition et à la classification des servitudes, à leurs modes d'acquisition et d'extinction non conventionnels et aux droits et obligations, en pareil cas, des propriétaires des fonds dominants et servants.

Article 132

Les servitudes d'origine contractuelle ou volontaire sont soumises à la loi de l'acte ou du rapport juridique qui leur donne naissance.

Article 133

Sont exceptés de la disposition de l'article précédent la vaine

pâture (comunidad de pastos) sur des terres publiques et le rachat de la jouissance des bois morts et des autres produits de la montagne, propriété des particuliers qui sont régis par le droit territorial.

Article 134

Sont d'ordre privé les règles applicables aux servitudes légales imposées dans l'intérêt privé ou pour l'utilité privée.

Article 135

Le droit territorial doit s'appliquer à la définition et l'énumération des servitudes légales et à la réglementation non conventionnelle des servitudes d'eau, de passage, de mitoyenneté, de jour et de vue, d'écoulement des eaux, des distances et des travaux intermédiaires pour les constructions et les plantations.

CHAPITRE VII

Des registres de la propriété

Article 136

Sont d'ordre public international les dispositions qui les instituent, qui en régulent et imposent la nécessité vis-à-vis des tiers.

Article 137

Seront inscrits sur les registres de la propriété de chaque État contractant les actes ou titres à inscrire, passés dans un autre, qui soient valables dans le premier conformément au présent Code, et les jugements exécutoires auxquels, suivant la dite Convention, on donne effet dans l'Etat dont dépend le registre, ou aient dans cet Etat force de chose jugée.

Article 138

Les dispositions relatives à l'hypothèque légale, en faveur d'un État, des provinces ou des villes, sont d'ordre public international.

Article 139

L'hypothèque légale que plusieurs législations accordent à certaines personnes individuelles, ne pourra être requise que lorsque la loi personnelle concordera avec la loi du lieu où sont situés les biens grevés par cette hypothèque.

TITRE III

DES DIVERS MODES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

CHAPITRE I

Des Donations

Article 140

On appliquera le droit local aux modes d'acquisition, quand il n'y aura pas dans la présente Convention des dispositions contraires.

CHAPITRE II

Des Donations

Article 141

Les donations d'origine contractuelle sont soumises pour leur validité et leurs effets entre vivants aux règles générales des contrats.

Article 142

Les lois personnelles respectives du donateur et du donataire régiront la capacité de chacun d'eux.

Article 143

Les donations qui doivent produire effet à la mort du donateur participeront de la nature des dispositions de dernière volonté, et seront régies par les règles internationales établies dans la présente Convention pour les successions testamentaires.

CHAPITRE III

Des successions en général

Article 144

Les successions "ab intestat" et testamentaires, y compris ce qui concerne l'ordre successoral, le montant des droits de succession et la validité intrinsèque des dispositions seront régis, sauf les cas d'exception établis plus loin, par la loi personnelle du *de cujus*.

Article 145

Est d'ordre public international la règle en vertu de laquelle les droits à la succession d'une personne sont transmis dès l'instant du décès.

CHAPITRE IV

Des testaments

Article 146

La capacité pour disposer par testament est régie par la loi personnelle du testateur.

Article 147

La loi territoriale s'appliquera aux règles fixées par chaque État pour établir que le testateur dément est dans un intervalle lucide.

Article 148

Sont d'ordre public international les dispositions qui ne reconnaissent pas le testament réciproque ou holographie ou verbal et celles qui le déclarent acte essentiellement personnel.

Article 149

Sont également d'ordre public international les règles sur la forme des actes privés se rapportant aux testaments et sur la nullité du testament obtenu par violence, dol ou fraude.

Article 150

Les règles sur la forme des testaments sont d'ordre public international, à l'exception de celles qui concernent le testament redigé à l'étranger et le testament militaire ou maritime dans les cas où ils sont rédigés hors du pays.

Article 151

Sont soumis à la loi personnelle du testateur, la procédure, les conditions et les effets de la révocation d'un testament, mais la présomption de révocation est déterminée par la loi locale.

CHAPITRE V

De l'héritage

Article 152

La capacité pour succéder par testament ou "ab intestat" est régie par la loi personnelle de l'héritier, ou légataire.

Article 153

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, sont considérées comme d'ordre public international, les incapacités de succéder que les Etats contractants considèrent comme telles.

Article 154

L'institution d'héritier et la substitution seront soumises à la loi personnelle du testateur.

Article 155

Le droit local s'appliquera nonobstant à l'interdiction des substitutions fidéicommissaires qui dépassent le second degré ou qui sont faites au profit de personnes non encore vivantes au décès du testateur et de celles qui impliquent l'interdiction perpétuelle d'aliéner.

Article 156

La nomination et les pouvoirs des exécuteurs testamentaires dépendent de la loi personnelle du défunt et doivent être reconnus dans chacun des Etats contractants conformément à cette loi.

Article 157

Dans la succession "ab intestat", quand la loi appelle l'Etat comme héritier à défaut d'autres, on appliquera la loi personnelle *du de cuius*: mais, si elle l'appelle comme occupant de *res nullius*, le droit local s'appliquera.

Article 158

Les précautions à adopter quand la veuve est enceinte seront conformes à la législation du lieu où elle se trouve.

Article 159

Les formalités requises pour accepter un héritage sous bénéfice d'inventaire ou pour faire usage du droit de délibérer, sont fixées par la loi du lieu où la succession s'ouvre, et elles suffiront pour produire les effets extraterritoriaux.

Article 160

Est d'ordre public international, la règle qui concerne l'indivision illimitée de la succession ou qui établit le partage provisoire.

Article 161

L'aptitude à solliciter et effectuer le partage est soumise à la loi personnelle de l'héritier.

Article 162

La nomination et les pouvoirs du curateur ou de l'expert-répartiteur de la succession dépendront de la loi personnelle du *de cuius*.

Article 163

Le paiement des dettes héréditaires est soumis à la même loi. Cependant les créanciers qui ont des garanties d'un caractère réel pourront les réaliser conformément à la loi qui régit la garantie.

TITRE IV

DES OBLIGATIONS ET CONTRATS

CHAPITRE I

Des obligations en général

Article 164

La nature et le classement des obligations sont soumis à la loi territoriale.

Article 165

Les obligations résultant de la loi sont régies par le droit qui les a établies.

Article 166

Les obligations qui naissent des contrats ont force de loi entre les parties contractantes et doivent être exécutées suivant ces contrats, sauf les restrictions établies par le présent Code.

Article 167

Celles qui ont leur origine dans des délits ou des fautes sont soumises à la même loi que le délit ou la faute dont elles résultent.

Article 168

Celles qui procèdent d'actes ou d'omissions dans lesquels sont intervenues une faute ou une négligence non punies par la loi, sont régies par le droit du lieu où ont été commises la negligence ou la faute dont elles sont nées.

Article 169

La nature et les effets des diverses catégories d'obligations, de même que leur extinction sont régis par la loi de l'obligation dont il s'agit.

Article 170

Nonobstant la disposition de l'article précédent, la loi locale réglemente les conditions de paiement et la monnaie en laquelle il doit être fait.

Article 171

C'est également à la loi locale de décider qui doit payer les frais de justice auxquels le paiement donne naissance et de les régler.

Article 172

La preuve des obligations est soumise, quant à son admission et ses effets, à la loi qui régit l'obligation même.

Article 173

La contestation de l'exactitude du lieu où a été passé un acte privé, si elle affecte sa validité, pourra toujours être faite par le tiers lésé, et la preuve sera à la charge de celui que la présente.

Article 174

La présomption de chose jugée par une sentence étrangère sera recevable quand la sentence réunira les conditions nécessaires pour son exécution sur le territoire, conformément au présent Code.

CHAPITRE II

Des contrats en général

Article 175

Sont d'ordre public international les règles qui interdisent de passer des pactes, des clauses et des conditions contraires aux lois, à la morale et à l'ordre public, et celle qui interdit le serment et le tient pour non prêté.

Article 176

Les règles qui déterminent la capacité ou l'incapacité de donner son consentement dépendent de la loi personnelle de chaque contractant.

Article 177

La loi territoriale s'appliquera à l'erreur, la violence, l'intimidation et le dol, relativement au consentement.

Article 178

Est également territoriale toute règle que interdit que les services contraires aux lois et aux bonnes mœurs et les choses hors du commerce soient l'objet de contrats.

Article 179

Les dispositions qui se réfèrent à la cause illicite dans les contrats sont d'ordre public international.

Article 180

La loi du lieu du contrat et celle de son exécution s'appliqueront simultanément à la nécessité de passer un acte public pour l'efficacité de conventions déterminés et à celle de les rédiger par écrit.

Article 181

La rescission des contrats pour incapacité ou absence est déterminée par la loi personnelle de l'absent ou de l'incapable.

Article 182

Les autres causes de rescission et leurs formes ou effets sont soumis à la loi territoriale.

Article 183

Les dispositions sur la nullité des contrats sont soumises à la loi dont dépend la cause de nullité.

Article 184

Les contrats doivent être interprétés, en règle générale, conformément à la loi qui les régit.

Cependant, quand cette loi est discutée et qu'elle doit résulter de la volonté tacite des parties, la législation déterminée pour ce cas par les articles 185 et 186 sera appliquée comme présomption, même si cette solution amenait à appliquer au contrat une loi distincte, comme résultat de l'interprétation de volonté.

Article 185

En dehors des règles déjà établies et de celles qui, à l'avenir, seront fixées pour des cas spéciaux, dans les contrats d'adhésion, est présumée acceptée, à défaut de volonté expresse ou tacite, la loi de celui que les offre ou prépare.

Article 186

Dans les autres contrats et pour le cas prévu dans l'article précédent, on appliquera en premier lieu la loi personnelle commune aux contractants et à son défaut la loi du lieu où ils ont été conclus.

CHAPITRE III

Du contrat de mariage relativement aux biens

Article 187

Ce contrat est régi par la loi personnelle commune des con-

tractants et à son défaut par celle du premier domicile matrimonial.

Les mêmes lois déterminent, suivant cet ordre, le régime légal supplétoire, à défaut de stipulation.

Article 188

Est d'ordre public international la règle qui interdit de conclure des contrats de mariage, pendant le mariage, ou de modifier ou d'altérer le régime des biens en cas de changement de nationalité ou de domicile postérieur à la célébration.

Article 189

Ont le même caractère celles qui se réfèrent au respect des lois et des bonnes mœurs, aux effets des conventions vis-à-vis des tiers et à la forme solennelle du contrat.

Article 190

La volonté des parties règle le droit applicable aux donations pour cause de mariage, sauf en ce qui concerne leur capacité, la sauvegarde des droits des héritiers légitimes et la nullité, tant que le mariage subsiste, qui demeurent soumis à la loi générale qui régit le mariage, pourvu que l'ordre public international n'en soit pas affecté.

Article 191

Les dispositions relatives à la dot et aux biens paraphernaux dépendent de la loi personnelle de la femme.

Article 192

La règle qui rejette l'inaliénabilité de la dot est d'ordre public international.

Article 193

Est d'ordre public international l'interdiction de renoncer à la communauté d'acquêts durant le mariage.

CHAPITRE IV

Achat et vente, cession de créances et échange

Article 194

Sont d'ordre public international les dispositions relatives à l'aliénation forcée pour cause d'utilité publique.

Article 195

Il en est même de celles qui déterminent les effets de la possession et de l'inscription entre deux acquéreurs et celles qui se réfèrent au rachat légal.

CHAPITRE V

Location

Article 196

En matière de location de choses, la loi territoriale doit s'appliquer aux mesures prises pour résERVER les droits des tiers et à celles qui fixent les droits et les devoirs de l'acheteur de l'immeuble loué.

Article 197

Est d'ordre public international, en matière de louages de services, la règle qui empêche de s'engager pour toute la vie, ou pour plus d'un temps déterminé.

Article 198

Est également territoriale la législation sur les accidents du travail et la protection sociale du travailleur.

Article 199

Les lois et règlements locaux concernant les transports par eau, par terre et par air seront rattachés à la législation territoriale.

CHAPITRE VI

Cens ou rentes

Article 200

La loi territoriale s'applique à la détermination de la nature et des catégories de cens ou rentes, à leur caractère rachetable, à la prescription et à l'action réelle qui en résulte.

Article 201

Pour le bail emphytéotique, sont également territoriales les dispositions qui en fixent les conditions et formalités, qui en imposent la reconnaissance au bout d'un certain nombre d'années et qui défendent la sous-emphytéose.

Article 202

Dans la constitution des cens ou rentes sur la propriété d'autrui, est d'ordre public international la règle qui interdit que le paiement en fruits puisse consister en une partie de ce que produit l'immeuble grevé.

Article 203

A le même caractère, dans le contrat d'emphytéose, la clause exigeant l'estimation de l'immeuble grevé.

CHAPITRE VII

Société

Article 204

Les lois qui exigent un objet licite, des formes solennelles et un inventaire, quand il y a des immeubles, sont territoriales.

CHAPITRE VIII

Du prêt

Article 205

La loi locale s'applique à la nécessité d'une convention expresse d'intérêts et de leur taux.

CHAPITRE IX

Dépôt

Article 206

Les dispositions relatives au dépôt nécessaire et au séquestre sont territoriales.

CHAPITRE X

Contrats aléatoires

Article 207

Les effets de la capacité en matière d'actions nées du contrat de jeu sont déterminés par la loi personnelle de l'intéressé.

Article 208

La loi locale définit les contrats aléatoires (*de suerte*) et détermine la mesure suivant laquelle le jeu et le pari sont permis ou interdits.

Article 209

Est territoriale la disposition qui déclare nulle la rente viagère sur la vie d'une personne, morte à la date de la signature du contrat, ou dans une période où elle se trouvait atteinte d'une maladie incurable.

CHAPITRE XI

Transactions et compromis

Article 210

Sont territoriales les dispositions qui interdisent de transiger ou de soumettre à un compromis des matières déterminées.

Article 211

La portée et les effets du compromis et l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, dépendent également de la loi territoriale.

CHAPITRE XII

Du cautionnement

Article 212

Est d'ordre public international la règle qui interdit à la caution d'être plus obligée que le débiteur principal.

Article 213

Les dispositions relatives à la caution légale ou judiciaire appartiennent à la même catégorie.

CHAPITRE XIII

Gage, antichrèse et hypothèque

Article 214

La disposition qui interdit au créancier de s'approprier les choses reçues en gage ou hypothéquées est territoriale.

Article 215

Sont également territoriales les règles qui fixent les conditions essentielles du contrat de gage et son exécution est obligatoire quand la chose donnée en nantissement est transportée dans un lieu où les règles sont différentes de celles exigées lors de sa constitution.

Article 216

Sont également territoriales les prescriptions en vertu desquelles le gage doit rester en possession du créancier ou d'un tiers, celle qui exige, pour causer préjudice à un tiers, que la date soit établie par acte public et celle qui fixe la procédure de son aliénation.

Article 217

Les règlements spéciaux des monts-de-piété et établissements publics analogues suivront la loi du territoire pour toutes les opérations passées avec eux.

Article 218

Sont territoriales les dispositions qui fixent l'objet, les conditions, les modalités, la portée et l'inscription du contrat d'hypothèque.

Article 219

Il en est de même de la prohibition pour le créancier d'acquérir la propriété de l'immeuble en cas d'antichrèse, à défaut de payement de la dette.

CHAPITRE XIV

Quasi-contrats

Article 220

La gestion des affaires d'autrui est réglée par la loi du lieu où elle s'effectue.

Article 221

La dévolution de l'indû est soumise à la loi personnelle commune des parties et, à son défaut, à celle du lieu du payement.

Article 222

Les autres quasi-contrats sont régis par la loi qui règle l'institution juridique qui leur a donné naissance.

CHAPITRE XV

Concours et priorité de créances

Article 223

Si les obligations concurrentes n'ont pas de caractère réel et sont soumises à une loi commune, la dite loi réglera leur priorité.

Article 224

Pour les garanties avec action réelle, on appliquera la loi de la situation de la garantie.

Article 225

En dehors des cas prévus aux articles précédents, on devra appliquer aux priorités entre créances la loi du tribunal qui doit en décider.

Article 226

Si la question est posée simultanément devant plusieurs tribunaux d'États différents, elle sera résolue conformément à la loi de celui qui a réellement sous sa juridiction les biens ou la somme sur lesquels le droit de priorité doit effectivement s'exercer.

CHAPITRE XVI

Prescription

Article 227

La prescription acquisitive en matière de meubles ou d'immeubles est régie par la loi du lieu de leur situation.

Article 228

Si les biens meubles changent de situation en cours de prescription, la prescription sera régie par la loi du lieu où ils se trouvent à l'échéance du délai exigé.

Article 229

La prescription extinctive des actions personnelles est régie par la loi à laquelle est soumise l'obligation frappée d'extinction.

Article 230

La prescription extinctive des actions réelles est régie par la loi du lieu où est située la chose à laquelle elle se réfère.

Article 231

Si, dans le cas prévu à l'article précédent, il s'agit de biens meubles qui ont changé de situation pendant le délai de prescription, on appliquera la loi du lieu où ils se trouvent à la fin du terme fixé pour la prescription.

LIVRE II
DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL
TITRE I
DES COMMERÇANTS ET DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

CHAPITRE I

Des commerçants

Article 232

La capacité pour exercer le commerce et intervenir dans les actes et contrats commerciaux est régie par la loi personnelle de chaque intéressé.

Article 233

Les incapacités et capacités (*habilitación*) sont soumises à la même loi personnelle.

Article 234

La loi du lieu où s'exerce le commerce doit s'appliquer aux mesures de publicité nécessaires pour que les incapables, par l'intermédiaire de leurs représentants, et les femmes mariées, par elles-mêmes, puissent s'adonner à ce commerce.

Article 235

La loi locale doit s'appliquer à l'incompatibilité pour l'exercice du commerce des fonctionnaires publics, des agents commerciaux et des courtiers.

Article 236

Toute incompatibilité pour le commerce résultant de lois ou dispositions spéciales sur un territoire déterminé, sera régie par le droit de ce territoire.

Article 237

La dite incompatibilité, concernant les agents diplomatiques et consulaires, sera soumise à la loi de l'État qui les nomme. Le pays où ils résident a également le droit de leur interdire l'exercice du commerce.

Article 238

Le contrat social et, le cas échéant, la Loi qui le régit, s'applique à l'interdiction aux associés en nom collectif ou aux Commanditaires d'effectuer des opérations commerciales ou une cer-

taine catégorie de ces opérations pour leur compte ou pour le compte d'autrui.

CHAPITRE II

De la qualité de commerçant et des actes de commerce

Article 239

Pour tous ses effets ayant un caractère public, la qualité de commerçant est régie par la loi du lieu où a été passé l'acte ou exercée l'industrie dont il s'agit.

Article 240

La forme des contrats et actes commerciaux est soumise à la loi territoriale.

CHAPITRE III

Du registre de commerce

Article 241

Sont territoriales les dispositions relatives à l'inscription sur le registre de commerce des commerçants étrangers et sociétés étrangères.

Article 242

Ont le même caractère les règles qui déterminent l'effet de l'inscription sur le dit registre des créances et des droits des tiers.

CHAPITRE IV

Lieux et maisons de commerce, cotisation officielle d'effets publics, titres au porteur

Article 243

Les dispositions relatives aux maisons de bourse et tous locaux où se fait la cotisation officielle des titres publics, et des titres au porteur sont d'ordre public international.

CHAPITRE V

Dispositions générales sur les contrats commerciaux

Article 244

S'appliqueront aux contrats commerciaux les règles générales établies pour les contrats civils au chapitre II, titre IV, livre I du présent Code.

Article 245

Les contrats par correspondance ne sont parfaits que par la réalisation des conditions prescrites à cet effet par la législation de tous les contractants.

Article 246

Sont d'ordre public international les dispositions relatives aux contrats illicites et aux délais de grâce, de courtoisie et autres analogues.

TITRE II

DES CONTRATS SPÉCIAUX DU COMMERCE

CHAPITRE I

Des sociétés commerciales

Article 247

Le caractère commercial d'une société collective ou en commandite sera régi par la loi à laquelle est soumis l'acte de société et, à son défaut, par celle du lieu où elle a son siège social.

Si ces lois ne distinguent pas entre les sociétés commerciales et civiles, on appliquera le droit du pays où la question est soumise à la justice.

Article 248

Le caractère commercial d'une Société anonyme dépend de la Loi du Contrat social; à son défaut, de la Loi du lieu où se réunissent ses Assemblées générales d'actionnaires, et, à son défaut, de celle où siège normalement son Conseil ou son Comité de Direction.

Si ces lois ne distinguent pas entre sociétés commerciales et civiles, la société aura l'un ou l'autre caractère, suivant qu'elle soit ou non inscrite sur le registre de commerce du pays où la question doit être jugée. A défaut de registre du commerce, le droit local de ce dernier pays sera appliqué.

Article 249

Ce qui est relatif à la constitution et au mode de fonctionnement des Sociétés commerciales et à la responsabilité de leurs organes, est sujet au contrat social et le cas échéant, à la loi qui le régit.

Article 250

L'émission d'actions et d'obligations dans un État contractant, les formes et garanties de publicité et la responsabilité des

gérants de succursales vis-à-vis des tiers sont soumises à la loi territoriale.

Article 251

Sont également territoriales les lois qui imposent aux sociétés un régime spécial en raison de leurs opérations.

Article 252

Les Sociétés commerciales dûment constituées dans l'un des États contractants jouiront dans les autres États, de la même personnalité civile, sauf les restrictions apportées par la législation territoriale.

Article 253

Sont territoriales les dispositions qui se réfèrent à la création, au fonctionnement et aux priviléges des banques d'émission et d'escompte, des sociétés de magasins généraux de dépôt et autres semblables.

CHAPITRE II

De la commission commerciale

Article 254

Sont d'ordre public international les dispositions relatives à la forme de la vente urgente par le commissionnaire, pour conserver dans la mesure du possible la valeur des choses qui font l'objet de la commission.

Article 255

Les obligations du mandataire sont soumises à la Loi du domicile commercial du mandant.

CHAPITRE III

Du dépôt et du prêt commercial

Article 256

Les responsabilités non civiles du dépositaire sont régies par la loi du lieu du dépôt.

Article 257

Le taux ou la liberté de l'intérêt commercial sont d'ordre public international.

Article 258

Sont territoriales les dispositions relatives au prêt avec ga-

rantie d'effets susceptibles de cotisation, fait en bourse, avec l'intervention d'un agent membre d'une corporation, ou fonctionnaire officiel.

CHAPITRE IV

Du transport terrestre

Article 259

Dans cas de transport international, il n'y a qu'un contrat régi par la loi qui lui correspond suivant sa nature.

Article 260

Les délais et formalités pour l'exercice d'actions nées de ce contrat et qui n'y sont pas prévus, sont régis par la loi du lieu où se sont produits les faits qui leur donnent naissance.

CHAPITRE V

Des contrats d'assurance

Article 261

Le contrat d'assurance contre l'incendie est régi par la loi du lieu où se trouve, au moment de signature du contrat la chose assurée.

Article 262

Les autres contrats d'assurance suivent la règle générale et sont régis par la Loi personnelle commune des parties ou à son défaut par la Loi du lieu du Contract; mais les formalités externes pour prouver des faits ou omissions nécessaires à l'exercice ou à la conservation des actions ou droits sont soumises à la Loi du lieu où se sont produits le fait ou l'omission qui les a fait naître.

CHAPITRE VI

Du contrat et de la lettre de change et des effets de commerce analogues

Article 263

Les formes du tirage, de l'endossement, de la caution, de l'intervention, de l'acceptation et du protêt d'une lettre de change sont soumises à loi du lieu où se passe chacun de ces actes.

Article 264

A défaut de convention expresse ou tacite, les rapports juri-

diques entre le tireur et le preneur sont régis par la loi du lieu où la lettre est tirée.

Article 265

Dans le même cas, les obligations et droits entre l'acceptant et le porteur sont régis par la loi du lieu où l'acceptation est intervenue.

Article 266

Dans la même hypothèse, les effets juridiques que l'endossement produit entre endosseur et endossataire dépendent de la loi du lieu où la lettre a été endossée.

Article 267

La plus ou moins grande étendue des obligations de chaque endosseur ne modifie pas les droits et devoirs du tireur et du premier endosseur.

Article 268

L'aval, dans les mêmes conditions, est régi par la loi du lieu où il est donné.

Article 269

Les effets juridiques de l'acceptation par intervention sont régis, à défaut de convention, par la loi du lieu où le tiers intervient.

Article 270

Les délais et formalités pour l'acceptation, le paiement et le protêt sont soumis à la loi locale.

Article 271

Les règles du présent chapitre sont applicables aux bons, obligations, billets et mandats ou chèques.

CHAPITRE VII

De la falsification, vol, détournement ou perte d'effets de crédit et titres au porteur

Article 272

Les dispositions relatives à la falsification, au vol ou au détournement des valeurs et titres au porteur, sont d'ordre public international.

Article 273

L'adoption des mesures prescrites par la loi du lieu où le fait s'est produit ne dispense pas les intéressés de prendre toutes

autres mesures fixées par la loi du lieu où ces actes et effets sont cotés et par la loi du lieu de leur paiement.

TITRE III

DU COMMERCE MARITIME ET AÉRIEN

CHAPITRE I

Des navires et aéronefs

Article 274

La nationalité des navires est établie par la patente de navigation et le certificat d'enregistrement, et a le pavillon comme signe distinctif apparent.

Article 275

La loi du pavillon régit les formes de publicité requises pour le transfert de la propriété du navire.

Article 276

Il faut soumettre à la loi de la situation la faculté de saisir et vendre aux enchères un navire, qu'il soit ou non chargé et expédié.

Article 277

Les droits des créanciers après la vente du navire et leur extinction sont régis par la loi du pavillon.

Article 278

L'hypothèque maritime, les priviléges et garanties de caractère réel, constitués conformément à la loi du pavillon, ont des effets extraterritoriaux même dans les pays dont la législation ne connaît pas ou ne réglemente pas cette hypothèque, ou ces priviléges.

Article 279

Sont soumis également à la loi du pavillon les pouvoirs et obligations du capitaine et la responsabilité des propriétaires et armateurs pour leurs actes.

Article 280

La reconnaissance du navire, la demande d'un pilote et la police sanitaire dépendent de la loi territoriale.

Article 281

Les obligations des officiers et gens de mer et l'ordre interne du navire sont soumis à la loi du pavillon.

Article 282

Les précédentes dispositions de ce chapitre s'appliquent également aux aéronefs.

Article 283

Les règles sur la nationalité des propriétaires de navires et aéronefs et des armateurs, des officiers et de l'équipage sont d'ordre public international.

Article 284

Sont également d'ordre public international les dispositions relatives à la nationalité des navires et aéronefs pour le commerce fluvial, lacustre et de cabotage ou entre lieux déterminés du territoire des États contractants, de même que pour la pêche et les autres exploitations sous-marines dans la mer territoriale.

CHAPITRE II

Des contrats spéciaux du commerce maritime et aérien

Article 285

L'affrètement, quand il n'est pas par un contrat d'adhésion, sera régi par la loi du lieu de sortie des marchandises. Les actes d'exécution du contrat s'effectueront conformément à la loi du lieu où ils sont réalisés.

Article 286

Les pouvoirs du capitaine pour le prêt à la grosse sont déterminés par la loi du pavillon.

Article 287

Le contrat de prêt à la grosse, sauf convention contraire, est soumis à la loi du lieu où le prêt est effectué.

Article 288

Pour déterminer si l'avarie est simple ou grosse, et la proportion dans laquelle le navire et le chargement contribuent à la supporter, la loi du pavillon est appliquée.

Article 289

L'abordage fortuit dans les eaux territoriales ou dans l'air national est soumis à la loi du pavillon, s'il est commun.

Article 290

Dans le même cas, si les pavillons diffèrent, la loi du lieu s'applique.

Article 291

La même loi locale s'applique en tout cas à l'abordage délictueux dans les eaux territoriales ou l'air national.

Article 292

En cas d'abordage fortuit ou délictueux en haute mer ou air libre, la loi du pavillon s'appliquera si tous les navires ou aéronefs ont le même pavillon.

Article 293

En cas contraire, on appliquera la loi du pavillon du navire ou de l'aéronef abordés, si l'abordage est délictueux.

Article 294

En cas d'abordage fortuit en haute mer ou dans l'air entre navires et aéronefs de pavillons différents, chacun supportera la moitié de la somme totale du dommage, réparti suivant la loi de l'un d'eux et l'autre moitié répartie suivant la loi de l'autre.

TITRE IV

De la prescription

Article 295

La prescription des actions nées de contrats et actes de commerce sera conforme aux règles établies dans le présent code pour les actions civiles.

LIVRE III

DROIT PENAL INTERNATIONAL

CHAPITRE I

Les lois pénales

Article 296

Les lois pénales obligent tous ceux qui résident sur le territoire, sans autres exceptions que celles qui sont établies au présent chapitre.

Article 297

N'est pas soumis aux lois pénales de chaque état contractant le chef d'un autre état qui se trouverait sur son territoire.

Article 298

Jouissent de la même exemption les agents diplomatiques des Etats contractants dans chacun des autres, ainsi que leurs employés étrangers et les membres de leur famille, vivant en leur compagnie.

Article 299

Les Lois pénales d'un Etat ne sont pas non plus applicables aux délits commis dans le périmètre des opérations militaires, quand il a autorisé le passage, sur son territoire, de l'armée d'un autre Etat contractant, pourvu qu'ils n'aient pas de relation légale avec la dite armée.

Article 300

La même exemption s'applique aux délits commis dans les eaux territoriales ou dans l'air national, à bord de navires ou aéronefs de guerre étrangers.

Article 301

Il en est de même des délits commis dans les eaux territoriales ou l'air national sur des navires ou des aéronefs marchands étrangers, s'il n'ont aucune relation avec le pays et ses habitants et ne troubent pas leur tranquillité.

Article 302

Quand les éléments dont se compose un délit sont accomplis dans des Etats contractants différents, chaque Etat peut punir l'acte passé dans son pays, s'il constitue à lui seul un fait punisable.

Dans les cas contraires, la préférence sera donnée au droit de la souveraineté du lieu où le délit a été commis.

Article 303

S'il s'agit de délits connexes sur les territoires de plus d'un Etat contractant, le délit commis sur leur territoire sera seul soumis à la loi pénale de chacun d'eux.

Article 304

Aucun Etat contractant n'appliquera sur son territoire les lois pénales des autres.

CHAPITRE II

Délits commis dans un Etat étranger contractant

Article 305

Sont soumis à l'étranger aux lois pénales de chaque Etat contractant ceux qui ont commis un délit contre sa sécurité interne ou externe ou contre son crédit public, quels que soient la nationalité et le domicile du délinquant.

Article 306

Tout national d'un État contractant ou tout étranger y étant domicilié qui commet à l'étranger un délit contre l'indépendance de cet État est soumis à ses lois pénales.

Article 307

Sont également soumis aux lois pénales de l'État contractant dans lequel ils peuvent être arrêtés et jugés, ceux qui commettent hors du territoire un délit comme la traite des blanches, que cet État contractant s'est engagé à réprimer en vertu d'un accord international.

CHAPITRE III

Délits commis en dehors de tout territoire national

Article 308

La piraterie, la traite des nègres et le commerce des esclaves, la traite des blanches, la destruction ou la détérioration de câbles sous-marins et les autres délits de même caractère contre le droit international, commis en haute mer, dans l'air libre et en territoires non encore organisés en États, sont châtiés par l'auteur de la capture conformément à ses propres lois pénales.

Article 309

En cas d'abordage délictueux, en haute mer, ou dans l'air, entre navires et aéronefs de pavillons différents, la loi pénale de la victime s'appliquera.

CHAPITRE IV

Questions diverses

Article 310

Pour déterminer la nature légale de la réiteration et de la

récidive, on tiendra compte de la sentence rendue dans un Etat étranger contractant sauf si la législation locale s'y oppose.

Article 311

La peine de l'interdiction civile aura des effets dans les autres Etats, au moyen de l'accomplissement préalable des formalités de registre ou de publication exigées par la législation de chacun d'eux.

Article 312

La prescription du délit est soumise à la loi de l'Etat à qui il appartient d'en connaître.

Article 313

La prescription de la peine est régie par la loi de l'Etat qui l'a infligée.

LIVRE IV

DROIT DE PROCÉDURE INTERNATIONAL

TITRE I

Principes généraux

Article 314

La loi de chaque Etat contractant détermine la compétence de ses tribunaux, ainsi que leur organisation, les formes de procédure et d'exécution des jugements et les recours contre les décisions.

Article 315

Aucun Etat contractant n'organisera ni entretiendra sur son territoire des tribunaux spéciaux pour les membres des autres États contractants.

Article 316

La compétence *ratione loci* est soumise, en matière de relations internationales à la loi de l'Etat qui l'établit.

Article 317

Les compétences internationales *ratione materiae* et *ratione personae* en matière de relations internationales ne doivent pas être fondées pour les États contractants sur la qualité de nationaux ou d'étrangers des personnes intéressées, et au préjudice de celles-ci.

TITRE II

COMPÉTENCE

CHAPITRE I

Des règles générales de compétence en matières civile et commerciale

Article 318

Le juge compétent en premier lieu, pour connaître des litiges auxquels a donné naissance l'exercice des actions civiles et commerciales de toute nature, sera celui auquel les plaideurs se soumettent expressément ou tacitement, à condition que l'un d'eux au moins soit un national de l'État contractant auquel le juge appartient ou qu'il y ait son domicile, sauf les dispositions contraires du droit local.

La soumission ne sera pas possible pour les actions réelles ou mixtes sur les biens immeubles si la Loi de leur situation s'y oppose.

Article 319

Les parties ne pourront se soumettre qu'au juge investi d'une juridiction ordinaire et compétent pour connaître des affaires de même nature et du même degré.

Article 320

En aucun cas, les parties ne pourront se soumettre expressément ou tacitement pour un recours à un juge ou tribunal différent de celui à qui est subordonnée, suivant les lois locales, la juridiction qui a connu de l'affaire en première instance.

Article 321

On comprendra par soumission expresse, celle qui est faite par les intéressés en renonçant nettement et formellement à leur propre tribunal et en désignant d'une manière très précise le juge auquel ils se soumettent.

Article 322

La soumission tacite sera considérée faite, par le demandeur, du fait qu'il comparaît devant le juge pour formuler la dénonciation et, par le demandé, du fait qu'il pratique, après sa comparution, toute diligence qui ne soit pas pour proposer formellement le déclinatoire. On ne considérera pas qu'il y a soumission tacite si la procédure est suivie par défaut.

Article 323

En dehors des cas de soumission expresse ou tacite et sauf les dispositions contraires du droit local, le juge compétent pour l'exercice des actions personnelles sera celui du lieu d'exécution de l'obligation et, à son défaut, celui du domicile ou de la nationalité des personnes appelées en justice et subsidiairement celui de leur résidence.

Article 324

Pour l'exercice des actions réelles mobilières, le juge de la situation sera compétent; si elle n'est pas connue du demandeur, ce sera celui du domicile et, à son défaut celui de la résidence du demandé.

Article 325

Pour l'exercice des actions réelles sur des immeubles et pour celui des actions mixtes de bornage et de partage de l'indivis, le juge compétent sera celui de la situation des biens.

Article 326

Si, dans les cas auxquels se réfèrent les deux articles précédents, il y a des biens situés dans plus d'un Etat contractant, l'on pourra s'adresser aux juges de l'un d'eux, sauf le cas où le défendrait pour les mmeubles, la Loi de la situation.

Article 327

Dans les procédures de succession testamentaire ou *ab intestata*, le juge compétent sera celui du lieu où le décédé avait son dernier domicile.

Article 328

Dans les cas de concordat et dans ceux de faillite, quand la comparution du débiteur est volontaire, le juge compétent sera celui du domicile.

Article 329

En cas de concordat ou de faillite provoqués par les créanciers, le juge compétent sera celui de l'un des lieux où est présentée la réclamation qui les motive, en donnant la préférence, quand il se trouvera parmi eux, à celui du domicile du débiteur, si celui-ci ou la majorité des créanciers le réclame.

Article 330

Pour les actes de juridiction volontaire, excepté aussi le cas de soumission et sous réserve des dispositions contraires du droit local, le juge compétent sera celui du lieu où la personne qui motive la demande a ou ait eu son domicile, ou à défaut, sa résidence.

Article 331

Quant aux actes de juridiction volontaire en matière de commerce et hors le cas de soumission sauf les dispositions contraires du droit local, le juge du lieu où l'obligation doit s'exécuter ou, à son défaut, celui du lieu du fait qui leur donne naissance, sera compétent.

Article 332

Dans chaque Etat contractant, en cas de compétence de divers juges, la préférence sera régie par leur droit national.

CHAPITRE II

Exception aux règles générales de compétence en matières civile et commerciale

Article 333

Les juges et tribunaux de chaque état contractant seront incomptétents pour connaître des affaires civiles et commerciales, dans lesquelles seraient appelés en justice les autres Etats contractants ou leurs chefs, en cas d'exercice d'action personnelle, sauf le cas de soumission expresse ou de demandes reconventionnelles.

Article 334

Dans le même cas et sous réserve de la même exception, ils seront incomptétents pour l'exercice d'action réelles, si l'Etat contractant ou son Chef ont agi dans l'affaire comme tels, et en leur caractère public, et les dispositions du dernier paragraphe de l'article 318, doivent être appliquées dans ce cas.

Article 335

Sont exclus de l'extradition les délits politiques et les actes connexes, suivant la qualification de l'Etat requis.

Article 336

La règle de l'article précédent sera applicable aux procédures concernant les jugements universels, quel que soit le caractère avec lequel interviendrait l'Etat étranger contractant ou son chef, pour connaître des délits et infractions qui y sont commis et pour les juger.

Article 337

Les dispositions des articles précédents s'appliqueront aux agents diplomatiques étrangers et aux commandants de navires ou aéronefs de guerre.

Article 338

Les consuls étrangers ne pourront se prévaloir de l'incompétence des juges et tribunaux civils du pays où ils agissent, que pour leurs actes officiels.

Article 339

En aucun cas les juges ou tribunaux ne pourront adopter des voies d'exécution ou d'autre nature, susceptibles de s'exercer à l'intérieur des légations ou des consulats et de leurs archives, ni en ce qui concerne la correspondance diplomatique ou consulaire, sauf le cas où les agents diplomatiques ou consulaires y consentiraient.

CHAPITRE III

Règles générales de compétence en matière pénale.

Article 340

Les juges et tribunaux d'un Etat contractant sont compétents pour connaître des délits et infractions qui y sont commis et les juger.

Article 341

Leur compétence s'étend à tous les autres délits et infractions auxquels doit s'appliquer la loi pénale de l'Etat, conformément aux dispositions du présent code.

Article 342

Elle comprend aussi les délits ou infractions commis à l'étranger par les fonctionnaires nationaux qui jouissent du bénéfice de l'immunité.

CHAPITRE IV

Exceptions aux règles générales de compétence en matière pénale

Article 343

Ne sont pas soumis, en matière pénale, à la compétence des juges et tribunaux des États contractants, les personnes et les délits ou infractions qui ne sont pas visés par la loi pénale de ces Etats.

TITRE III

De l'extradition

Article 344

Pour rendre effective la compétence judiciaire internatio-

nale, en matière pénale, chacun des Etats contractants accèdera à la demande, faite par l'un des autres, de remise des individus condamnés ou poursuivis pour délit, pourvu que cette demande se conforme au présent Titre III ainsi qu'aux clauses des traités ou accords internationaux qui donnent la liste des infractions pénales autorisant l'extradition.

Articles 345

Les États contractants ne sont pas obligés de livrer leurs nationaux. La nation qui se refusera à livrer l'un de ses nationaux, devra le juger.

Article 346

Quand, avant la réception de la demande d'extradition, un inculpé ou condamné a commis un délit dans le pays auquel est demandée son extradition, cette remise peut être différée jusqu'à ce qu'il soit jugé et ait subi sa peine.

Article 347

Si plusieurs États contractants sollicitent l'extradition d'un délinquant pour le même délit, il devra être remis à celui sur le territoire duquel ce délit a été commis.

Article 348

Si elle est demandée pour des délits différents, la préférence sera donnée à l'Etat contractant sur le territoire duquel aura été commis le délit le plus grave, suivant la législation de l'Etat requis.

Article 349

Si tous les faits imputés ont la même gravité, l'Etat contractant qui présentera le premier la demande d'extradition aura la préférence. Si les demandes sont simultanées, l'Etat requis décidera, mais il donnera la préférence à l'Etat d'origine, ou à son défaut, à celui du domicile du délinquant, si l'un d'eux est parmi les sollicitants.

Article 350

Les précédentes règles sur la préférence ne seront pas applicables si l'Etat contractant est obligé vis-à-vis d'un tiers, en vertu de traités en vigueur antérieurs au présent Code, à l'accorder d'une manière différente.

Article 351

Pour que l'extradition soit accordée, il est nécessaire que le délit ait été commis sur le territoire de l'Etat qui la demande ou que ses lois pénales lui soient applicables conformément au Titre II du présent Code.

Article 352

L'extradition s'étend aux prévenus ou condamnés comme auteurs, complices ou recéleurs du délit.

Article 353

Il est nécessaire que le délit qui motive l'extradition ait le caractère de délit dans la législation de l'Etat requérant et dans celle de l'Etat requis.

Article 354

Il sera également exigé que la peine prévue pour les faits incriminés, suivant leur qualification provisoire ou définitive par le juge ou tribunal compétent de l'Etat qui sollicite l'extradition, ne soit pas inférieure à un an d'emprisonnement, et que soit autorisé ou prévu l'emprisonnement ou détention préventive du prévenu, s'il n'y avait pas encore de jugement définitif. Cette décision doit condamner à la privation de la liberté.

Article 355

Sont exclus de l'extradition les délinquants politiques, suivant la qualification de l'Etat requis.

Article 356

L'extradition ne sera pas accordée non plus, s'il est prouvé que la demande est présentée, en fait, dans le but de juger et condamner l'accusé pour un délit de caractère politique, suivant la même qualification.

Article 357

Ne sera pas considéré délit politique, ni fait connexe, celui d'homicide, ou d'assassinat du chef d'un Etat contractant, ou de n'importe quelle personne revêtue d'autorité.

Article 358

L'extradition ne sera pas accordée, si la personne réclamée a été déjà jugée et mise en liberté, ou si elle a subi sa peine ou s'il y a une procédure en instance, sur le territoire de l'Etat requis, pour le même délit que celui qui a motivé la demande.

Article 359

Il ne pourra pas non plus être accédé à la requête si le délit ou la peine sont prescrits conformément aux lois de l'Etat requérant ou requis.

Article 360

La législation d'un Etat requis postérieure au délit, ne pourra pas empêcher l'extradition.

Article 361

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires peuvent demander qu'on arrête et remette à bord d'un navire ou aéronef de leur pays, les officiers, marins ou équipages de leurs navires ou aéronefs de guerre ou marchands, qui auraient déserté.

Article 362

Aux effets de l'article précédent, ils présenteront à l'autorité locale compétente, en lui en laissant en outre une copie authentique, les registres du navire, ou de l'aéronef, le rôle de l'équipage ou tout autre document officiel sur lequel est fondée la demande.

Article 363

Dans les pays limitrophes, des règles spéciales pourront être établies pour l'extradition dans les régions ou localités de la frontière.

Article 364

La demande d'extradition doit être faite par l'intermédiaire de fonctionnaires dûment autorisés à cette fin, par les lois de l'Etat requérant.

Article 365

À la demande définitive d'extradition doivent être joints:

1° Un jugement de condamnation ou un mandat ou ordre d'emprisonnement ou un document de même nature ou un acte obligeant l'intéressé à comparaître périodiquement devant la justice répressive, accompagné des formalités de procédure qui déterminent les preuves au moins des indices rationnels de la culpabilité de la personne dont ils agit;

2° La filiation de l'individu réclamé et les particularités ou circonstances qui peuvent servir à l'identifier;

3° Une copie authentique des dispositions qui établissent la qualification légale du fait qui motive la demande de remise, définissent la participation attribuée à l'inculpé et précisent la peine applicable.

Article 366

L'extradition peut être demandée télégraphiquement, et dans ce cas, les actes mentionnés à l'article précédent seront présentés à l'Etat requis ou à sa légation ou consulat général dans le pays requérant, dans les deux mois qui suivront la détention de l'inculpé à défaut de quoi, il sera mis en liberté.

Article 367

Si l'Etat requérant ne prend aucune disposition sur la personne réclamée dans les trois mois qui suivront le moment où elle a été mise à sa disposition, elle sera mise également en liberté.

Article 368

Le détenu pourra utiliser, dans l'État auquel est adressée la demande d'extradition, tous moyens légaux accordés aux nationaux pour recouvrer la liberté, en se basant sur les dispositions du présent Code.

Article 369

Le détenu pourra également, à partir de ce fait, utiliser les recours légaux nécessaires dans l'Etat qui demande l'extradition, contre les qualifications et les résolutions sur lesquelles elle est fondée.

Article 370

La remise doit être faite avec tous objets qui se trouvent au pouvoir de la personne réclamée, que ce soient le produit du délit imputé ou des pièces qui pourront servir pour la preuve de ce délit, dans la mesure où cela sera possible conformément aux lois de l'Etat qui l'effectue et en respectant dûment les droits des tiers.

Article 371

La remise des objets à laquelle se réfère l'article précédent pourra être opérée, si l'Etat qui sollicite l'extradition la demande, même si le détenu meurt ou s'évade avant qu'elle soit effectuée.

Article 372

Les frais de détention et de remise seront à la charge de l'Etat requérant mais celui-ci n'aura rien à payer pour les services rendus par les fonctionnaires publics à la solde du gouvernement auquel l'extradition est demandée.

Article 373

Le montant des services rendus par des fonctionnaires publics ou officiels qui ne perçoivent que des droits et primes n'excedera pas ceux auxquels ils ont droit pour ces diligences ou services suivant les lois du pays où ils résident.

Article 374

Toute responsabilité que pourra entraîner la détention préventive sera à la charge de l'Etat qui l'aura sollicitée.

Article 375

Le transit de la personne extradée et des surveillants par le territoire d'un Etat tiers contractant sera permis moyennant l'exhibition de l'exemplaire original ou d'une copie authentique de l'acte accordant l'extradition.

Article 376

L'Etat qui obtient l'extradition d'un accusé qui est ensuite absous sera tenu de communiquer à celui qui l'aura accordée une copie authentique du jugement.

Article 377

La personne livrée ne pourra être détenue en prison ni jugée par l'Etat contractant auquel elle est remise pour un délit différent de celui qui aurait motivé l'extradition et commis antérieurement à celui-ci, à moins que l'Etat requis n'y consente, ou que l'extradé ne reste libre dans l'Etat requérant trois mois après avoir été jugé et absous pour le délit qui a donné naissance à l'extradition ou après avoir subi la peine d'emprisonnement infligée.

Article 378

En aucun cas, on ne prononcera ni exécutera la peine de mort pour le délit qui a été la cause de l'extradition.

Article 379

Quand on imputera la détention préventive, on comptera le temps passé à partir de la détention de l'extradé dans l'Etat auquel il a été reclamé.

Article 380

Le détenu sera mis en liberté, si l'Etat requérant n'a pas présenté la demande d'extradition dans un délai raisonnable, qui sera le plus bref possible en tenant compte de la distance et des facilités de communication postale entre les deux Pays, à partir de la prison préventive.

Article 381

Dans le cas de refus d'extrader, une seconde demande ne pourra être faite pour le même délit.

TITRE IV

Du droit d'ester en justice et de ses modalités

Article 382

Les nationaux de chaque Etat contractant jouiront dans chacun des autres, du bénéfice de l'assistance judiciaire aux mêmes conditions que les nationaux.

Article 383

Il ne sera fait aucune différence entre les nationaux et les étrangers, dans les Etats contractants, relativement à la caution pour comparaître en justice.

Article 384

Les étrangers appartenant à un État contractant pourront exercer dans les autres, l'action publique en matière pénale aux mêmes conditions que les nationaux.

Article 385

Ces étrangers n'auront pas besoin non plus de fournir caution pour se quereller par action privée dans les cas où elle ne serait pas exigée des nationaux.

Article 386

Aucun des Etats contractants n'imposera aux nationaux d'un autre les cautions *judicio sisti et onus probandi* dans les cas où elles ne sont pas exigées de leurs propres nationaux.

Article 387

Ne seront autorisées ni les saisies préventives, ni la caution pour éviter l'incarcération, ni les autres mesures de procédure d'un caractère analogue, vis-à-vis des nationaux des États contractants du fait de leur seule qualité d'étrangers.

TITRE V

Requêtes et commissions rogatoires

Article 388

Toute diligence judiciaire qu'un Etat contractant a besoin de pratiquer dans un autre, sera effectuée sur une requête ou commission rogatoire transmise par la voie diplomatique. Cependant, les Etats contractants pourront proposer ou accepter en matière civile ou criminelle une autre forme de transmission.

Article 389

Il appartient au juge requérant de décider de sa propre compétence, de la légalité et de l'opportunité de l'acte ou de la preuve, sans préjudice de la juridiction du juge requis.

Article 390

Le juge requis décidera sur sa propre compétence *ratione materiae* pour l'action dont il est saisi.

Article 391

Celui qui reçoit une requête ou commission rogatoire doit se conformer quant à son objet à la loi de son commettant et quant à la forme d'exécution à sa propre loi.

Article 392

La requête sera rédigée dans la langue de l'Etat requérant et sera accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis, dûment approuvée par un traducteur juré.

Article 393

Les intéressés à l'exécution de requêtes et commissions rogatoires, d'une nature privée, devront nommer des fondés de pouvoirs, prenant à leur charge les frais de ces fondés de pouvoirs et de la procédure.

TITRE VI

Exceptions qui ont un caractère international

Article 394

La litispendance en cas d'instance engagée dans un autre Etat contractant pourra être invoquée en matière civile, quand le jugement rendu dans l'un d'eux doit produire dans un autre les effets de la chose jugée.

Article 395

En matière pénale, l'exception de litispendance ne pourra être invoquée en cas d'instance pendante dans un autre Etat contractant.

Article 396

L'exception de chose jugée qui se fonde sur la décision d'un autre Etat contractant ne pourra être invoquée que lorsqu'il aura été rendu un jugement sur comparution des parties ou de leurs représentants légaux, sans qu'ait été mise en question la compétence du tribunal étranger en raison de dispositions du présent Code.

Article 397

Dans tous les cas de rapports juridiques soumis au présent Code, des questions de compétence pourront être soulevées par déclinatoire fondé sur les règles de cette convention.

TITRE VII

DE LA PREUVE

CHAPITRE I

Dispositions générales sur la preuve

Article 398

La loi qui régit le délit ou le rapport de droit, objet de l'instance civile ou commerciale, détermine à qui incombe la preuve.

Article 399

Pour décider les moyens de preuve qui peuvent être employés dans chaque cas, la loi du lieu où a été réalisé l'acte ou le fait qu'il s'agit de prouver est compétente, à l'exception de ceux qui ne sont pas autorisés par la loi du lieu où l'instance est engagée.

Article 400

La forme dans laquelle doit être pratiquée toute preuve est fixée par la loi en vigueur dans le lieu où elle est effectuée.

Article 401

La preuve doit être appréciée d'après la loi du juge.

Article 402

Les actes passés dans chacun des Etats contractants auront dans les autres les mêmes effets en justice que s'ils y avaient été passés, s'ils réunissent les conditions suivantes :

1^o Que l'affaire ou l'objet de l'acte ou contrat soit licite et permis par les lois du pays où il est passé et de celui où le document est employé;

2^o Que les parties aient l'aptitude et la capacité nécessaires pour s'obliger conformément à leur loi personnelle;

3^o Que lors de la rédaction de l'acte, on ait observé les formes et solennités prescrites dans le pays où les actes ou contrats ont été passés;

4^o Que l'acte soit légalisé et remplisse les autres conditions nécessaires à son authenticité dans le lieu où il est utilisé.

Article 403

La force exécutoire d'un acte est soumise au droit local.

Article 404

La capacité des témoins et leur récusation dépendent de la loi à laquelle est soumis le rapport de droit, objet de l'instance.

Article 405

La forme du serment sera conforme à la loi du juge ou tribunal devant lequel il est prêté et son efficacité à celle qui régit le fait sur lequel il porte.

Article 406

Les présomptions résultant d'un fait sont soumises à la loi du lieu où s'est réalisé l'acte qui les a fait naître.

Article 407

La preuve par indices est soumise à la loi du juge ou du tribunal.

CHAPITRE II

Règles spéciales sur la preuve des lois étrangères

Article 408

Les juges et tribunaux de chaque Etat contractant appliqueront d'office, quand il conviendra, les lois des autres, sans préjudice des modes de preuve auxquels se réfère ce chapitre.

Article 409

La partie qui demande l'application du droit de l'un des Etats contractants, dans l'un des autres, ou qui s'y refuse, pourra en établir le texte, justifier la mise en vigueur et fixer son sens par une attestation de deux Avocats, en fonctions dans le Pays dont la législation est en cause, attestation qui devra être fournie dûment légalisée.

Article 410

A défaut de preuve ou si le Juge ou le Tribunal l'estime insuffisante pour n'importe quelle raison, ils pourront demander d'office, par voie diplomatique, avant de rendre leur décision, que l'Etat dont la législation est en cause, fournisse un rapport sur le texte, la mise en vigueur et l'interprétation du droit applicable.

Article 411

Chaque Etat contractant s'oblige à fournir aux autres, dans le plus bref délai possible, l'information à laquelle se réfère l'article précédent et qui devra émaner de son Tribunal Suprême, ou de l'une de ses Chambres ou Sections, ou du Ministère Public, ou du Secretariat ou Ministère de la Justice.

TITRE VIII

Du pourvoi en cassation

Article 412

Dans tout État contractant où existe le pourvoi en cassation ou une autre institution semblable, il pourra être interposé pour violation, interprétation erronée ou application indue d'une loi d'un autre Etat contractant dans les mêmes conditions et cas que pour le droit national.

Article 413

Seront applicables au pourvoi en cassation les règles établies dans le chapitre II du titre précédent, alors même que le juge ou le tribunal inférieur en aient déjà fait usage.

TITRE IX

DE LA FAILLITE OU CONCORDAT

CHAPITRE I

Unité de la faillite ou du Concordat

Article 414

Si le débiteur en état de concordat, ou de faillite possède un seul domicile civil ou commercial, il ne pourra y avoir qu'un seul jugement de procédure préventive de concordat, ou de faillite, ou de suspension de paiements, ou d'expectative, pour tous ses biens et toutes ses obligations dans les Etats contractants.

Article 415

Si une même personne ou société possède dans plus d'un Etat contractant divers établissements de commerce entièrement séparés économiquement, il peut y avoir autant de procédures préventives de faillite que d'établissements commerciaux.

CHAPITRE II

Universalité de la faillite ou du Concordat et de leurs effets

Article 416

La déclaration d'incapacité du débiteur en faillite ou en Concordat, produit dans les Etats contractants des effets extraterritoriaux, au moyen de l'accomplissement préalable des formalités de registre ou publicité, exigées par la législation de chacun d'eux.

Article 417

La déclaration de faillite ou de concordat prononcée dans un Etat contractant sera exécutoire dans les autres, dans les cas et suivant les formes établies dans le présent Code pour les décisions judiciaires; mais elle produira, du jour où elle sera définitive et vis-à-vis des personnes pour lesquelles elle sera rendue, les effets de la chose jugée.

Article 418

Les pouvoirs et fonctions des Syndics nommés dans un des

États contractants, conformément aux dispositions du présent Code auront un effet extraterritorial dans les autres, sans nécessité d'aucune formalité locale.

Article 419

L'effet rétroactif de la déclaration de faillite ou de Concordat et l'annulation de certains actes par suite de ces jugements, seront déterminés par la loi de ces procédures et seront applicables au territoire des autres Etats contractants.

Article 420

Les actions réelles et les droits de même caractère restent soumis, nonobstant la déclaration de faillite ou de concordat, à la loi de la situation des choses qu'elles concernent et à la compétence des juges du lieu où elles se trouvent.

CHAPITRE III

Du concordat et de la réhabilitation

Article 421

L'accord entre les créanciers et le commerçant en faillite ou en concordat aura des effets extraterritoriaux dans les autres Etats contractants, sauf le droit des créanciers par action réelle qui ne l'auraient pas accepté.

Article 422

La réhabilitation du failli a également un effet extraterritorial dans les autres Etat contractants, à partir du jour où est définitive la décision judiciaire qui l'ordonne, et conformément à ses termes.

TITRE X

EXECUTION DE JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX ETRANGERS

CHAPITRE I

Matière civile

Article 423

Toute sentence civile ou contentieuse administrative prononcée dans un des Etats contractants aura force de loi et pourra être exécutée dans les autres Etats si elle réunit les conditions suivantes :

1° Que le Tribunal ou le Juge qui l'a prononcée ait compé-

tence pour connaître l'affaire et la juger conformément aux règles du présent Code.

2° Que les parties aient été citées personnellement ou par leur représentant légal pour le jugement.

3° Que la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public ou au droit constitutionnel du pays où elle doit être exécutée.

4° Qu'elle soit exécutoire dans l'Etat où elle aura été prononcée.

5° Qu'elle soit traduite d'une manière autorisée par un fonctionnaire ou un interprète officiel de l'Etat où elle doit être exécutée.

6° Que le document qui la renferme réunisse les conditions nécessaires pour être considéré comme authentique dans l'Etat de provenance et celles qu'exige pour son authenticité la législation de l'Etat dans lequel on désire faire exécuter la sentence.

Article 424

L'exécution doit être demandée au juge ou tribunal compétent pour faire exécuter la décision, après avoir rempli au préalable les formalités requises par la législation intérieure.

Article 425

Contre la résolution judiciaire, à laquelle se réfère l'article précédent, seront admis tous les recours que les lois de ces Etats accordent pour les sentences définitives prononcées dans un jugement déclaratif civil de la plus grande importance.

Article 426

Le juge ou le tribunal à qui est demandée l'exécution entendra, avant de l'ordonner ou de la refuser, et dans un délai de vingt jours, la partie contre laquelle elle est demandée, ainsi que le Procureur ou Ministère Public.

Article 427

La citation de la partie qui doit être entendue sera faite par requête ou commission rogatoire, suivant les dispositions du présent Code si elle avait son domicile à l'étranger et si elle n'avait pas dans le pays la représentation suffisante; ou dans la forme fixée par le droit local si elle avait son domicile dans l'Etat requis.

Article 428

Passé le délai fixé par le juge ou le tribunal pour la comparution, l'affaire suivra son cours, que la personne citée ait comparu ou non.

Article 429

Si l'exécution est refusée, le document exécutoire sera retourné à celui qui l'aura présenté.

Article 430

Quand on accèdera à exécuter la sentence, cette exécution sera conforme aux formalités déterminées par la loi du juge ou tribunal pour ses propres jugements.

Article 431

Les sentences définitives pronocées par un Etat contractant, dont les dispositions ne sont pas susceptibles d'exécution, produiront dans les autres Etats les effets de la chose jugée, s'ils réunissent les conditions fixées à cette fin par le présent Code, sauf ceux qui sont relatifs à leur exécution.

Article 432

La procédure et les effets déterminés par les articles précédents s'appliqueront dans les Etats contractants aux sentences prononcées dans l'un d'eux par des arbitres ou amiables conciliateurs à condition que l'affaire qui les motive puisse être l'objet d'un compromis suivant la législation du pays où est demandée l'exécution.

Article 433

La même procédure s'appliquera également aux sentences civiles prononcées dans l'un des Etats contractants par un tribunal international, à l'égard de personnes ou intérêts privés.

CHAPITRE II

Actes de juridiction volontaire

Article 434

Les dispositions dictées dans les actes de juridiction volontaire en matière commerciale par les juges ou tribunaux d'un Etat contractant ou par ses agents consulaires, seront exécutées dans les autres suivant les formalités et selon la forme indiquée au chapitre précédent.

Article 435

Les décisions dictées dans les actes de juridiction volontaire, en matière civile, provenant d'un Etat contractant, seront admises par les autres si elles réunissent les conditions exigées par le présent Code pour la validité des documents passés en pays étranger et qui émanent d'un juge ou tribunal compétent et auront en conséquence des effets extraterritoriaux.

CHAPITRE III

Matière pénale

Article 436

Aucun Etat contractant n'exécutera les sentences prononcées dans l'un des autres en matière pénale, en ce qui concerne les sanctions de cet ordre qu'elles imposent.

Article 437

Les dites sentences pourront toutefois être exécutées en tout ce qui concerne la responsabilité et ses effets sur les biens du condamné, si elles ont été prononcées par le juge ou le tribunal compétent suivant le présent Code et après avoir entendu l'intéressé, et pourvu que soient remplies les autres conditions de forme et de procédure établies au chapitre 1er. de ce Titre.

(13 Février 1928.)

DECLARATIONS ET RESERVES

RÉSERVE DE LA DÉLÉGATION ARGENTINE

La Délégation Argentine fait inscrire les suivantes réserves qu'elle formule sur le Projet de Convention du Droit International Privé soumis à l'étude de la VI Conférence Internationale Américaine.

1.—Elle comprend que la Codification du Droit International Privé doit être "graduelle et progressive" spécialement au sujet des institutions qui présentent, dans les Etats Américains, des caractères fondamentaux identiques ou analogues.

2.—Elle maintient en vigueur les Traité de Droit Civil International, Droit Pénal International, Droit Commercial International et Droit de Procédure International, sanctionnés à Montevideo en 1889, avec leurs Conventions et leurs Protocoles respectifs.

3.—Elle n'accepte pas des principes qui modifient le système de la "loi du domicile", spécialement en tout ce qui s'oppose au texte et à l'esprit de la législation civile argentine.

4.—Elle n'approuve pas les dispositions qui attaquent directement ou indirectement le principe soutenu par les législations civile et commerciale de la République Argentine que "les personnes juridiques doivent exclusivement leur existence à la loi de l'Etat qui les autorise et, par conséquent, ne sont ni nationales ni étrangères ; leurs fonctions sont déterminées par la dite loi conforme aux principes dérivés du *domicile* qu'elle leur reconnaît."

5.—Elle n'accepte pas les principes qui admettent ou tendent à sanctionner le divorce *ad-vinculum*.

6.—Elle accepte le système de l'“unité des successions” avec la réserve dérivée de la “*lex rei sitae*” en matière de biens immeubles.

7.—Elle admet tout principe qui tend à reconnaître à faveur de la femme les mêmes droits civils dont jouissent les hommes majeurs.

8.—Elle n'approuve pas les principes qui modifient le système du “jus soli”, comme moyen d'obtenir la nationalité.

9.—Elle n'admet pas les principes qui solutionnent les conflits relatifs à la “double nationalité” au préjudice de l'application exclusive du “jus soli”.

10.—Elle n'accepte pas les formules qui permettent l'intervention d'Agents Diplomatiques et Consulaires dans les jugements successoraux qui intéressent des étrangers, sauf dans les cas déjà prévus dans les préceptes établis dans la République Argentine et qui régissent cette intervention.

11.—Dans le régime de la Lettre de Change et Chèques en général elle n'admet pas les dispositions qui modifient les critères acceptés dans des Conférences Universelles, comme celles de La Haye de 1910 et 1912.

12.—Elle fait une réserve expresse sur l'application de la “Loi du Pavillon” en certaines questions relatives au Droit Maritime, spécialement en ce qui concerne le contrat de fret et ses conséquences juridiques, étant d'avis qu'elles doivent être soumises à la loi et juridiction du pays du port de destination.

Ce principe a été soutenu avec succès par le groupe argentin de la “International Law Association” dans sa 31ème Séance et fait partie actuellement des règles appelées “règles de Buenos Aires”.

13.—Elle réaffirme l'opinion de que les délits commis en aéroplanes, dans l'espace aérien national, ou sur les bateaux marchands étrangers, devront être jugés et punis par les Autorités et les lois de l'Etat où ils se commettent.

14.—Elle ratifie la thèse approuvée par l'Institut Américain de Droit International, dans sa séance de Montevideo de 1927, dont le contenu est le suivant: “La Nationalité du condamné ne pourra être invoquée comme raison pour refuser son extradition.”

15.—Elle n'admet pas les principes qui réglementent les questions internationales du travail et la situation juridique des ouvriers pour les raisons déjà exposées, quand fut discuté l'article 198 du Projet de Convention de Droit Civil International, dans l'Assemblée Internationale de Jurisconsultes de Rio de Janeiro en 1927.

La Délégation Argentine rappelle que, comme elle l'a déjà manifesté à l'Honorabile 3me. Commission, elle ratifie, à la VI Conférence Internationale Américaine, les votes émis et l'attitude prise par la Délégation Argentine lors de l'Assemblée Internationale de Jurisconsultes tenue à la Ville de Rio de Janeiro, aux mois d'Avril et Mai de 1927.

DECLARATION DE LA DÉLÉGATION DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Elle regrette beaucoup ne pas pouvoir approuver dès à présent le Code du Docteur Bustamante, car la Constitution des Etats-Unis d'Amérique, les relations des Etats membres de l'Union Fédérale et les attributions et pouvoirs du Gouvernement Fédéral le lui rendent difficile. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique maintient fermement l'idée de ne pas se désunir de l'Amérique Latine, et pour cela, d'accord avec l'article sixième de la Convention qui permet à chaque Gouvernement d'y adhérer plus tard, il fera usage du privilège de cet article afin qu'après avoir examiné soigneusement le Code dans toutes ses stipulations, il puisse y adhérer pour le moins à une grande partie. Pour ces raisons, la Délégation des Etats-Unis d'Amérique réserve son vote dans l'espoir de pouvoir adhérer, comme elle l'a dit, à une partie ou à une partie considérable de ses stipulations.

DECLARATION DE LA DÉLÉGATION DE L'URUGUAY

La Délégation de l'Uruguay fait des réserves, indiquant que l'opinion de cette Délégation est conforme à celle soutenue lors de l'Assemblée de Jurisconsultes de Río de Janeiro, par le Dr. Pedro Varela, Professeur de la Faculté de Droit de son Pays. Elle les maintient et déclare que l'Uruguay donne son approbation au Code en général.

RÉSERVES DE LA DÉLÉGATION DU PARAGUAY

La Délégation du Paraguay déclare:

1.—Maintenir son adhésion aux Traité de Droit Civil International, Droit Commercial International, Droit Pénal International et Droit de Procédure International, approuvés à Montevideo en 1888 & 1889, ainsi qu'aux Conventions et Protocoles qui les accompagnent.

2.—Ne pas être d'accord avec la modification de la "Loi du Domicile" consacrée par la Législation civile de la République.

3.—Maintenir son adhésion au principe de sa Législation: que les personnes juridiques doivent exclusivement leur existence à la Loi de l'Etat qui les autorise et que, par conséquent, elles ne sont ni nationales, ni étrangères; leurs fonctions sont signalées par la Loi spéciale, selon les principes dérivés du domicile.

4.—Admettre le système de l'*Unité de Successions*, limitée par la "Lex rei sitae", en matières de biens immobiliers.

5.—Etre d'accord avec tout principe tendant à reconnaître à la femme les mêmes droits civils accordés à l'homme majeur.

6.—Ne pas accepter les principes qui modifient le système du "Jus soli" comme moyen d'obtenir la nationalité.

7.—Ne pas être conforme avec les préceptes qui solutionnent le problème de la "double nationalité" au détriment de l'application exclusive du "Jus soli".

8.—Adhérer au critère accepté aux Conférences Universelles sur le régime de la Lettre de Change et des Chèques.

9.—Faire des réserves sur l'application de la "Loi du Pavillon" dans les questions relatives au Droit Maritime.

10.—Etre d'accord en ce que les délits commis en aéronefs, dans l'espace aérien national ou sur les bateaux marchands étrangers, doivent être jugés par les Tribunaux de l'Etat où ils se trouvent.

RÉSERVES DE LA DÉLÉGATION DU BRÉSIL

L'amendement substitutif qu'elle proposa pour l'Article 53 ayant été rejeté, la Délégation du Brésil refuse son approbation à l'Article 52 qui établit la compétence de la loi du domicile conjugal pour régir la séparation de corps et le divorce, ainsi que, de même, à l'article 54.

DECLARATIONS FAITES PAR LES DÉLÉGATIONS DE COLOMBIE ET DE COSTA RICA

Les Délégations de Colombie et de Costa Rica signent le Code de Droit International d'une manière globale avec la réserve expresse de tout ce qui pourrait être en contradiction avec la législation colombienne et celle de Costa-Rica.

En ce qui concerne les personnes juridiques, notre opinion est qu'elles doivent être soumises à la loi locale pour tout ce qui se réfère à leur concept et à leur reconnaissance" comme en dispose sagement l'article 32 du Code, en contradiction (du moins apparente) avec d'autres dispositions du même texte, comme les articles 16 et 21.

Pour les législations de ces Délégations, les personnes juridiques ne peuvent avoir de nationalité, ni selon les principes scientifiques ni en conformité avec les convenances les plus hautes et les plus stables de l'Amérique.

Il eût été préférable que dans le Code que nous allons approuver, l'on eût omis tout ce qui pourrait servir à affirmer que les personnes juridiques, et spécialement les Associations de Capitaux, ont une nationalité.

Ces Délégations qui ont consenti à accepter la transaction, consignée dans le septième article, entre les doctrines européennes de la personnalité du Droit et celles essentiellement américaines du domicile pour régir l'Etat civil et la capacité des personnes, dans le droit international privé, déclarent qu'elles acceptent cette transaction pour ne pas retarder l'approbation du Code que toutes les Nations de l'Amérique attendent aujourd'hui comme une des œuvres les plus transcendantes de cette Conférence, mais elles affirment emphatiquement que cette transaction doit être transitoire parce que l'unité juridique du Continent doit se vérifier autour de la loi du domicile, la seule qui sauvegarde efficacement la souveraineté et l'indépendance des peuples de l'Amérique. Peuples d'immigration comme le sont ou devront l'être toutes ces Républiques, elles ne peuvent voir sans une inquiétude suprême

que les émigrants européens apportent avec eux la prétention d'invoquer en Amérique leurs propres lois d'origine pour gouverner ici leur état civil de capacité pour faire des contrats.

Admettre cette possibilité (qui consacre le principe de la loi nationale, reconnu en partie par le Code) c'est créer en Amérique un Etat, dans l'intérieur de l'Etat, et nous mettre presque sous le régime des capitulations que l'Europe a imposées pendant des siècles aux nations de l'Asie, considérées par elle comme inférieures dans leurs relations internationales.

Les Délégations signataires font des vœux pour que très promptement disparaissent des législations américaines toutes les traces des théories (plus politiques que juridiques) préconisées par l'Europe pour conserver ici la juridiction sur leurs nationaux établis dans les terres libres de l'Amérique et elles espèrent que la législation s'unifiera selon les principes qui soumettent l'étranger émigrant au pouvoir sans restriction des lois locales. Avec l'espoir que peut-être bientôt la loi du domicile sera celle qui régira en Amérique l'état civil et la capacité des personnes, et dans la confiance qu'elle sera un des aspects les plus caractéristiques du Pan-Américanisme juridique que nous aspirons tous à créer, les Délégations signataires votent le Code de Droit International Privé et acceptent la transaction doctrinaire dont il s'inspire.

En se référant aux dispositions sur le divorce, la délégation colombienne formule sa réserve absolue en ce qui régit le divorce selon la loi du domicile conjugal, parce qu'elle considère que pour de tels effets et vu le caractère exceptionnellement transcendental et sacré du mariage (base de la Société et de l'Etat lui-même), la Colombie ne peut accepter sur son territoire l'application de législations étrangères.

Ces Délégations désirent, en outre, bien établir leur admiration enthousiaste pour l'œuvre féconde du Docteur Sánchez de Bustamante que représente ce Code avec ses 500 articles conçus en clauses lapidaires qui pourraient bien servir comme modèle pour les législateurs de tous les pays. Dès aujourd'hui le Docteur Sanchez de Bustamante sera, non seulement un des fils les plus insignes de Cuba, mais aussi un des citoyens les plus excellents de la grande Patrie Américaine, qui peut avec justice se vanter de produire des hommes de science et des hommes d'Etat aussi insignes que l'auteur du Code de Droit International Privé que nous avons étudié et que la VI Conférence Internationale Américaine va approuver au nom de l'Amérique entière.

RÉSERVES DE LA DÉLÉGATION DU SALVADOR

Réserve I.—Spécialement applicable aux art. 44, 146, 176, 232 et 233.

En ce qui se réfère aux incapacités que peuvent avoir les étrangers conformément à leur loi personnelle pour tester, faire des contrats, comparaître en Justice, exercer le commer-

ce ou intervenir dans les actes et contrats commerciaux, réserve est faite en ce que le Salvador ne reconnaîtra pas les dites incapacités dans les cas où les actes ou contrats aient été conclus dans le Salvador sans contravention à la loi Salvadorienne et pour produire des effets sur son territoire National.

Réserve II.—Applicable à l'art. 187, dernier paragraphe.

En cas de communauté de bien imposée aux mariés comme loi personnelle, par un Etat étranger, elle sera reconnue au Salvador, seulement si par contrat entre les parties intéressées, elle est confirmée et si sont remplies toutes les formalités exigées ou que puisse exiger à l'avenir la loi du Salvador, en ce qui concerne les biens situées en Salvador.

Réserve III.—Applicable spécialement aux art: 327, 328 et 329.

Réserve en ce que ne sera pas admissible, pour ce qui concerne le Salvador, la juridiction des Juges et des Tribunaux étrangers, dans les jugements et les démarches de succession et dans les concours de créanciers et de faillite dans tous les cas où ils affectent les bien immeubles situés en Salvador.

RESERVES DE LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1.—La Délégation de la République Dominicaine désire maintenir l'autorité de la Loi Nationale dans les questions qui se rapportent à l'état et à la capacité des Dominicains, partout où ils puissent se trouver, raison pour laquelle elle ne peut accepter, sans réserves, les dispositions du Projet de Codification où l'on donne préférence à la "Loi du Domicile" ou à la "Loi locale"; le tout, malgré le principe conciliateur énoncé dans l'article 7 du projet, dont est une application l'Article 53 du dit projet.

2.—Pour ce qui est de la nationalité, Titre I du Livre I art. 9 et suivants, nous faisons une réserve en ce qui concerne d'abord la Nationalité des Sociétés et ensuite, plus spécialement le principe général de notre Constitution politique suivant lequel il ne sera reconnu à aucun Dominicain d'autre nationalité que la Dominicaine, durant le temps qu'il réside sur le territoire de la République.

3.—Quant au domicile des Sociétés étrangères, quels que soient leurs statuts et le lieu de leur résidence, ou de leur principal établissement, nous réservons ce principe d'ordre public dans la République Dominicaine; toute personne physique ou morale qui exerce des actes de la vie juridique sur son territoire, aura pour domicile, le lieu où elle a un établissement, une agence ou un Représentant quelconque. Ce domicile est attributif de juridiction pour les tribunaux nationaux quant aux relations juridiques qui se rapportent aux *actes intervenus dans le Pays, quelle que soit leur nature.*

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU L'ÉQUATEUR

La Délégation de l'Equateur a l'honneur de signer en entier

la Convention du Code de Droit International Privé, en hommage au Docteur Bustamante. Elle ne croit pas qu'il soit nécessaire de préciser quelque réserve que ce soit, et sauvegarde seulement la faculté générale contenue dans la même Convention, qui laisse aux Gouvernements la liberté de la ratifier.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU NICARAGUA

Pour les questions qui sont actuellement ou pourront être à l'avenir considérées sujettes au Droit Canonique, Nicaragua ne pourra appliquer les dispositions du Code de Droit International Privé qui se trouveraient opposées à ce même Droit.

La Délégation du Nicaragua déclare que, ainsi qu'elle l'a déclaré verbalement en diverses occasions pendant la discussion, quelques-unes des dispositions du Code approuvé, sont en désaccord avec les dispositions expresses de la Législation du Nicaragua ou avec des principes fondamentaux de cette législation; mais, comme un hommage dû à l'œuvre insigne de l'illustre Auteur de ce Code, elle préfère, au lieu de préciser les réserves du cas, faire cette déclaration et laisser que les pouvoirs publics du Nicaragua formulent ces réserves ou réforment dans la mesure du possible la législation nationale pour les cas d'incompatibilité.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU CHILI

La Délégation du Chili est heureuse de présenter ses plus chaleureuses félicitations à l'éminent et savant jurisconsulte américain, Monsieur Antonio Sanchez de Bustamante, pour le chef-d'œuvre qu'il a réalisé en rédigeant un projet de Code de Droit International Privé, destiné à régir les relations entre les Etats d'Amérique. Ce travail est une contribution précieuse pour le développement du panaméricanisme juridique, que tous les pays du Nouveau Monde désirent voir fortifié et développé. Quand bien même cette œuvre grandiose de la Codification ne pourrait pas se réaliser à bref délai, parce qu'elle nécessite la mûre réflexion des Etats qui vont y participer, la Délégation du Chili ne sera pas un obstacle à ce que cette Conférence Pan-Américaine approuve un Code de Droit Internatinoal Privé; mais elle réservera son vote sur les questions et les points qu'elle estime convenables, spécialement, sur les points qui se réfèrent à sa politique traditionnelle et à sa législation nationale.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU PANAMA

En émettant son vote à faveur du Projet de Code de Droit International Privé dans la séance célébrée par cette Commission le 27 Janvier dernier, la Délégation de la République du Panama manifesta qu'elle présenterait en temps opportun les réserves qu'elle pourrait croire nécessaire, au besoin. Cette attitude de la Délégation du Panama obéit à certains doutes qu'elle avait sur la

portée et l'étendue de quelques unes des dispositions contenues dans le Projet, spécialement en ce qui se rapporte à l'application de la loi nationale de l'étranger résidant dans le pays, ce qui aurrait donné lieu à un véritable conflit, puisque dans la République du Panama c'est le système de la loi territoriale qui domine depuis l'instant même où elle fut constituée comme Etat indépendant.

Cependant, la Délégation du Panama estime que toutes les difficultés qui pourraient surgir en cette délicate matière ont été prévues et seront sagement résolues au moyen de l'article septième du projet, d'après lequel "chaque Etat contractant appliquera comme lois personnelles celle du domicile ou celle de la nationalité, selon le système qu'ait adopté ou adopté à l'avenir la législation intérieure". Comme tous les autres Etats qui signent et ratifient la dite Convention, le Panama restera donc en pleine liberté d'appliquer sa propre loi, qui est la territoriale.

Les choses ainsi comprises, la Délégation du Panama a le grand plaisir de déclarer, comme elle le fait en effet, qu'elle concède son approbation au Projet de Code de Droit International Privé, ou au Code Bustamante comme il devrait être appelé en hommage à son auteur, sans réserves daucune sorte.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU GUATEMALA

Guatemala a adopté dans sa législation civile, le système du domicile, mais, même s'il n'en était pas ainsi, cette Délégation trouve que les articles du code sont assez conciliateurs pour harmoniser parfaitement tout conflit qui pourrait surgir entre les divers Etats, suivant les diverses écoles auxquelles ils sont affiliés.

En conséquence, la Délégation du Guatemala, s'associe parfaitement à la formule qui, avec tant de savoir, de prudence, de génie, de critère scientifique, prédomine dans le Projet du Code de Droit International Privé et désire expressément qu'il soit pris bonne note de son acceptation absolue et sans réserves daucune espèce.

RÉSOLUTION

La VI Conférence Internationale Américaine décide :

I.—Recommander au Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine la convocation d'une Conférence spéciale de Représentants de tous les Gouvernements de l'Union aux lieu et date désignés par celui-ci pour y étudier dans toute son ampleur le problème de la protection inter-Américaine des Marques de Fabrique.

II.—Une fois la Conférence terminée, ses conclusions—qu'elles soient des recommandations, des résolutions ou des conventions—seront soumises à l'Union Pan-Américaine et par son entremise communiquées immédiatement à l'examen des divers Gouvernements, sans aucune nécessité de référence ultérieure, à la VII Conférence Internationale Américaine.

(15 Février 1928).

RÉSOLUTION

La VI Conférence Internationale Américaine décide :

1.—Les Gouvernements dont les noms suivent souscrivent la somme nécessaire pour l'édition complète de mille deux cents exemplaires du "Diccionario de Construcción y régimen de la lengua castellana" composé par Don Rufino J. Cuervo, somme ainsi répartie :

Les Gouvernements de l'Argentine, de la Colombie, du Chili, de Cuba, du Mexique et du Pérou contribueront avec la somme de \$3,000 or, chacun ; et les Gouvernements de la Bolivie, de Costa-Rica, de l'Equateur, du Salvador, du Guatemala, de Honduras, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, de la République Dominicaine, de l'Uruguay et du Venezuela contribueront avec la somme de \$2,000 chacun, ce qui donne le total de \$42,000.

2.—L'Union Pan-Américaine sera chargée de recueillir les sommes souscrites et de commencer les démarches nécessaires auprès des particuliers, des entreprises ou des établissements de tout genre, pour la publication de l'œuvre, et elle donnera ample faculté pour conclure toute sorte de contrats ou d'arrangements, pour effectuer les paiements et faire les avances d'accord avec eux.

3.—Autoriser l'Union Pan-Américaine à recevoir les contributions que désirent faire spontanément les Sociétés scientifiques ou littéraires de caractère privé des Etats-Unis d'Amérique, du Brésil ou d'Haïti.

4.—L'impression une fois terminée, les exemplaires seront distribués en proportion du montant des diverses cotisations, sans préjudice de ce que le contrat de publication assume la forme de subvention à une Imprimerie, et dans ce cas, celle-ci pourra mettre l'ouvrage en vente publique, pour son propre compte, avec la seule obligation de remettre à chaque Gouvernement contribuant un nombre limité d'exemplaires indiqués sur le contrat.

5.—Recommander à l'Union Pan-Américaine de rechercher les moyens d'assurer, à l'avance, le meilleur accueil aux linguistes d'expérience reconnue, qui s'efforcent de continuer sous forme scientifique l'œuvre philologique de Don Rufino J. Cuervo, jusqu'à ce qu'elle soit terminée.

(15 Février 1928).

RÉSERVE DE LA DÉLÉGATION DU CHILI

La Délégation du Chili approuve le texte intégral de cette Résolution comme un hommage à Cuervo, mais fait constater sa réserve quant aux difficultés qui, à son avis, vont surgir, pour recueillir les cotisations des Gouvernements pour lesquelles sera nécessaire l'autorisation des leurs Congrès respectifs.

RÉSERVE DE LA DÉLÉGATION DE L'ARGENTINE

La Délégation de la République Argentine fait sienne la réserve précédente, de la Délégation du Chili.

RÉSOLUTION

La VI Conférence Internationale Américaine décide :

Approuver en général les conclusions de la Commission Pan-Américaine pour la simplification et l'unification des procédures consulaires qui se trouvent dans l'Acte final de la Commission ;

Recommander aux Gouvernements des Républiques Américaines de prendre les mesures nécessaires dans le but d'exécuter les résolutions de la Commission dans la mesure que permettent les législations intérieures de chaque pays et l'intérêt national ;

Recommander à l'Union Pan-Américaine de convoquer dans le plus bref délai possible une Seconde Réunion de la Commission Pan-Américaine pour la simplification et l'unification de procédure consulaire afin d'étudier la question d'uniformité des droits consulaires, soumettant les résultats de ces travaux au Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine ;

Recommander à l'Union Pan-Américaine, aussitôt que termine ses travaux la Commission plus haut mentionnée, de soumettre aux Gouvernements Membres de l'Union, les recommandations qui pourront être formulées par la Commission sur l'uniformité des droits consulaires".

(15 Février 1928).

RÉSOLUTION

La VI Conférence Internationale Américaine, vu que prochainement doit se réunir dans cette Ville, la II Conférence Internationale d'Emigration et d'Immigration et dans le but de ne donner ni des difficultés, ni des limites au travail de la dite Conférence ; mais qu'il est nécessaire et indispensable, en même temps, de faire certaines déclarations de principes et certaines recommandations,

Décide :—S'abstenir d'étudier dans son ampleur le problème de l'Emigration ; mais elle établit les principes et déclarations suivants sur le même problème, au point de vue des Nations Américaines :

1.—Que les Conventions sur l'Emigration et l'Immigration, effectuées entre les nations du Continent Américain et les Nations des autres Continents, ne puissent jamais imposer à un Etat Américain des mesures tendant à soustraire l'Emigrant à la législation et juridiction du Pays dans lequel il s'incorpore.

2.—Que toute résolution concernant l'Emigration et l'Immigration doit s'inspirer de ce double principe :

a). Egalité des droits civils entre Nationaux et Etrangers.

b). La qualité d'homme libre qui doit être reconnue à tout émigrant. Doivent être respectés et protégés les droits et la dignité de la personne humaine, sans que d'autre part ce respect et cette protection puissent justifier une offense à la souveraineté du Pays.

3.—Que les Etats Américains se réservent le droit d'examiner les avantages de l'entrée du courant d'émigrants sur leurs territoires, provenant d'autres Continents, harmonisant leur mode de procéder avec leurs intérêts économiques, politiques et sociaux.

4.—Que l'on doit recommander, pour en faire une étude spéciale, à la II Conférence Internationale d'Emigration et d'Immigration, la proposition suivante formulée par la Délégation du Mexique:

I.—Pour les effets de la protection des lois relatives, l'on doit uniquement considérer comme *Emigrants* les individus qui sans avoir de capital personnel, sortent de leur pays pour travailler dans un autre, dans les industries, le Commerce ou l'Agriculture, ou les travaux intellectuels, sous la dépendance d'un particulier ou d'une entreprise; et comme *Immigrants* les individus qui, dans les mêmes conditions et avec le même but, arrivent dans un Pays qui n'est pas le leur".

II.—Les Gouvernements ne devront pas autoriser la sortie d'un Emigrant, sans avoir au préalable, et avec son intervention, établi les suivants contrats:

a).—Un contrat de travail de transport qui garantisse à l'Emigrant son voyage jusqu'à l'endroit où vont être utilisés ses services, dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de confort convenable.

b).—Un contrat de travail qui garantisse au même Emigrant l'emploi de ses services dans les conditions stipulées et surtout le paiement de son retour au lieu où a été signé le contrat.

Les Gouvernements, en plus des garanties stipulées doivent dicter les mesures de protection nécessaires en faveur de l'Emigrant, jusqu'au port d'entrée du Pays vers lequel il émigre; et en faveur de l'Immigrant depuis le port d'entrée jusqu'au lieu que fixe son contrat de travail.

III.—L'Emigrant devra jouir des mêmes droits et garanties légales que l'indigène du Pays vers lequel il émigre, à l'exception des droits politiques que chaque Nation concède à ses Nationaux, sans que jamais il ne soit dicté de mesures qui mettent l'émigrant en situation légale ou de fait inférieure à celle des nationaux".

Le Gouvernement du Pays où arrive l'Emigrant, devra accomplir, par les moyens établis par ses lois, les contrats de transport et de travail mentionnés dans le II paragraphe, à la demande de l'Emigrant.

5.—Que l'on recommande, sans préjuger, au Conseil Directif

de l'Union Pan-Américaine d'inclure comme thème de la prochaine Conférence Internationale Américaine et de préparer en attendant que se célèbre la Conférence, le matériel nécessaire pour une meilleure étude de la question, l'initiative suivante de la Délégation du Salvador :

“Aucun des Etats Américains ne peut entraver l'émigration et l'immigration des autres Etats, ni la limiter à un certain nombre de citoyens d'un autre Etat Américain”.

(7 Février 1928).

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DES ETATS UNIS D'AMÉRIQUE

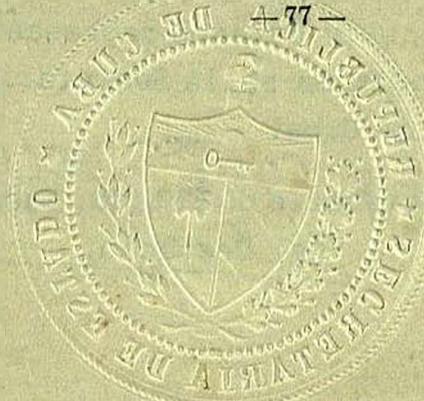
La Délégation des Etats-Unis désire manifester, en ce qui concerne cette résolution, que le Gouvernement des Etats-Unis considère que le contrôle de l'Immigration est une affaire purement intérieure, qui implique l'exercice d'un droit souverain et que, en ce qui concerne les Etats-Unis, l'autorité de son Congrès, en question d'Immigration est exclusive.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE CUBA

Le soussigné (Enrique Hernández Cartaya, Cuba) désire faire savoir que, pour amplifier la réserve formulée au moment de signer le dictamen de la sous-Commission désignée pour concilier les diverses opinions sur le thème de l'Emigration, expose qu'il n'accepte pas de ce dictamen les particularités contenues dans les Nos. 1, 2 et 3 et à leur place il formule comme recommandation du Rapporteur, la seconde conclusion réformée de son rapport sur ce thème qui, à la lettre dit: “Seconde: Que, cependant, soient exprimés comme désirs de la présente Conférence Internationale Américaine que dans les prochains accords l'on vise le perfectionnement de la protection des immigrants dans les ordres juridique et social, en s'inspirant du principe de l'égalité civile des nationaux et étrangers; que l'on arrive à établir les bases qui fortifient l'organisation des courants migrants, en tenant compte des diverses nécessités nationales et de la souveraineté des pays d'immigration, considérée comme principe fondamental et que l'on s'efforce de déterminer, par des moyens adéquats, les points extrêmes qui, de par leur nature, doivent être recommandés, pour le moment, à la concertation de pactes bilatéraux, pour l'évolution du Droit International de cet important phénomène.

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Avant d'émettre son vote sur la résolution relative au thème de “aspects internationaux des problèmes d'Immigration”, la Délégation Dominicaine désire réitérer, pour qu'elles soient mentionnées dans l'Acte, les observations formulées par elle au mo-



ment de traiter la même question dans la Commission correspondante.

Malgré l'opinion soutenue par cette Délégation que ces problèmes sous leurs aspects concrets, sont du domaine privé de la législation domestique, n'a pas trouvé d'inconvénient à donner son approbation à la lecture des principes et déclarations contenus dans les Nos. 1, 2 et 3 de la résolution, pour avoir considéré que cette lecture n'avait pas pour but primordial de limiter l'œuvre de la Conférence Internationale d'Emigration et d'Immigration qui se réunira prochainement dans cette Ville, mais plutôt d'exposer les points de vue des nations américaines réunies en cette Sixième Conférence, et ces points de vue coincident avec l'esprit et les dispositions positives de la législation dominicaine.

Le principe consigné dans le No. 1, proclame la souveraineté de l'Etat qui reçoit l'immigration, à la législation et juridiction duquel doit être sujet l'immigrant.

Le principe de l'égalité des Droits Civils entre nationaux et étrangers, inspire toute la législation dominicaine. Toutefois, je dois reitérer ici les réserves faites à la Commission des Affaires Économiques. Le législateur dominicain, dans le but, non pas de réduire ces principes, mais d'en assurer son application au bénéfice des dominicains résidant à l'étranger et de prendre quelques précautions estimées nécessaires, a subordonné la jouissance ou l'exercice de certains droits civils, pour les étrangers, à la condition de la réciprocité législative ou du bénéfice d'un traité ou du fait que l'étranger ait été autorisé à fixer son domicile sur le territoire de la République.

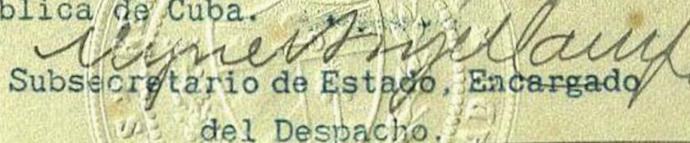
Le principe consigné dans le paragraphe "b" de la disposition No. 2, non seulement est un point de vue actuel dominicain, mais encore qui a été consacré dans notre Constitution comme un droit inhérent à la personnalité humaine et pour ce motif justifie pleinement notre plus absolue adhésion.

Quant au principe consigné dans le No. 3, je me permets de suggérer une légère modification dans le texte, pour rendre plus claires ses dispositions. Je propose qu'il soit rédigé ainsi :

"3.—Que les Etats Américains se réservent le droit d'examiner les avantages de l'entrée du courant immigrateur en leurs territoires, provenant d'autres territoires, et de conformer leur manière de faire à leur intérêts économiques, politiques et sociaux".

(15 Février 1928).

CERTIFICO: que la presente Convención es traducción del texto en español, de la Convención y del Código de Derecho Internacional Privado, con las reservas hechas por los Estados Signatarios, aprobados en la Sexta Conferencia Internacional Americana en su sesión del 13 de febrero e insertos en el Acta Final de la Conferencia suscrita en idioma español por las delegaciones de los veintiún Estados representados en la Conferencia y depositada en la Secretaría de Estado de la República de Cuba.


Subsecretario de Estado, Encargado
del Despacho.

CONVENÇÃO

DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

Os Presidentes das Republicas do Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, Mexico, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haiti. Republica Dominicana, Estados Unidos de America e Cuba, desejando que os seus respectivos paizes se representassem na Sexta Conferencia Internacional Americana, enviaram a ella, devidamente autorizados para approvar as recomendações, resoluções, convenções e tratados que julgarem uteis aos interesses da America, os seguintes senhores delegados:

Do PERU:

Jesús Melquiades Salazar.
Víctor Maúrtua.
Enrique Castro Oyanguren.
Luis Ernesto Denegri.

Do URUGUAY:

Jacobo Varela Acevedo.
Juan José Amézaga.
Leonel Aguirre.
Pedro Erasmo Callorda.

Do PANAMÁ:

Ricardo J. Alfaro.
Eduardo Chiari.

Do EQUADOR:

Gonzalo Zaldumbide.
Víctor Zevallos.
Colón Eloy Alfaro.

Do MEXICO:

Julio García.
Fernando González Roa.
Salvador Urbina.
Aquiles Elorduy.

Do SALVADOR:

Gustavo Guerrero.
Héctor David Castro.
Eduardo Alvarez.

DE GUATEMALA:

Carlos Salazar.
Bernardo Alvarado Tello.
Luis Beltranena.
José Azurdia.

DE NICARAGUA:

Carlos Cuadra Pazos.
Joaquín Gómez.
Máximo H. Zepeda.

DE BOLIVIA:

José Antezana.
Adolfo Costa du Rels.

DE VENEZUELA:

Santiago Key Ayala.
Francisco Gerardo Yanes.
Rafael Angel Arraiz.

DE COLOMBIA:

Enrique Olaya Herrera.
Jesús M. Yepes.
Roberto Urdaneta Arbeláez.
Ricardo Gutiérrez Lee.

DE HONDURAS:

Fausto Dávila.
Mariano Vázquez.

DE COSTA RICA:

Ricardo Castro Beeche.
J. Rafael Oreamuno.
Arturo Tinoco.

Do CHILE:

Alejandro Lira.
Alejandro Alvarez.
Carlos Silva Vildósola.
Manuel Bianchi.

Do BRASIL:

Raúl Fernandes.
Lindolfo Collor.
Alarico da Silveira.
Sampaio Correa.
Eduardo Espínola.

DE ARGENTINA:

Honorio Pueyrredón.
Laurentino Olascoaga.
Felipe A. Espil.

DO PARAGUAY:

Lisandro Díaz León.

DO HAITÍ:

Fernando Dennis.
Charles Riboul.

DA REPUBLICA DOMINICANA:

Francisco J. Peynado.
Gustavo A. Díaz.
Elías Brache.
Angel Morales.
Tulio M. Cesteros.
Ricardo Pérez Alfonseca.
Jacinto R. de Castro.
Federico C. Alvarez.

DOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA:

Charles Evans Hughes.
Noble Brandon Judah.
Henry P. Fletcher.
Oscar W. Underwood.
Morgan J. O'Brien.
Dwight W. Morrow.
James Brown Scott.
Ray Lyman Wilbur.
Leo S. Rowe.

DE CUBA:

Antonio S. de Bustamante.
Orestes Ferrara.
Enrique Hernández Cartaya.
José Manuel Cortina.
Arístides Agüero.
José B. Alemán.
Manuel Márquez Sterling.
Fernando Ortiz.
Néstor Carbonell.
Jesús María Barraqué.

Os quaes, depois de terem apresentado os seus plenos poderes e encontrando-se todos em boa e devida forma, convencionaram o seguinte:

Artigo 1.—As Republicas contractantes acceitam e põem em vigor o Código de Direito Internacional Privado annexo á presente convenção.

Artigo 2.—As disposições deste Código não serão applicaveis senão ás Repúblicas contractantes e aos demais Estados que adhrirem a elle na forma que mais adeante se consigna.

Artigo 3.—Cada uma das Repúblicas contractantes, ao ratificar a presente convenção, poderá declarar uma reserva quanto á aceitação de um ou varios artigos do Código annexo e não a obrigarão as disposições a que a reserva se refere.

Artigo 4.—O Código entrará em vigor para as Repúblicas que o ratifiquem trinta dias depois do deposito da respectiva ratificação e desde que, pelo menos, tenha sido ratificado por dois paizes.

Artigo 5.—As ratificações serão depositadas na Secretaria da União Panamericana que transmitirá copia dellas a cada uma das Repúblicas contractantes.

Artigo 6.—Os Estados ou pessoas juridicas internacionaes não contractantes, que desejem adherir a este convenio e, no todo ou em parte, ao Código annexo, notificarão á Secretaria da União Panamericana que por sua vez comunicará a todos os Estados até então contractantes ou adherentes. Passados seis meses depois desta communicação, o Estado ou pessoa juridica internacional interessado poderá depositar na Secretaria da União Panamericana o instrumento de adhesão e ficará ligado por esta convenção com caracter reciproco, trinta dias depois da entrega do documento, em relação a todos que se encontrarem regidos pelo mesmo e que não tiverem feito reserva alguma total ou parcial quanto á adhesão solicitada.

Artigo 7.—Qualquer Republica Americana ligada por esta convenção que desejar modificar em todo ou em parte o Código annexo, apresentará a proposição correspondente á Conferencia Internacional Americana seguinte para que a resolução proceda.

Artigo 8.—Se alguma das pessoas juridicas internacionaes contractantes ou adherentes quizer denunciar a presente Convenção, notificará a denuncia por escripto á Secretaria da União Panamericana, a qual transmitirá imediatamente uma copia literal certificada da notificação ás demais, dando-lhes a conhecer a data em que a recebeu.

A denuncia não terá effeito senão no que respeita ao contractante que a tiver notificado e depois de um anno de recebida na Secretaria da União Panamericana.

Artigo 9.—A Secretaria da União Panamericana manterá um registro das datas de deposito das ratificações, e recebimento de adhesões e denuncias, e expedirá copias certificadas do dito registro a todo o contractante que o solicitar.

Em fé do que os plenipotenciarios assignam a presente convenção e põem nella o sello da Sexta Conferencia Internacional Americana.

Dado na cidade da Havana no dia vinte de Fevereiro de mil novecentos e vinte e oito, em quatro exemplares, escriptos respectivamente em hespanhol, francez, inglez e portuguez que se depo-

sitarão na Secretaria da União Panamericana com o fim de serem enviadas copias certificadas de todos a cada uma das Republicas signatarias.

CODIGO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

TITULO PRELIMINAR

REGRAS GERAES

Artigo 1

As pessoas subordinadas a qualquer dos Estados contractantes gozain no territorio dos demais, dos mesmos direitos civis que se concederem aos nacionaes.

Cada Estado contractante pode, por motivos de ordem publica, recusar ou sujeitar a condições especiaes o exercicio de determinados direitos civis aos nacionaes dos outros, e qualquer desses Estados pode, em casos identicos, recusar ou sujeitar a condições especiaes o mesmo exercicio aos nacionaes do primeiro.

Artigo 2

Os estrangeiros que pertençam a qualquer dos Estados contractantes gosarão tambem no territorio dos demais, de seguranças individuaes identicas ás dos nacionaes, salvo restricções que em cada um se estabeleçam pela constituição e pelas leis.

As garantias individuaes identicas não se estendem ao desempenho de funções publicas, ao direito de suffragio e a outros direitos politicos, salvo uma disposição especial da legislação interna.

Artigo 3

Para o exercicio dos direitos civis e para disfrutar de garantias individuaes identicas, as leis e regras vigentes em cada Estado contractante consideram-se divididas nas tres classes seguintes:

I. As que se applicam ás pessoas em virtude do seu domicilio ou da sua nacionalidade e as seguem, mesmo que se mudem para outro paiz, denominadas pessoaes ou de ordem publica interna;

II. As que obrigam por igual a todos os que residem no territorio, sejam ou não nacionaes, denominadas territoriaes, locaes ou de ordem publica internacional;

III. As que se applicam sómente mediante a determinação, a interpretação ou a presumpção da vontade das partes ou de alguma delas, denominada voluntarias, suppletorias ou de ordem privada.

Artigo 4

Os preceitos constitucionaes são de ordem publica internacional.

Artigo 5

Todas as regras de protecção individual e collectiva, estabelecidas pelo direito político e pelo administrativo, são também de ordem pública internacional, salvo o caso de que nelas expressamente se disponha o contrario.

Artigo 6

Em todos os casos não previstos por este Código, cada um dos Estados contractantes aplicará a sua propria qualificação ás instituições ou relações jurídicas que tiverem de corresponder aos grupos de leis mencionadas no art. 3.

Artigo 7

Cada Estado contractante aplicará como leis pessoais as do domicilio, as da nacionalidade ou as que tenha adoptado ou adopte no futuro a sua legislação interna.

Artigo 8

Os direitos adquiridos segundo as regras deste Código têm plena efficacia extraterritorial nos Estados contractantes, salvo se se oppuser a algum dos seus effeitos ou consequencias uma regra de ordem pública internacional.

LIVRO PRIMEIRO

Direito Civil Internacional

TITULO PRIMEIRO

Das pessoas

CAPITULO I

NACIONALIDADE E NATURALIZAÇÃO

Artigo 9

Cada um dos Estados contractantes aplicará o seu direito proprio para a determinação da nacionalidade de origem de toda a pessoa individual ou jurídica e para a sua aquisição, recuperação e perda posterior, que se tiverem realizado dentro ou fóra do seu território, quando uma das nacionalidades sujeitas á controvérsia seja a do dito Estado. Nos outros casos, regerão as disposições que se acham estabelecidas nos demais artigos deste capítulo.

Artigo 10

A's questões sobre nacionalidade de origem em que não esteja

interessado o Estado em que ellas se debatem, applicar-se-á a lei daquella das nacionalidades discutidas em que tiver domicilio a pessoa de que se trate.

Artigo 11

Na falta desse domicilio applicar-se-ão ao caso previsto no artigo anterior os principios aceitos pela lei do julgador.

Artigo 12

As questões sobre acquisição individual de uma nova nacionalidade, serão resolvidas em conformidade com a lei da nacionalidade que se suppuze adquirida.

Artigo 13

As' naturalizações collectivas, no caso de independencia de um Estado, applicar-se-á a lei do Estado novo, se tiver sido estabele-cida no territorio uma soberania effectiva que tenha sido reconhe-cida pelo Estado julgador, e, na sua falta, a do antigo, tudo sem prejuizo das estipulações contractuaes entre os dois Estados interessados, que serão sempre preferentes.

Artigo 14

A' perda da nacionalidade deve applicar-se a lei da nacionalidade perdida.

Artigo 15

A recuperação da nacionalidade submette-se á lei da nacionalidade que se readquire.

Artigo 16

A nacionalidade de origem das corporações e das fundações será determinada pela lei do Estado que a auctorize ou a approve.

Artigo 17

A nacionalidade de origem das associações será a do paiz em que se constituam e nelle devem ser registadas ou inscrever-se, se a legislacão exigir esse requisito.

Artigo 18

As sociedades civis, mercantis ou industriaes, que não sejam anonymas, terão a nacionalidades estipulada na escriptura social e, em sua falta, a do logar onde tenha séde habitualmente a sua gerencia ou direcção principal.

Artigo 19

A nacionalidade das sociedades anonymas será determinada

pelo contracto social e, em sua falta, pela lei do logar em que normalmente se reuna a junta geral de accionistas e em sua falta pela do logar onde funcione o seu principal Conselho administrativo ou Junta directiva.

Artigo 20

A mudança de nacionalidade das corporações, fundações, associações e sociedades, salvo casos de variação da soberania territorial, terá de sujeitar-se ás condições exigidas pela sua lei antiga e pela nova.

Se se mudar a soberania territorial, no caso de independencia, applicar-se-á a regra estabelecida no art. 13 para as naturalizações collectivas.

Artigo 21

As disposições do artigo 9 no que se referem a pessoas juridicas e as dos artigos 16 e 20 não serão applicadas nos Estados contraentes, que não attribuam nacionalidades ás ditas pessoas juridicas.

CAPITULO II

DOMICILIO

Artigo 22

O conceito, aquisição, perda e reacquisição do domicilio das pessoas naturaes ou juridicas se regularão pela lei territorial.

Artigo 23

O conceito, aquisição, perda e reacquisição do domicilio geral e especial das pessoas naturaes ou juridicas, reger-se-ha pela lei territorial.

Artigo 24

O domicilio legal do chefe da familia estende-se á mulher e aos filhos, não emancipados, e o do tutor ou curador aos menores ou incapazes sob a sua guarda, se não se achar disposto o contrario na legislação pessoal daquelles a quem se attribue o domicilio de outro.

Artigo 25

As questões sobre a mudança de domicilio das pessoas naturaes ou juridicas serão resolvidas de accordo com a lei do tribunal, se este fôr de um dos Estados interessados, e, se não, pela do logar em que se pretenda ter adquirido o ultimo domicilio.

Artigo 26

Para as pessoas que não tenham domicilio entender-se-ha como tal o logar onde habitualmente residam, ou aquelle em que eventualmente se encontrem.

CAPITULO III

NASCIMENTO, EXTINÇÃO E CONSEQUENCIA DA PERSONALIDADE CIVIL

Secção I — Das pessoas individuaes

Artigo 27

A capacidade das pessoas individuaes rege-se pela sua lei pessoal, exceptuando as restrições fixadas para seu exercicio, por este Código ou pelo direito local.

Artigo 28

Applicar-se-á a lei pessoal para decidir se o nascimento determina a personalidade e se o nascituro se tem por nascido, para tudo que lhe seja favoravel, assim como para a viabilidade e os effeitos da prioridade de nascimento no caso de partos duplos ou multiplos.

Artigo 29

As presumpções de sobrevivencia ou de morte simultanea, na falta de prova, serão reguladas pela lei pessoal de cada um dos falecidos em relação á sua respectiva successão.

Artigo 30

Cada Estado applica a sua propria legislação para declarar extinta a personalidade civil pela morte natural das pessoas individuaes e o desapparecimento ou dissolução official das pessoas juridicas, assim como para decidir se a menoridade, a demencia ou imbecilidade, a surdo-mudez, a prodigalidade e a interdicção civil são unicamente restricções da personalidade, permittindo direitos e tambem certas obrigações.

Secção II — Das pessoas juridicas

Artigo 31

Cada Estado contractante, no seu caracter de pessoa juridica, tem capacidade para adquirir e desfructar direitos civis e contrahir obrigações de igual classe no territorio dos demais sem outras restricções, senão as estabelecidas expressamente pelo direito local.

Artigo 32

O conceito e reconhecimento das pessoas juridicas se regerão pela lei territorial.

Artigo 33

Salvo as restricções estabelecidas nos dois artigos precedentes,

a capacidade civil das corporações é regida pela lei que as tiver criado ou reconhecido; a das fundações pelas regras da sua instituição, aprovadas pela auctoridade correspondente, se o exigir o seu direito nacional; e a das associações pelos seus estatutos, em iguaes condições.

Artigo 34

Com as mesmas restricções, a capacidade civil das sociedades civis, commerciaes ou industriaes é regida pelas disposições relativas ao contracto de sociedade.

Artigo 35

A lei local applicar-se-ha aos bens das pessoas juridicas que deixem de existir, a menos que o caso fosse previsto de outro modo nos estatutos, clausulas da sua escriptura ou no direito em vigor referente ás sociedades.

CAPITULO IV

DO MATRIMONIO E DIVORCIO

Secção I—Condições juridicas que tem de preceder a sua celebração

Artigo 36

Os nubentes estarão sujeitos á sua lei pessoal em tudo que se refira á capacidade para celebrar o matrimonio, ao consentimento ou conselhos paternos, aos impedimentos e á sua dispensa.

Artigo 37

Os estrangeiros devem provar, antes de casar, que preencheram as condições exigidas pelas suas leis pessoaes no que se refere ao artigo precedente. Tal formalidade poderá ser justificada mediante certidão dos respectivos funcionarios diplomaticos ou agentes consulares ou por outros meios que julgar sufficiente a auctoridade local, que terá em todo o caso completa liberdade de apreciação.

Artigo 38

A legislação local é applicavel aos estrangeiros quanto aos impedimentos que, por sua parte, estabelecer e que não sejam dispensaveis, relativos á fórmula do consentimento, á força obrigatoria ou não dos esposaes, á opposição ao matrimonio ou obrigacão de denunciar os impedimentos e ás consequencias civis da denuncia falsa, á fórmula das diligencias preliminares e á auctoridade competente para celebrar-o.

Artigo 39

Rege-se pela lei pessoal commum das partes e, na sua falta,

pelo direito local a obrigação, ou não, de indemnização em consequencia de promessa de casamento não executada ou pela publicação de proclamas em igual caso.

Artigo 40

Os Estados contractantes não são obrigados a reconhecer o casamento celebrado em qualquer delles, pelos seus nacionaes ou estrangeiros, que infrinjam as suas disposições relativas á necessidade da dissolução dum casal anterior, aos graus de consanguinidade ou affinidade em relação aos quaes exista estorvo absoluto, a proibição de casar-se estabelecida em relação aos culpados de adulterio que tenha sido motivo de dissolução do casamento de um delles e á propria proibição, no que diz respeito ao responsável de attentado á vida de um dos conjuges, para se casar com o sobrevivente, ou a qualquer outra causa de nulidade que não possa remediar-se.

Secção II — Da fórmula do matrimonio

Artigo 41

Ter-se-á em todas as partes como valido, enquanto á fórmula, o matrimonio celebrado naquelle estabelecida como efficaz pelas leis do paiz em que se effectuar. Comtudo, os Estados, cuja legislação exigir uma cerimonia religiosa, poderão negar valides aos matrimonios contrahidos por seus nacionaes no estrangeiro sem observar essa fórmula.

Artigo 42

Nos paizes em que as leis o permittam, os casamentos contrahidos ante os funcionarios diplomaticos ou consulares dos dois contrahentes, ajustar-se-hão á sua lei pessoal, sem prejuizo de que lhes sejam applicaveis as disposições do artigo quarenta.

Secção III — Efeitos do matrimonio quanto ás pessoas dos conjuges.

Artigo 43

Applicar-se-á o direito pessoal de ambos os conjuges, e, se fôr diverso, o do marido no que toque aos deveres respectivos de protecção e de obediencia, á obrigação ou não da mulher de seguir o marido quando mudar de residencia, á disposição e administração dos bens communs e aos demais effeitos especiaes do matrimonio.

Artigo 44

A lei pessoal da mulher regerá a disposição e administração de seus bens proprios e seu comparecimento em juizo.

Artigo 45

Fica sujeita ao direito territorial a obrigação dos conjuges de viver juntos, guardar fidelidade e socorrer-se mutuamente.

Artigo 46

Tambem se applica imperativamente o direito local que prive de effeitos civis ao matrimonio do bigamo.

Secção IV — Nullidade do matrimonio e seus effeitos

Artigo 47

A nullidade do matrimonio deve regular-se pela mesma lei a que estiver submettida a condição intrinseca ou extrinseca que a tiver motivado.

Artigo 48

A coacção, o medo e o rapto, como causas de nullidade do matrimonio, são reguladas pela lei do logar da celebração.

Artigo 49

Applicar-se-á a lei pessoal de ambos os conjuges, se fôr *communum*, na sua falta a do conjugue que tiver agido de bôa fé, e, na falta de ambas, a do varão, ás regras sobre o cuidado dos filhos de matrimonios nulos, nos casos em que os paes não possam ou não queiram estipular nada sobre o assumpto.

Artigo 50

Essa mesma lei pessoal deve applicar-se aos demais effeitos civis do matrimonio nullo, excepto os que se referirem aos bens dos conjuges, que seguirão a lei do regimen economico do matrimonio.

Artigo 51

São de ordem publica internacional as regras que estabelecem os effeitos judiciaes do pedido de nullidade.

Secção V — Separação de corpos e divorcio

Artigo 52

O direito á separação de corpos e ao divorcio regula-se pela lei do domicilio conjugal, mas não pôde fundar-se em causas anteriores á aquisição do dito domicilio se as não auctorizar, com iguaes effeitos, a lei pessoal de ambos os conjuges.

Artigo 53

Cada Estado contractante tem o direito de permittir ou reconhecer ou não, o divorcio ou novo casamento de pessoas divorciadas no estrangeiro, em casos, com effeitos ou por causas que não admitta o seu direito pessoal.

Artigo 54

As causas do divorcio e da separação de corpos submeter-se-ão á lei do logar em que forem solicitados desde que nesse estejam domiciliados os conjuges.

Artigo 55

A lei do juiz perante quem se litiga determina as consequencias judiciaes da demanda e as determinações da sentença a respeito dos conjuges e dos filhos.

Artigo 56

A separação de corpos e o divorcio, obtidos conforme os artigos que precedem, produzem effeitos civis de accordo com a legislação do tribunal que os outorga nos demais Estados contractantes, salvo o disposto no art. 53.

CAPITULO V

PATERNIDADE E FILIAÇÃO

Artigo 57

São regras de ordem publica interna, devendo applicar-se a lei pessoal do filho se fôr distincta da do pae, as referentes á presumpção de legitimidade e suas condições, as que conferem o direito ao apellido e as que determinam as provas de filiação e regulam a successão do filho.

Artigo 58

Têm o mesmo caracter, mas se lhes applica a lei pessoal do pae, as regras que outorguem aos filhos legitimados direitos de successão.

Artigo 59

E' de ordem publica internacional a regra que dá ao filho o direito a alimentos.

Artigo 60

A capacidade para legitimar rege-se pela lei pessoal do pae e a capacidade para ser legitimado pela lei pessoal do filho, requerendo a legitimação a concorrência das condições exigidas em ambas.

Artigo 61

A proibição de legitimar filhos não simplesmente naturaes é de ordem publica internacional.

Artigo 62

As consequencias da legitimação e a acção para a impugnar submettem-se á lei pessoal do filho.

Artigo 63

A investigação da paternidade e da maternidade e a sua proibição regulam-se pelo direito territorial.

Artigo 64

Dependem da lei pessoal do filho as regras que indicam as condições do reconhecimento, obrigam a fazel-o em certos casos, estabelecem as acções para esse efecto, concedem ou negam o nome e indicam as causas de nullidade.

Artigo 65

Subordinam-se á lei pessoal do pae os direitos de successão dos filhos illegítimos e á pessoal do filho os dos paes illegítimos.

Artigo 66

A fórmula e circunstancias do reconhecimento dos filhos illegítimos, subordinam-se ao direito territorial.

CAPITULO VI

ALIMENTOS ENTRE PARENTES

Artigo 67

Sujeitar-se-ão á lei pessoal do alimentado o conceito legal dos alimentos, a ordem da sua prestação, a maneira de os subministrar e a extensão desse direito.

Artigo 68

São de ordem publica internacional as disposições que estabelecem o dever de prestar alimentos, seu montante, reducção e aumento, a oportunidade em que são devidos e á fórmula do seu pagamento assim como as que prohibem renunciar e ceder esse direito.

CAPITULO VII

PATRIO PODER

Artigo 69

Estão submettidas á lei pessoal do filho a existencia e o alcance geral do patrio poder a respeito da pessoa e bens, assim como as causas da sua extinção e recuperacao, e a limitacão, por motivo de novas nupcias, do direito de castigar.

Artigo 70

A existencia do direito de usoefructo e as demais regras applicaveis ás diferentes classes de peculio se submettem tambem á lei pessoal do filho, seja qual fôr a natureza dos bens e logar em que se encontrem.

Artigo 71

Em territorio estrangeiro, o disposto no artigo anterior deve entender-se sem prejuizo dos direitos de terceiro que a lei local outorgue e das disposições locaes sobre publicidade e especialização de garantias hypothecarias.

Artigo 72

São de ordem publica internacional as disposições que determinem a natureza e os limites da facultade do pae de corrigir e castigar e o seu recurso ás autoridades, assim como as que o privam do patrio poder por incapacidade, ausencia ou sentença.

CAPITULO VIII

ADOPÇÃO

Artigo 73

A capacidade para adoptar e ser adoptado e as condições e limitações para adoptar ficam sujeitas á lei pessoal de cada um dos interessados.

Artigo 74

Pela lei pessoal do adoptante regulam-se seus effeitos no que se refere á successão deste; e pela lei pessoal do adoptado tudo quanto se refira ao nome, direitos e deveres que conserve em relação á sua familia natural, assim como á sua successão com respeito ao adoptante.

Artigo 75

Cada um dos interessados poderá impugnar a adopção, de actôrdo com as prescripções da sua lei pessoal.

Artigo 76

São de ordem publica internacional as disposições que nesta matéria regulam o direito a alimentos e as que estabelecem para a adopção fórmas solemnas.

Artigo 77

As disposições dos quatro artigos precedentes não se applicarão aos Estados cuja legislação não reconheça a adopção.

CAPITULO IX

AUSENCIA

Artigo 78

As medidas provisórias em caso de ausencia são de ordem publica internacional.

Artigo 79

Não obstante o disposto no artigo anterior designar-se-á a representação do supposto ausente de acordo com a sua lei pessoal.

Artigo 80

A lei pessoal do ausente determina a quem compete a acção para pedir essa declaratoria e estabelece a ordem e condições dos administradores.

Artigo 81

Compete ao direito local decidir quando se faz e surte effeito a declaração de ausencia e quando e como deve cessar a administração dos bens do ausente, assim como a obrigação e fórmula de prestar contas.

Artigo 82

Tudo o que se refira á presumpção de morte do ausente e a seus direitos eventuaes, regular-se-á pela sua lei pessoal.

Artigo 83

A declaração de ausencia ou a sua presumpção, assim como a sua terminacão, e a de presumpção da morte do ausente, tem efficácia extraterritorial, inclusive no que se refere á nomeação e facultades dos administradores.

CAPITULO X

TUTELA

Artigo 84

Applicar-se-á a lei pessoal do menor ou incapaz no que se refere ao objecto da tutela ou curatela, sua organização e suas especies.

Artigo 85

A mesma lei deve observar-se quanto á instituição do curador.

Artigo 86

As' incapacidades e excusas para a tutela e curatela devem applicar-se simultaneamente as leis pessoaes do tutor ou curador e as do menor ou incapaz.

Artigo 87

A fiança da tutela ou curatela e as regras para o seu exercicio ficam submettidas á lei pessoal do menor ou incapaz. Se a fiança for hypothecaria ou de penhor, deverá constituir-se na forma prevista pela lei local.

Artigo 88

Regem-se tambem pela lei pessoal do menor ou incapaz as obrigações relativas ás contas, salvo as responsabilidades de ordem penal, que são territoriaes.

Artigo 89

Em quanto ao registro de tutelas applicar-se-ão simultaneamente a lei local e as pessoaes do tutor ou curador e do menor ou incapaz.

Artigo 90

São de ordem publica internacional os preceitos que obrigam o ministerio publico ou qualquer funcionario local a solicitar a declaração de incapacidade de dementes e surdos-mudos e os que fixam os trâmites dessa declaração.

Artigo 91

São tambem de ordem publica internacional as regras que estabelecem as consequencias da interdição.

Artigo 92

A declaratoria de incapacidade e a interdição civil produzem effeitos extraterritoriaes.

Artigo 93

Applicar-se-á a lei local á obrigação do tutor ou curador de alimentar o menor ou incapaz e á faculdade de corrigil-os só moderadamente.

Artigo 94

A capacidade para ser membro de um conselho de familia regula-se pela lei pessoal do interessado.

Artigo 95

As incapacidades especiaes e a organização, funcionamento, direitos e deveres do conselho de familia, submettem-se á lei pessoal do que estiver sujeito á tutela.

Artigo 96

Em todo o caso, as actas e deliberações do conselho de familia deverão conformar-se com as fórmas e solemnidades prescriptas pela lei do lugar em que se reunir.

Artigo 97

Os Estados contractantes, por cujo sistema o domicilio determine a lei pessoal, poderão exigir, no caso de mudança do domicilio dos incapazes de um paiz para outro, que se ratifique a tutela ou curatela ou se outorgue outra.

CAPITULO XI

DA PRODIGALIDADE

Artigo 98

A declaração de prodigalidade e seus effeitos sujeitam-se á lei pessoal do prodigo.

Artigo 99

Apesar do disposto no artigo anterior, a lei de domicilio pessoal não terá applicação á declaração de prodigalidade das pessoas cujo direito nacional desconheça esta intituição.

Artigo 100

A declaração de prodigalidade, feita num dos Estados contractantes, tem efficacia extra-territorial em relação com os outros, sempre que o permitta o direito local.

CAPITULO XII

EMANCIPAÇÃO E MAIORIDADE

Artigo 101

As regras applicaveis á emancipação e á maioridade são as estabelecidas pela legislação pessoal do interessado.

Artigo 102

Sem embargo, a legislação local pôde declarar-se applicavel á maioridade como requisito para optar pela nacionalidade da dita legislação.

CAPITULO XIII

DO REGISTRO CIVIL

Artigo 103

As disposições relativas ao registro civil são territoriaes, salvo no que se refere ás effectuadas pelos agentes consulares ou funcionários diplomaticos. Essa prescripção não affecta os direitos de outro Estado quanto ás relações juridicas submettidas ao direito internacional publico.

Artigo 104

De toda a inscripção relativa a um nacional de qualquer dos Estados contractantes, que se fizer registro civil em outro, deve enviar-se, gratuitamente, por via diplomatica, certidão literal e oficial ao paiz do interessado.

TITULO SEGUNDO

DOS BENS

CAPITULO I

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

Artigo 105

Os bens, seja qual for a sua classe, ficam submettidos á lei do logar.

Artigo 106

Para os effeitos do artigo anterior, ter-se-á em conta, quanto aos bens moveis corporaes e titulos representativos de creditos de qualquer classe, o logar da sua situação ordinaria ou normal.

Artigo 107

A situação dos creditos determina-se pelo logar onde se devem tornar effectivos, e, no caso de não estar marcado, pelo domicilio do devedor.

Artigo 108

A propriedade industrial e intellectual e os demais direitos analogos de natureza economica que autorizam o exercicio de certas actividades concedidas pela lei, consideram-se situadas onde se tiverem registrado officialmente.

Artigo 109

As concessões reputam-se situadas onde forem legalmente obtidas.

Artigo 110

Em falta de toda e qualquer outra regra e, além disso, para os casos não previstos neste Código, se entenderá que os bens moveis de toda a classe estão situados no domicilio do seu proprietário, ou, na falta deste, no do possuidor.

Artigo 111

Exceptuam-se do disposto no artigo anterior as cousas dadas em penhor, que se consideram situadas no domicilio da pessoa em cuja posse se encontrarem.

Artigo 112

Applicar-se-á sempre a lei territorial para distinguir entre os bens moveis e immoveis, sem prejuizo dos direitos adquiridos por terceiros.

Artigo 113

A' mesma lei territorial sujeitam-se as demais clasificações e qualificações juridicas dos bens.

CAPITULO II

DA PROPRIEDADE

Artigo 114

O bem de familia, inalienavel e isento de gravames e embargos, regula-se pela lei da situação.

Não obstante, os nacionaes de um Estado contractante em que se não admitta ou regule essa classe de propriedade, não a poderão ter ou constituir-a em outro, a não ser que, com isso, não prejudiquem a seus herdeiros forçados.

Artigo 115

A propriedade intellectual e a industrial regular-se-ão pelo estabelecido nos convenios internacionaes especiaes, agora existentes ou que no futuro se venham a estabelecer.

Na falta delles, sua obtenção, registro e gozo ficarão submettidos ao direito local que os outorgue.

Artigo 116

Cada Estado contractante tem a faculdade de submeter a regras especiaes em relação aos estrangeiros, a propriedade mineira, a dos navios de pesca e de cabotagem, as industrias no mar territorial e na zona maritima e a obtenção e gozo de concessões e obras de utilidade publica e de serviço publico.

Artigo 117

As regras geraes sobre propriedade e o modo de a adquirir ou alienal-a entre vivos, incluindo as applicaveis a thesouro occulto, assim como as que regem as aguas do dominio publico e privado e seu aproveitamento, são de ordem publica internacional.

CAPITULO III

DA COMMUNHÃO DE BENS

Artigo 118

A communhão de bens rege-se em geral pelo accôrdo ou vontade das partes e, na sua falta, pela lei do logar. Esta ultima ter-se-á como a do domicilio, na falta de pacto em contrario.

Artigo 119

Applicar-se-á sempre a lei local, com caracter exclusivo, ao direito de pedir a divisão de objecto commum e ás fórmas e condições do seu exercicio.

Artigo 120

São de ordem publica internacional as disposições sobre demarcação e balizamento, sobre o direito a fechar as propriedades rústicas e as relativas a edificios em ruina e arvores que ameaçam cair.

CAPITULO IV

DA POSSE

Artigo 121

A posse e os seus effeitos regulam-se pela lei local.

Artigo 122

Os modos de adquirir a posse regulam-se pela lei applicavel a cada um, segundo a sua natureza.

Artigo 123

Determinam-se pela lei do tribunal os meios e os trámites utilizaveis para se manter a posse do possuidor inquietado, perturbado ou despojado, em virtude de medidas ou decisões judiciaes ou por consequencia delles.

CAPITULO V. — DO USUFRUCTO, DO USO E DA HABITAÇÃO

Artigo 124

Quando o usufructo se constituir por determinação da lei de um Estado contractante, a dita lei regulal-o-á obrigatoriamente.

Artigo 125

Se o usufructo se houver constituído pela vontade de particulares, manifestada em actos entre vivos ou *mortis causa*, applicar-se-á respectivamente a lei do acto ou a da successão.

Artigo 126

Se o usufructo surgir por prescripção, sujeitar-se-á á lei local que a tiver estabelecido.

Artigo 127

Depende da lei pessoal do filho o preceito que dispensa ou não da fiança ao pae usufructuario.

Artigo 128

Subordinam-se á lei da successão a necessidade de prestar o conjugue sobrevivente fiança pelo usufructo hereditario e a obrigação do usufructuario de pagar certos legados ou dívidas hereditarias.

Artigo 129

São de ordem publica internacional as regras que definem o usufructo e as fórmulas da sua constituição, as que fixam as causas legaes, pelas quaes elle se extingue e as que o limitam a certo numero de annos para os povoados, corporações ou sociedades.

Artigo 130

O uso e a habitação regem-se pela vontade da parte ou das partes que os estabelecerem.

CAPITULO VI

DAS SERVIDÕES

Artigo 131

Applicar-se-á o direito local ao conceito e classificação das servidões, ao modo não convencional de as adquirir e extinguir e aos direitos e obrigações, neste caso, dos proprietários dos predios dominante e serviente.

Artigo 132

As servidões de origem contractual ou voluntaria submettem-se á lei do acto ou relação jurídica que as originar.

Artigo 133

São exceptuados do que se dispõe no artigo anterior a comunidade de pastos em terrenos públicos e o resgate do aproveitamento de lenhas e outros productos dos montes e propriedades particulares, que estão sujeitas á lei territorial.

Artigo 134

São de ordem privada as regras applicaveis ás servidões legaes que se impõem por interesse ou por utilidade particular.

Artigo 135

Deve applicar-se o direito territorial ao conceito e enumeração das servidões legaes e á regulamentação não convencional das aguas, passagens, meações, luz e vista, desaguamento de edifícios e terrenos e obras intermedias para construções e plantações.

CAPITULO VII

DO REGISTRO DA PROPRIEDADE

Artigo 136

São de ordem publica internacional as disposições que estabelecem os registros de propriedade e os regulam e impõem a sua necessidade em relação a terceiros.

Artigo 137

Inscrever-se-ão nos registros de propriedade de cada um dos Estados contractantes os documentos ou títulos, susceptíveis de inscrição, outorgados em outro, que tenham força no primeiro, de acordo com esta Convenção, e as executorias a que, de acordo com o mesmo, se dê cumprimento no Estado a que o registro corresponda ou tenha nesse força de causa julgada.

Artigo 138

As disposições sobre hypotheca legal a favor do Estado, das provincias ou dos povoados, são de ordem publica internacional.

Artigo 139

A hypotheca legal que algumas leis concedem em beneficio de certas pessoas individuaes, sómente será exigivel quando a lei pessoal concorde com a lei do logar em que estejam situados os bens affectados por ella.

TITULO TERCEIRO

DE VARIOS MODOS DE ADQUIRIR

CAPITULO I

DAS DOAÇÕES

Artigo 140

Applica-se o direito local aos modos de adquirir em relação aos quaes não haja nesta Convenção disposições em contrario.

CAPITULO II

DAS DOAÇÕES

Artigo 141

As doações, quando forem de origem contractual, ficarão submettidas, para sua perfeição e effeitos entre vivos, ás regras geraes dos contractos.

Artigo 142

Sujeitar-se-á ás leis pessoaes respectivas, do doador e do donatario, a capacidade de cada um delles.

Artigo 143

As doações que tiverem de produzir effeito por morte do doador participarão da natureza das disposições de ultima vontade e reger-se-ão pelas regras internacionaes establecidas nesta Convenção para a successão testamentaria.

CAPITULO III

DAS SUCCESSÕES EM GERAL

Artigo 144

As successões intestadas e as testamentarias, incluindo a ordem

de succeder, a quota dos direitos successorios e a validade intrínseca das disposições, reger-se-ão, salvo casos de excepção mais adiante estabelecidos, pela lei pessoal do causante, qualquer que seja a natureza dos bens e o lugar em que se encontrem.

Artigo 145

E' de ordem publica internacional o preceito em virtude do qual os direitos á successão de uma pessoa se transmittem no momento da sua morte.

CAPITULO IV

DOS TESTAMENTOS

Artigo 146

A capacidade para dispor por testamento regula-se pela lei pessoal do testador.

Artigo 147

Applicar-se-á a lei territorial ás regras estabelecidas por cada Estado para prova de que o testador demente está em um intervallo lucido.

Artigo 148

São de ordem publica internacional as disposições que não admittem o testamento mancomunado, o olographo ou o verbal, e as que o declaram acto pessoal.

Artigo 149

Tambem são de ordem publica internacional as regras sobre a fórmā de papeis privados relativos a testamentos e sobre nullidade do testamento outorgado com violencia, dolo ou fraude.

Artigo 150

Os preceitos sobre a fórmā dos testamentos são de ordem publica internacional, com excepção dos relativos ao testamento outorgado no estrangeiro e ao militar e ao marítimo, nos casos em que se outorguem fóra do paiz.

Artigo 151

Sujeitam-se á lei pessoal dos testadores a procedencia, condições e effeitos da revogacão de um testamento, mas a presumpção de o haver revogado determina-se pela lei local.

CAPITULO V

DA HERANÇA

Artigo 152

A capacidade para succeder por testamento ou sem elle regula-se pela lei pessoal do herdeiro ou legatario.

Artigo 153

Não obstante o disposto no artigo precedente, são de ordem publica internacional as incapacidades para succeder que os Estados contractantes considerem como tal.

Artigo 154

A instituição de herdeiros e a substituição se subordinarão á lei pessoal do testador.

Artigo 155

Applicar-se-á, não obstante, o direito local á prohibição de substituições fideicommissarias que passem do segundo grau ou que se façam a favor de pessoas que não viverem por occasião do falecimento do testador e as que envolvam prohibição perpetua de alienar.

Artigo 156

A nomeação e as faculdades dos testamenteiros ou executores testamentarios, dependem da lei pessoal do defunto e devem ser reconhecidas em cada um dos Estados contractantes, de accôrdo com essa lei.

Artigo 157

Na successão intestada, quando a lei chamar o Estado a titulo de herdeiro, na falta de outros, applicar-se-á a lei pessoal do causante; mas se o chamar como occupante de causas *nullius* applicar-se-á o direito local.

Artigo 158

As precauções que se devem adoptar quando a viuva estiver gravida, se ajustarão ao disposto na legislação do logar em que ella se encontrar.

Artigo 159

As formalidades requeridas para aceitar a herança a beneficio de inventario ou para fazer uso do direito de deliberar, são as establecidas na lei do logar em que a successão fôr aberta, bastando isso para os seus effeitos extraterritoriaes.

Artigo 160

O preceito que se refere a proindivisão illimitada da herança ou estabeleça a partilha provisoria, é de ordem publica internacional.

Artigo 161

A capacidade para pedir e levar a cabo a divisão, sujeita-se á lei pessoal do herdeiro.

Artigo 162

A nomeação e as faculdades do contador ou perito partidor dependem da lei pessoal do causante.

Artigo 163

Subordina-se a essa mesma lei o pagamento das dívidas hereditárias. Sem embargo, os credores que tiverem garantia de carácter real, poderão tornal-a efectiva de acordo com a lei que reja essa garantia.

TITULO QUARTO

DAS OBRIGAÇÕES E CONTRACTOS

CAPITULO I

DAS OBRIGAÇÕES EM GERAL

Artigo 164

Os conceito e a classificação das obrigações sujeitam-se á lei territorial.

Artigo 165

As obrigações derivadas da lei regem-se pelo direito que as tiver estabelecido.

Artigo 166

As obrigações que nascem dos contractos têm força de lei entre as partes contractantes e devem cumprir-se segundo o theor dos mesmos, salvo as limitações estabelecidas neste Código.

Artigo 167

As obrigações originadas por delictos ou faltas sujeitam-se ao mesmo direito que o delicto ou falta de que procedem.

Artigo 168

As obrigações que derivem de actos ou omissões em que intervenha culpa ou negligencia não punidas pela lei, reger-se-ão pelo direito do lugar em que tiver ocorrido a negligencia ou culpa que as origine.

Artigo 169

A natureza e os effeitos das diversas classes de obrigações, assim como a sua extincção, regem-se pela lei da obrigação de que se trata.

Artigo 170

Não obstante o disposto no artigo anterior, a lei local regula as condições do pagamento e a moeda em que se deve fazer.

Artigo 171

Tambem se submette á lei do lugar a determinação de quem deve satisfazer as despezas judiciaes que o pagamento originar assim como a sua regulamentação.

Artigo 172

A prova das obrigações sujeitam-se, enquanto á sua admissão e efficacia, á lei que reger a mesma obrigação.

Artigo 173

A impugnação da certeza do lugar da outorga de um documento particular, se influir na sua efficacia, poderá ser feita sempre pelo terceiro a quem prejudicar, e a prova ficará a cargo de quem a apresente.

Artigo 174

A presumpção de cousa julgada por sentença extrangeira será admissivel, sempre que a sentença reuna as condições necessarias para a sua execução no territorio conforme o presente Codigo.

CAPITULO II

DOS CONTRACTOS EM GERAL

Artigo 175

São regras de ordem publica internacional as que vedam o estabelecimento de pactos, clausulas e condições contrarias ás leis, á moral e á ordem publica e as que prohibirem o juramento e o tiver por não valido.

Artigo 176

Dependem da lei pessoal de cada contractante as regras que determinarem a capacidade ou a incapacidade para prestar o consentimento.

Artigo 177

Applicar-se-á a lei territorial ao erro, á violencia, á intimidação e ao dolo em relação ao consentimento.

Artigo 178

E' tambem territorial toda a regra que prohibir que seja objecto de contracto serviços contrarios ás leis e aos bons costumes e cousas que estejam fora do commercio.

Artigo 179

São de ordem publica internacional as disposições que se referem á causa illicita nos contractos.

Artigo 180

Applicar-se-ão simultaneamente a lei do lugar do contracto e a da sua execução, á necessidade de outorgar escriptura ou documento publico para a efficacia de determinados convenios a á de os fazer constar por escripto.

Artigo 181

A rescisão dos contractos por incapacidade ou ausencia, determina-se pela lei pessoal do ausente ou incapaz.

Artigo 182

As demais causas de rescisão e sua forma e effeitos subordinam-se á lei territorial.

Artigo 183

As disposições sobre nullidade de contractos sujeitar-se-ão á lei da causa de que dependa a nullidade.

Artigo 184

A interpretação dos contractos deve effectuar-se, como regra geral, de accôrdo com a lei que os reger.

Sem embargo, quando essa lei se discuta e deva resultar da vontade tacita das partes, applicar-se-á presumidamente a legislação que para esse caso se determina nos artigos 185 e 186, mesmo que

isso leve a applicar ao contracto uma lei distincta como resultado da interpretação da vontade.

Artigo 185

Fóra das regras já estabelecidas e das que no futuro se consignem para os casos especiaes, nos contractos de adhesão presume-se aceita, na falta de vontade expressa ou tacita, a lei de quem os offerece ou prepara.

Artigo 186

Nos demais contractos, e para o caso previsto no artigo anterior, applicar-se-á em primeiro lugar a lei pessoal *communum* aos contractantes e, na sua falta, a do lugar da celebração.

CAPITULO III

DOS CONTRACTOS MATRIMONIAES EM RELAÇÃO A BENS

Artigo 187

Os contractos matrimoniaes regem-se pela lei pessoal *communum* aos contractantes e, na sua falta, pela do primeiro domicilio matrimonial.

Essas mesmas leis determinam, nessa ordem, o regimen legal suppletivo na falta de estipulação.

Artigo 188

E' de ordem publica internacional o preceito que veda celebrar ou modificar o contracto nupcial durante o matrimonio, alterar o regimen de bens por mudança de nacionalidade ou de domicilio posterior ao mesmo.

Artigo 189

Tem igual caracter os preceitos que se referem á manutenção das leis e bons costumes, aos effeitos do contracto nupcial em relação a terceiros e a sua fórmula solemne.

Artigo 190

A vontade das partes regula o direito applicavel ás doações por motivo de matrimonio, excepto no que se refere á capacidade dos contractantes, á salvaguarda de direitos dos herdeiros legítimos e á sua nullidade, enquanto o matrimonio subsistir, subordinando-se tudo á lei geral que o regular e desde que não afecte á ordem publica internacional.

Artigo 191

E' de ordem publica internacional o preceito que repudia a inalienabilidade do dote.

Artigo 192

As disposições sobre dote e enxoval dependem da lei pessoal da mulher.

Artigo 193

E' de ordem publica internacional a proibição de renunciar a comunhão de bens adquiridos durante o matrimonio.

CAPITULO IV

COMPRA E VENDA, CESSÃO DE CREDITO E PERMUTA

Artigo 194

São de ordem publica internacional as disposições relativas á alienação forçada por utilidade publica.

Artigo 195

O mesmo sucede com as disposições que fixam os effeitos da posse e da inscripção entre varios adquirentes e as referentes á remissão legal.

CAPITULO V

ARRENDAMENTO

Artigo 196

No arrendamento de coisas deve applicar-se a lei territorial ás medidas para salvaguardar o interesse de terceiros e aos direitos e deveres do comprador de propriedade arrendada.

Artigo 197

E' de ordem publica internacional, na locação de serviços, a regra que impede contractualos por toda a vida ou por mais de certo tempo.

Artigo 198

Tambem é territorial a legislação sobre accidentes de trabalho e protecção social do trabalhador.

Artigo 199

São territoriaes, quanto aos transportes por agua, terra e ar, as leis e regulamentos locaes e especiaes.

CAPITULO VI

FOROS

Artigo 200

Applica-se a lei territorial á determinação do conceito e classes dos foros, seu caracter remivel, sua prescripção e á accão real que delles deriva.

Artigo 201

Para o foro emphyteutico são igualmente territoriaes as disposições que fixam as suas condições e formalidades, que lhe impõem um reconhecimento em cada numero de annos e que prohibem a sub-emphyteuse.

Artigo 202

Tem o mesmo caracter no fôro reservativo a exigencia de que se valorize a propriedade aforada.

Artigo 203

No fôro consignativo, é de ordem publica internacional a regra que prohíbe que o pagamento em fructos possa consistir em uma parte aliquota do que produza a propriedade aforada.

CAPITULO VII

SOCIEDADE

Artigo 204

São leis territoriaes as que exigem na sociedade, um objecto licito, fórmas solemnes e inventarios, quando haja immoveis.

CAPITULO VIII

EMPRESTIMO

Artigo 205

Applica-se a lei local á necessidade do pacto expresso de juros e sua taxa.

CAPITULO IX

DEPOSITO

Artigo 206

São territoriaes as disposições referentes ao deposito necessário e ao sequestro.

CAPITULO X

CONTRACTOS ALEATORIOS

Artigo 207

Os effeitos da capacidades, em accções nascidas do contracto de jogo, determinam-se pela lei pessoal do interessado.

Artigo 208

A lei local define os contractos dependentes de sorte e determina que o jogo e a aposta sejam permitidos ou prohibidos.

Artigo 209

E' territorial a disposição que declara nulla a renda vitalicia sobre a vida de uma pessoa, morta na data da outorga, ou, dentro de um prazo, se esteja padecendo de doença incurável.

CAPITULO XI

TRANSAÇÕES E COMPROMISSOS

Artigo 210

São territoriales as disposições que prohibem transigir ou sujeitar a compromissos determinadas matérias.

Artigo 211

A extensão e efeitos do compromisso e a autoridade de causa julgada da transacção, dependem também da lei territorial.

CAPITULO XII

DA FIANÇA

Artigo 212

E' de ordem publica internacional a regra que proíbe o fiador a obrigar-se por mais que o devedor principal.

Artigo 213

Correspondem à mesma classe as disposições relativas à fiança legal ou judicial.

CAPITULO XIII

PENHOR, HYPOTHECA E ANTICRESE

Artigo 214

E' territorial a disposição que proíbe ao credor apropriar-se das causas recebidas como penhor ou hypotheca.

Artigo 215

Também os são os preceitos que determinam os requisitos essenciais do contrato de penhor e por elas se deve reger quando o objecto penhorado se transfira a outro lugar onde sejam diferentes dos exigidos ao constituir-o.

Artigo 216

São igualmente territoriales as prescrições em virtude das quais o penhor deve ficar em poder do credor ou de um terceiro,

as que exijam, para obrigar a terceiros, que conste, por instrumento publico, a certeza da data e as que fixam o processo para a sua alienação.

Artigo 217

Os regulamentos especiaes de monte-pios e estabelecimentos publicos analogos são obligatorios territorialmente para todas as operações que com elles se realizarem.

Artigo 218

São territoriales as disposições que fixam o objecto, as condições, os requisitos, o alcance e a inscripção do contracto de hypotheca.

Artigo 219

E' igualmente territorial a proibição de que o credor adquira a propriedade do immovel em anticrese, por falta de pagamento da dívida.

CAPITULO XIV

QUASI-CONTRACTOS

Artigo 220

A gestão de negócios alheios é regulada pela lei do lugar em que se effectuar.

Artigo 221

A cobrança do indebito submette-se á lei pessoal commun das partes e, na sua falta, á do lugar em que se fizer o pagamento.

Artigo 222

Os demais quasi-contractos sujeitam-se á lei que regula a instituição jurídica de que se originam.

CAPITULO XV

CONCURSO E PREFERENCIA DE CREDITOS

Artigo 223

Se as obrigações concorrentes não têm carácter real e estão submettidas a uma lei commun, a dita lei regulará também a sua preferencia.

Artigo 224

Para as obrigações garantidas com acção real applicar-se-á a lei da situação da garantia.

Artigo 225

Fóra dos casos previstos nos artigos anteriores, deve applicar-se á preferencia de creditos a lei do tribunal que tiver de a decidir.

Artigo 226

Se a questão fôr apresentada simultaneamente em mais de um tribunal de Estados diversos, resolver-se-á de accordo com a lei daquelle que tiver realmente sob a sua jurisdição os bens ou numerario em que se tiver de fazer effectiva a preferencia.

CAPITULO XVI

PREScripção

Artigo 227

A prescripção acquisitiva de bens moveis ou immoveis é regulada pela lei do lugar em que estiverem situados.

Artigo 228

Se as cousas moveis mudarem de situação estando a caminho de prescrever, será regulada a prescripção pela lei do lugar em que se encontrarem ao completar-se o tempo requerido.

Artigo 229

A prescripção extintiva de acções pessoaes é regulada pela lei a que estiver sujeita a obrigação que se vae extinguir.

Artigo 230

A prescripção extintiva de acções reaes é regulada pela lei do lugar em que estiver situada a cousa a que se refira.

Artigo 231

Se no caso previsto no artigo anterior, se trate de cousas moveis que tiverem mudado de lugar durante o prazo da prescripção, applicar-se-á a lei do lugar em que se encontrarem ao cumprir o prazo marcado para prescrever.

LIVRO SEGUNDO

DIREITO COMMERCIAL INTERNACIONAL

TITULO PRIMEIRO

DOS COMMERCIAUTES E DO COMMERCIO EN GERAL.

CAPITULO I

DOS COMMERCIAUTES

Artigo 232

A capacidade para exercer o commercio e para intervir em actos e contractos commerciales é regulada pela lei pessoal de cada interessado.

Artigo 233

A' essa mesma lei pessoal se subordinam as incapacidades e a sua habilitação.

Artigo 234

A lei do lugar em que o commercio se exerce deve applicar-se ás medidas de publicidade necessarias para que possam dedicar-se a elle, por meio do seus representantes, os incapazes, ou, por si, as mulheres casadas.

Artigo 235

A lei do lugar deve applicar-se á incompatibilidade para o exercicio do commercio pelos empregados publicos e pelos agentes de commercio e correctores.

Artigo 236

Toda a incompatibilidade para o commercio que resultar de leis ou disposições especiaes em determinado territorio reger-se-á pelo direito desse territorio.

Artigo 237

A dita incompatibilidade, quanto a funcionarios diplomaticos e agentes consulares, será regulada pela lei do Estado que os nomear. O paiz onde residirem tem igualmente o direito de prohibir-lhes o exercicio do commercio.

Artigo 238

Os contracto social ou a lei a que o mesmo fique sujeito, applica-se á proibição de que os socios collectivos ou commanditarios realizem, por conta propria ou alheia, operações mercantis ou determinada classe das mesmas.

CAPITULO II

DA QUALIDADE DE COMMERCIANTE E DOS ACTOS DE COMMERCIO

Artigo 239

Para todos os effeitos de caracter publico, a qualidade de comerciante é determinada pela lei do lugar em que tiver realizado o acto ou exercido a industria de que se tratar.

Artigo 240

A forma dos contractos e actos commerciales fica sujeita á lei territorial.

CAPITULO III

DO REGISTRO MERCANTIL

Artigo 241

São territoriaes as disposições relativas á inscripção no registro mercantil dos comerciantes e sociedades estrangeiras.

Artigo 242

Tem o mesmo caracter as regras que estabelecem o effeito da inscripção, no dito registro, de creditos ou direitos de terceiros.

CAPITULO IV

LUGARES E CASAS DE BOLSA E COTIZAÇÃO OFFICIAL DE TITULOS PUBLICOS E DOCUMENTOS DE CREDITO AO PORTADOR

Artigo 243

As disposições relativas aos lugares e casas de bolsa e cotização official de titulos publicos e documentos de credito ao portador são de ordem publica internacional.

CAPITULO V

DISPOSIÇÕES GERAES SOBRE OS CONTRACTOS DE COMMERCIO

Artigo 244

Applicar-se-ão aos contractos de commercio as regras geraes estabelecidas para os contractos civis no capitulo segundo, titulo quarto, livro primeiro deste Codigo.

Artigo 245

Os contractos por correspondencia não ficarão perfeitos a não ser mediante o cumprimento das condições que para esse effeito indicar a legislacão de todos os contractantes.

Artigo 246

São de ordem publica internacional as disposições relativas a contractos illicitos e a termos de graça, cortesia, e outros analogos.

TITULO SEGUNDO

DOS CONTRACTOS ESPECIAES DE COMMERCIO

CAPITULO I

DAS COMPANHIAS COMMERCIAES

Artigo 247

O caracter commercial de uma sociedade collectiva ou commanditaria determina-se pela lei a que estiver submettido o contracto social, e, na sua falta, pela do lugar em que tiver o seu domicilio commercial.

Se essas leis não distinguirem entre sociedades commerciaes e civis, applicar-se-á o direito do paiz em que a questão se submitter a juizo.

Artigo 248

O caracter mercantil duma sociedade anonyma, depende da lei do contracto social; na falta deste da do logar em que se effectuem as juntas geraes de accionistas, e em sua falta d'aquelle em que habitualmente resida o seu Conselho ou Junta Directiva.

Se estas leis não distinguirem entre sociedades commerciaes e civis, terá um ou outro caracter conforme esteja ou não inscripta no registro commercial do paiz onde a questão tiver de julgar-se. A' falta de registro mercantil applicar-se-á o direito local deste ultimo paiz.

Artigo 249

Tudo quanto se relate com a constituição e maneira de funcionar das sociedades mercantis e com a responsabilidade dos seus componentes está sujeito ao contracto social, e na sua falta, á lei que o reja.

Artigo 250

A emissão de acções e obrigações em um Estado contractante, as fórmas e garantias de publicidade e a responsabilidade dos gerentes de agencias e succursaes a respeito de terceiros, submettem-se á lei territorial.

Artigo 251

São tambem territoriaes as leis que subordinam a sociedade a um regimen especial em vista das suas operaçōes.

Artigo 252

As sociedades mercantis devidamente constituidas em um Estado contractante desfrutarão da mesma personalidade juridica nos demais, salvas as limitações do direito territorial.

Artigo 253

São territoriaes as disposições que se referem á creaçō, funcionamento e privilegios dos bancos de emissão e desconto, companhias de armazens geraes de depositos, e outras analogas.

CAPITULO II

COMMISSÃO MERCANTIL

Artigo 254

São de ordem publica internacional as prescripções relativas á forma da venda urgente pelo commissario, para salvar, no possivel, o valor das cousas em que a commissão consista.

Artigo 255

As obrigações do factor estão sujeitas á lei do domicilio mercantil do mandante.

CAPITULO III

DO DEPOSITO E EMPRESTIMO MERCANTIS

Artigo 256

As responsabilidades não civis do depositario regem-se pela lei do lugar do deposito.

Artigo 257

A taxa ou liberdade do juro mercantil são de ordem publica internacional.

Artigo 258

São territoriaes as disposições referentes ao emprestimo com garantia de titulos cotizaveis, executado em bolsa, com intervenção de agente collegiado ou funcionario official.

CAPITULO IV

DO TRANSPORTE TERRESTRE

Artigo 259

Nos casos de transporte internacional não ha mais que um contracto regido pela lei que lhe corresponda segundo a sua natureza.

Artigo 260

Os prazos e formalidades para o exercicio de acções surgidas deste contracto, e não previstas no mesmo, regem-se pela lei do lugar em que se produzam os actos que as originarem.

CAPITULO V

DOS CONTRACTOS DE SEGURO

Artigo 261

O contracto de seguro contra incendios se rege pela lei do lugar onde se ache, ao effectual-o, a cousa segurada.

Artigo 262

Os outros contractos de seguros seguem a regra geral, regulando-se pela lei pessoal commum das partes ou na sua falta,

pela do logar em que se celebrarem; mas, as formalidades exter-
nas para comprovação de factos ou omissões que são necessarias
ao exercicio ou conservação de acções ou direitos, ficam sujeitas
á lei do logar em que se produzir o facto ou omissão que as origina.

CAPITULO VI

DO CONTRACTO E LETRA DE CAMBIO E EFFEITOS MERCANTIS ANALOGOS

Artigo 263

A forma do saque, endosso, fiança, intervenção, aceite e protesto de uma letra de cambio, submette-se á lei do lugar em que cada um dos ditos actos se realizar.

Artigo 264

Na falta de convenio expresso ou tacito, as relações juridicas entre o sacador e o tomador serão reguladas pela lei do lugar em que a letra se saca.

Artigo 265

Em igual caso, as obrigações e direitos entre o acceptante e o portador regulam-se pela lei do lugar em que se effectuar o aceite.

Artigo 266

Na mesma hypothese, os effeitos juridicos que o endosso produz, entre o endossante e o endossado, dependem da lei do lugar em que a letra for endossada.

Artigo 267

A maior ou menor extensão das obrigações de cada endossante, não altera os direitos e deveres originarios do sacador e do tomador.

Artigo 268

O aval nas mesmas condições, é regulado pela lei do lugar em que se prestar.

Artigo 269

Os effeitos juridicos da acceptação por intervenção regulam-se, em falta de pacto, pela lei do lugar em que o terceiro intervier.

Artigo 270

Os prazos e formalidades para o aceite, pagamento e protesto, submettem-se á lei local.

Artigo 271

As regras deste capitulo são applicaveis ás notas promissórias, vales e cheques.

CAPITULO VII

DA FALSIFICAÇÃO, ROUBO, FURTO OU EXTRAVIO DE DOCUMENTOS DE CREDITO E TITULOS AO PORTADOR

Artigo 272

As disposições relativas á falsificação, roubo, furto ou extravio de documentos de credito e titulos ao portador, são de ordem publica internacional.

Artigo 273

A adopção das medidas que estabelecem a lei do lugar em que o acto se produz, não dispensa aos interessados de tomar quaisquer outras que estabeleça a lei do lugar em que esses documentos e effeitos tenham cotação e a do lugar do seu pagamento.

TITULO TERCEIRO

DO COMMERCIO MARITIMO E AEREO

CAPITULO I

DOS NAVIOS E AERONAVES

Artigo 274

A nacionalidade dos navios justifica-se pela patente de navegação e a certidão de registo, e tem a bandeira como signal que a distingue aparentemente.

Artigo 275

A lei do pavilhão regula as fórmas de publicidade requeridas para a transmissão da propriedade de um navio.

Artigo 276

A lei da situação deve submeter-se a faculdade de embargar e vender judicialmente um navio esteja ou não carregado e despachado.

Artigo 277

Regulam-se pela lei do pavilhão os direitos dos credores depois da venda do navio e sua extinção.

Artigo 278

A hypotheca maritima e os privilegios e garantias de caracter real, constituidos de accordo com a lei do pavilhão, tem effeitos extraterritoriaes mesmo nos paizes cuja legislacão não conheça ou regule essa hypotheca ou esse privilegio.

Artigo 279

Sujeitam-se tambem á lei do pavilhão os poderes e obrigações do capitão e a responsabilidade dos proprietarios e armadores pelos seus actos.

Artigo 280

O reconhecimento do navio, o pedido de pratico e a policia sanitaria, dependem da lei territorial.

Artigo 281

As obrigações dos officiaes e gente do mar e a ordem interna do navio, sujeitam-se á lei pavilhão.

Artigo 282

As precedentes disposições deste capitulo applicam-se tambem ás aeronaves.

Artigo 283

São de ordem publica internacional as regras sobre a nacionalidade dos proprietarios dos navios e aeronaves e dos armadores assim como dos officiaes e sua tripulação.

Artigo 284

Tambem são de ordem publica internacional as disposições sobre nacionalidade de navios e aeronaves para o commercio fluvial lacustre e de cabotagem e entre determinados lugares do territorio dos Estados contractantes, assim como para a pesca e outros aproveitamentos submarinos no mar territorial.

CAPITULO II

DOS CONTRACTOS ESPECIAES DE COMMERCIO MARITIMO E AEREO

Artigo 285

O fretamento, caso não seja um contracto de adhesão, reger-se-ha pela lei do lugar de saida das mercadorias.

Os actos de execução de contracto ajustar-seão á lei do lugar em que se effectuarem.

Artigo 286

As faculdades do capitão para o emprestimo de risco maritimo determinam-se pela lei do pavilhão. Os actos de execução do contracto se ajustarão á lei do lugar em que se cumpram.

Artigo 287

O contracto de emprestimo de risco maritimo, salvo pacto em contrario, sujeita-se á lei do lugar em que o emprestimo se effectuar.

Artigo 288

Para determinar se a avaria é simples ou grossa e a proporção em que devem contribuir para a supportar o navio e a carga, applica-se a lei do pavilhão.

Artigo 289

O abalroamento fortuito em aguas territoriaes ou no espaço aereo nacional submette-se á lei do pavilhão se este fôr commun.

Artigo 290

No mesmo caso, se os pavilhões diferirem, applica-se a lei do lugar.

Artigo 291

Applica-se essa mesma lei local a todo o caso de abalroamento culpavel em aguas territoriaes ou no espaço aereo nacional.

Artigo 292

A lei do pavilhão applicar-se-ha nos casos de colisões fortuitas ou culpaveis em alto mar ou no livre espaço, se os navios ou aeronaves tiverem o mesmo.

Artigo 293

Em caso contrario, regular-se-á pelo pavilhão do navio ou aeronave abalroada se o abalroamenot for culpavel.

Artigo 294

Nos casos de abalroamento fortuito no alto mar ou no espaço aereo livre, entre navios ou aeronaves de differentes pavilhões, cada um supportará a metade da somma total do prejuizo, dividido segundo a lei de uma dellas, e a metade restante dividida segundo a lei da outra.

TITULO QUARTO

DA PRESCRIPÇÃO

Artigo 295

A precripção das acções nascidas dos contractos e actos commerciaes, se adaptará ás regras estabelecidas neste Código a respeito das acções civis.

LIVRO TERCEIRO

DIREITO PENAL INTERNACIONAL

CAPITULO I

DAS LEIS PENAES

Artigo 296

As leis penaes obrigam a todos os que residem no territorio, sem mais excepções que as estabelecidas neste capítulo.

Artigo 297

Está isento das leis penaes de cada Estado contractante, o chefe de outro Estado que se encontrar no seu territorio.

Artigo 298

Gozam de igual isenção os representantes diplomaticos dos Estados contractantes em cada um dos demais, assim como os seus empregados estrangeiros, e as pessoas de familia dos primeiros, que viverem em sua companhia.

Artigo 299

Tampouco são applicaveis as leis penaes dum Estado aos delictos commettidos no perimetro das operações militares, quando auctorize a passagem pelo seu territorio dum exercito de outro Estado contractante, salvo que não tenhan relação legal com o dito exercito.

Artigo 300

A mesma isenção se applica aos delictos commettidos em aguas territoriales ou no ar nacional, a bordo de navios ou de aeronaves estrangeiras de guerra.

Artigo 301

O mesmo succede com os delictos commettidos em aguas territoriales ou espaço aereo nacional em navios ou aeronaves mercantes

extrangeiras, se não tiverem relação alguma com o paiz e seus habitantes nem perturbarem a sua tranquilidade.

Artigo 302

Quando os actos de que se compõe um delicto se realizem em Estados contractantes diversos, cada Estado pode castigar o acto realizado em seu paiz, se elle constituir por si só, um acto punivel.

Em caso contrario, dar-se-á preferencia ao direito da soberania local em que o delicto se tiver consumado.

Artigo 303

Se se trata de delictos connexos em territorios de mais de um Estado contractante, só ficará subordinado á lei penal de cada um o que for commettido no seu territorio.

Artigo 304

Nenhum Estado contractante applicará em seu territorio as leis penaes dos outros.

CAPITULO II

DELICTOS COMMETIDOS EM UM ESTADO EXTRANGEIRO CONTRACTANTE

Artigo 305

Estão sujeitos no estrangeiro ás leis penaes de cada Estado contractante, os que commeterem um delicto contra a segurança interna ou externa do mesmo Estado ou contra o seu credito publico, seja qual for a nacionalidade ou o domicilio do delinquente.

Artigo 306

Todo o nacional em um Estado contractante ou todo o estrangeiro domiciliado nelle, que commetta no estrangeiro um delicto contra a independencia desse Estado, fica sujeito ás suas leis penaes.

Artigo 307

Tambem estarão sujeitos ás leis penaes do Estado estrangeiro em que possam ser apprehendidos e julgados aquelles que commetam fóra do territorio um delicto, como o trafico das brancas, que esse Estado contractante se tenha obrigado a reprimir por um accordo internacional.

CAPITULO III

DELICTOS COMMETIDOS FÓRA DE TODO O TERRITORIO NACIONAL

Artigo 308

A pirataria, o trafico de negros e o commercio de escravos, o trafico de brancas, a destruição ou deterioração de cabos submari-

nos e os demais delictos da mesma indole, contra o direito internacional, commettidos no alto mar, no ar livre e em territorios não organizados ainda em Estado, castigar-se-ão pelo captor de accordo com as suas leis penas.

Artigo 309

Nos casos de abalroamento culpavel, no alto mar ou no espaço aereo, entre navios ou aeronaves de pavilhão diverso, applicar-se-á a lei penal da victimia.

CAPITULO IV

QUESTÕES VARIAS

Artigo 310

Para o conceito legal da reiteração ou da reincidencia, se terá em conta a sentença pronunciada num Estado estrangeiro contractante, salvo o caso em que a isso se opponha a legislação local.

Artigo 311

A pena de interdição civil terá effeito nos outros Estados mediante o previo cumprimento das formalidades de registro ou publicação que a legislação delles exijam.

Artigo 312

A prescripção do delicto subordina-se á lei do Estado a que corresponda o seu conhecimento.

Artigo 313

A prescripção da pena regula-se pela lei do Estado que a tiver imposto.

LIVRO QUARTO

DIREITO PROCESSUAL INTERNACIONAL

TITULO PRIMEIRO

PRINCIPIOS GERAES

Artigo 314

A lei de cada Estado contractante determina a competencia dos tribunaes, assim como a sua organização, as fórmas de julgamento e a execução das sentenças e os recursos contra suas decisões.

Artigo 315

Nenhum Estado contractante organizará ou manterá no seu territorio tribunaes especiaes para os membros dos demais Estados contractantes.

Artigo 316

A competencia *ratione loci* subordina-se na ordem das relacões internacionaes á lei do Estado contractante que a estabelecer.

Artigo 317

A competencia *ratione materiae* e *ratione personae*, na ordem das relacões internacionaes, não deve basear-se pelos Estados contractantes na condição de nacionaes ou estrangeiros das pessoas interessadas, em prejuizo destas.

TITULO SEGUNDO

COMPETENCIA

CAPITULO I

DAS REGRAS GERAES DE COMPETENCIA NO CIVEL E NO COMMERCIAL

Artigo 318

Será, em primeiro termo, juiz competente para conhecer os pleitos a que dê origem o exercicio das accões civis e mercantis de toda a classe, aquelle a quem os litigantes se submettam expressa ou tacitamente, sempre que um delles, pelo menos, seja nacional do Estado Contractante a que o juiz pertença ou tenha nello o seu domicilio e salvo o direito local contrario.

A submissão não será possivel para as accões reaes ou mixtas sobre bens immoveis, se a prohibir a lei da sua situação.

Artigo 319

A submissão só se poderá fazer ao juiz que exerce jurisdicção ordinaria e que a tenha para conhecer de igual classe de negocios e no mesmo grau.

Artigo 320

Em caso algum poderão as partes submeter-se expressa ou tacitamente para um recurso a juiz ou tribunal differente daquelle a quem estiver subordinado, segundo as leis locaes, ou que tenha conhecido do caso na primeira instancia.

Artigo 321

Entender-se-á por submissão expressa a que for feita pelos

interessados renunciando clara e terminantemente o seu fôro proprio e designado com toda a precisão o juiz a quem se submettem.

Artigo 322

Entender-se-á feita a submissão tacita pelo autor pelo facto de apresentar-se ao juiz interpondo a demanda, e pelo reo pelo facto de praticar, depois de chamado a juizo, qualquer acto que não seja apresentação formal de declinatoria. Não se entenderá que tenha havido submissão tacita se o processo fôr considerado como á revelia.

Artigo 323

Fóra dos casos de submissão expressa ou tacita, e salvo o direito local contrario, será juiz competente para o exercicio de accões pessoaes o do lugar do cumprimento da obrigação, e, na sua falta, o do domicilio ou nacionalidade dos demandados ou, subsidiariamente, o da sua residencia.

Artigo 324

Para o exercicio de accões reaes sobre bens moveis, será competente o juiz da situação, e, se esta não fôr conhecida do autor, o do domicilio, e, na sua falta, o da residencia do réo.

Artigo 325

Para o exercicio de accões reaes sobre bens immoveis e para o das accões mixtas de limites e divisão de bens communs, será juiz competente o da situação dos bens.

Artigo 326

Se, nos casos a que se referem os dois artigos anteriores, houverem bens situados em mais dum Estado contractante, poderá acudir-se aos juizes de qualquer delles, salvo se a lei da situação, no referente a immoveis, o proibia.

Artigo 327

Nos juizos de testamentos ou *ab intestato* será juiz competente o do lugar em que o defuncto tiver tido o seu ultimo domicilio.

Artigo 328

Nos concursos de credores e no de fallencia quando fôr voluntaria a confissão desse estado pelo devedor será juiz competente o do seu domicilio.

Artigo 329

Nos concursos ou fallencias promovidos pelos credores, será

juiz competente o de qualquer dos lugares que tomar conhecimento da reclamação que os motiva, preferindo-se, caso esteja entre elles, o do domicilio do devedor, se este ou a maioria dos credores o reclamarem.

Artigo 330

Para os actos de jurisdição voluntaria, salvo tambem o caso de submissão e respeitado o direito local, será competente o juiz do lugar em que tenha ou tenha tido o seu domicilio, ou, na falta deste, a residencia da pessoa que o motivar.

Artigo 331

A respeito dos actos de jurisdição voluntaria em materia de commercio, fóra do caso de submissão, e salvo o direito local, será competente o juiz do lugar em que a obrigacão deva cumprir-se ou, na sua falta, o do lugar do acto que os origine.

Artigo 332

Dentro de cada Estado contractante, a competencia preferente dos diversos juizes se adaptará ao seu direito nacional.

CAPITULO II

EXCEPÇÕES ÁS REGRAS GERAES DE COMPETENCIA NO CIVEL E NO

COMMERCIAL

Artigo 333

Os juizes e tribunaes de cada Estado contractante serão incompetentes para tomar conhecimento dos assumptos civeis ou commerciaes em que sejam parte demandada os demais Estados contractantes ou seus chefes, se se trata de uma acção pessoal, salvo o caso de submissão expressa ou de pedido de reconvenção.

Artigo 334

Em caso identico e com a mesma excepção, serão incompetentes quando se exercitem acções reaes, se o Estado contractante ou o seu Chefe teem actuado no assumpto como tales e no seu caracter publico, devendo applicar-se o disposto no ultimo paragrapho do artigo 318.

Artigo 335

Se o Estado estrangeiro contractante ou o seu chefe tiverem actuado como particulares ou como pessoas privadas, serão competentes os juizes ou tribunaes para conhecer os assumptos em que se exercitem acções reaes ou mixtas, se essa competencia lhes corresponde em relação a individuos estrangeiros conforme este Código.

Artigo 336

A regra do artigo anterior será applicavel aos juizes universaes, seja qual fôr o caracter com que nelles actuem o Estado estrangeiro contractante ou o seu chefe.

Artigo 337

As disposições estabelecidas nos artigos anteriores, applicar-seão aos funcionarios diplomaticos estrangeiros e aos commandantes de navios ou aeronaves de guerra.

Artigo 338

Os consules estrangeiros não estarão isentos da competencia dos juizes e tribunaes civis do paiz em que residem, excepto para os seus actos officiaes.

Artigo 339

Em nenhum caso poderão os juizes ou tribunaes ordenar medidas coercivas ou de outra classe que tenham de ser executadas no interior das legações ou consulados ou em seus archivos, nem a respeito da correspondencia diplomatica ou consular, sem o consentimento dos respectivos funcionarios consulares ou diplomaticos.

CAPITULO III

REGRAS GERAES DE COMPETENCIA NO PENAL

Artigo 340

Para conhecer dos delictos e faltas e julgal-os são competentes os juizes e tribunaes do Estado contractante em que tiverem sido commettidos.

Artigo 341

A competencia extende-se a todos os demais delictos e faltas a que tenha de se applicar a lei penal do Estado, conforme as disposições deste Codigo.

Artigo 342

Alcança, alem disso, os delictos ou faltas cometidos no estrangeiro por funcionarios nacionaes que gozem do beneficio da immunidade.

CAPITULO IV

EXCEPÇÕES ÁS REGRAS GERAES DE COMPETENCIA EM MATERIA PENAL

Artigo 343

Não estão sujeitos, no penal, á competencia de juizes e tribunaes dos Estados contractantes, as pessoas e os delictos e faltas que não são attingidos pela lei penal do respectivo Estado.

TITULO TERCEIRO

DA EXTRADIÇÃO

Artigo 344

Para se tornar effectiva a competencia judicial internacional em materias penas, cada um dos Estados contractantes accederá ao pedido de qualquer dos outros, para a entrega de individuos condemnados ou processados por delicto que se ajuste ás disposições deste titulo, sujeito ás previsões dos tratados ou convenções internacionaes que contenham listas de infracções penas que autorizem a extradição.

Artigo 345

Os Estados contractantes não estão obrigados a entregar os seus nacionaes. A nação que se negue a entregar um de seus cidadãos estará obrigada a julgal-o.

Artigo 346

Quando, anteriormente ao recebimento do pedido, um processado ou condemnado tiver delinquido no paiz a que se pede a sua entrega, pôde deferir-se essa entrega até que se julgue e cumpra a pena.

Artigo 347

Se varios Estados contractantes solicitarem a extradição de um delinquente pelo mesmo delicto, deve elle ser entregue aquele Estado em cujo territorio o delicto se tenha commettido.

Artigo 348

Caso a extradição se solicite por actos diversos terá preferencia o Estado contractante em cujo territorio se tenha commetido o delicto mais grave segundo a legislação do Estado requerido.

Artigo 349

Se todos os actos imputados tiverem igual gravidade, será preferido o Estado contractante que tiver apresentado primeiro o pedido de extradição. Sendo simultanea a apresentação decidirá o Estado requerido, mas deve conceder preferencia ao Estado de origem ou, na sua falta, ao do domicilio do delinquente se este fôr um dos solicitantes.

Artigo 350

As regras anteriores sobre preferencia não serão applicaveis se o Estado contractante estiver obrigado para com um terceiro,

em virtude de tratados vigentes, anteriores a este Código, a establecer-a de modo differente.

Artigo 351

Para conceder a extradição é necessário que o delicto tenha sido commettido no territorio do Estado que a peça ou que lhe sejam applicaveis suas leis penas, de accôrdo com o livro terceiro deste Código.

Artigo 352

A extradição alcança os processados ou condemnados como autores, cumplices ou encubridores do delicto.

Artigo 353

Para que a extradição possa ser pedida, é necessário que o facto que a motive tenha caracter de delicto na legislação do Estado requerente e na do requerido.

Artigo 354

Equalmente se exigirá que a pena designada aos actos imputados, conforme a sua qualificação provisória ou definitiva, pelo juiz ou tribunal competente do Estado que solicita a extradição, não seja menor de um anno de privação de liberdade e que esteja autorizada ou decidida a prisão ou detenção preventiva do processado, se não houver ainda sentença final. Esta deve ser de privação de liberdade.

Artigo 355

Estão excluidos da extradição os delictos politicos e os com elles relacionados segundo a classificação do Estado requerido.

Artigo 356

Equalmente não se a concederá, se se provar que a petição de entrega foi formulada de facto com o fim de julgar e castigar o accusado por um delicto de carácter político, segundo a mesma qualificação.

Artigo 357

Não será reputado delicto político nem facto connexo, o homicídio, ou assassinato do chefe de um Estado contractante, ou de quaisquer pessoa que nesse exerce autoridade.

Artigo 358

Não será concedida a extradição se a pessoa reclamada tiver sido julgada e posta em liberdade ou cumprido a pena ou esteja sujeita a processo no territorio do Estado requerido, pelo mesmo delicto que motiva o pedido.

Artigo 359

Nem se deve acceder a ella se estiver prescripto o delicto ou a pena, conforme as leis do Estado requerente ou do requerido.

Artigo 360

Em todos os casos em que a legislação do Estado requerido impeça a extradição, é preciso que se trate de leis anteriores ao delicto.

Artigo 361

Os consules geraes, consules, vice-consules ou agentes consulares, podem pedir que se prenda e entregue a bordo de um navio ou aeronave de seu paiz, officiaes, marinheiros ou tripulantes de seus navios ou aeronaves de guerra ou mercantes que tiverem desertado dellas.

Artigo 362

Para os effeitos do artigo anterior apresentarão á auctoridade local correspondente, deixando-lhe, além disso, cópia authentica, os registros de navio ou aeronave, ról da tripulação ou qualquer outro documento official em que o pedido se basear.

Artigo 363

Nos paizes limitrophes poderão estabelecer-se regras especiaes para a extradição nas regiões ou localidades da fronteira.

Artigo 364

O pedido de extradição deve fazer-se por intermedio dos funcionários devidamente autorizados para esse fim pelas leis do Estado requerente.

Artigo 365

Com o pedido definitivo de extradição devem apresentar-se:

1. Uma sentença condemnatoria ou um mandato ou auto de captura ou um documento de igual força, ou que obrigue o interessado a comparecer periodicamente ante a jurisdição repressiva, acompanhado dos elementos do processo que subministrem provas ou, pelo menos, indicios rationaes da culpabilidade da pessoa de que se trate.

2. A filiação do individuo reclamado ou os signaes ou circunstancias que possam servir para o identificar.

3. A cópia authentica das disposições que estabeleçam a qualificação legal de facto que motiva o pedido de entrega, definam a participação attribuida nelle ao culpado e precisem a pena applicavel.

Artigo 366

A extradição pôde solicitar-se telegraphicamente e, nesse caso, os documentos mencionados no artigo anterior apresentar-se-ão ao paiz requerido ou á sua legação ou consulado geral no paiz requerente, dentro dos dois meses seguintes á detenção do culpado. Na sua falta, será elle posto em liberdade.

Artigo 367

Se o Estado requerente não dispuser da pessoa reclamada dentro dos tres meses seguintes a ter ficado ás suas ordens, será posta em liberdade.

Artigo 368

O detido poderá utilizar, no Estado em que se fizer o pedido de extradição, de todos os meios legaes concedidos aos nacionaes para recobrar a sua liberdade, fundando o seu exercicio nas disposições deste Codigo.

Artigo 369

Tambem poderá o detido, a partir deste facto, utilizar os recursos legaes que procedam, no Estado que pedir a extradição, contra as qualificações e resoluções em que se funda.

Artigo 370

A entrega deve fazer-se com todos os objectos que se encontrarem na posse da pessoa reclamada, quer sejam producto do delicto imputado, quer peças que possam servir para a prova do mesmo, tanto quanto fôr praticavel de accordo com as leis do Estado que a effectue, e respeitando-se devidamente os direitos de terceiro.

Artigo 371

A entrega dos objectos a que se refere o artigo anterior, poderá fazer-se, se a pedir o Estado solicitante da extradição, mesmo que o detido morra ou se evada antes da sua entrega se effectuar.

Artigo 372

As despesas com a detenção ou entrega serão por conta do Estado requerente, que não terá de pagar, entretanto, importancia alguma pelos serviços que prestarem os empregados publicos com soldo do Governo a quem se peça a extradição.

Artigo 373

A importancia dos serviços prestados pelos empregados publicos ou officiaes que só recebem direitos ou emolumentos, não ex-

cederá aquella que habitualmente percebam por essas diligencias ou serviços, segundo as leis do paiz em que residirem.

Artigo 374

A responsabilidade, que se possa originar do facto da detenção provisoria, estará a cargo do Estado que a solicitar.

Artigo 375

O transito da pessoa extraditada e de seus guardas pelo territorio de um terceiro Estado contractante será permitido mediante apresentação de um exemplar original ou de uma cópia authentica do documento que conceda a extradição.

Artigo 376

O Estado que obtiver a extradição de um accusado que fôr logo absolvido ficará obrigado a comunicar ao que a concedeu uma cópia authentica da sentença.

Artigo 377

A pessoa entregue não poderá ser detida em prisão nem julgada pelo Estado contractante a quem se entregue, por um delicto diferente daquelle que motivou a extradição e que tivesse sido commettido antes della, salvo que o Estado requerido o consinta, ou que o extraditado permaneça em liberdade no primeiro, tres meses depois de ter sido absolvido pelo delicto que foi origem da extradição, ou de ter cumprido a pena de privação de liberdade que lhe tinha sido imposta.

Artigo 378

Em nenhum caso se imporá ou se executará a pena de morte por delicto que tiver sido objecto de extradição.

Artigo 379

No caso de se levar em conta o tempo da prisão preventiva, contar-se-á como tal o tempo decorrido desde a detenção do extraditado no Estado ao qual se a tiver pedido.

Artigo 380

O detido será posto em liberdade, depois da prisão provisoria, se o Estado requerente, attendendo á distancia e ás facilidades de communicações postaes entre os dois paizes, não apresentar em um prazo razoavel e no menor espaço de tempo o pedido de extradição.

Artigo 381

Negada a extradição de uma pessoa não se pôde voltar a pedila pelo mesmo delicto.

TITULO QUARTO

DO DIREITO DE COMPARÉCER EM JUIZO E SUAS MODALIDADES

Artigo 382

Os nacionaes de cada Estado gozarão em cada um dos outros do beneficio da defesa por pobreza, nas mesmas condições dos nacionaes.

Artigo 383

Não se fará distincção entre nacionaes e estrangeiros, nos Estados contractantes, quanto á prestação de fiança para comparecer em juizo.

Artigo 384

Os estrangeiros pertencentes a um Estado contractante, poderão solicitar nos demais a acção publica em materia penal, em iguaes condições aos nacionaes.

Artigo 385

Não necessitarão tambem esses estrangeiros de prestar fiança para o exercicio de acção privada, nos casos em que não se a exija aos nacionaes.

Artigo 386

Nenhum dos Estados contractantes imporá aos nacionaes de outro a caução *judicio sisti* ou *onus probandi* nos casos em que não se exijam aos seus proprios nacionaes.

Artigo 387

Não se autorizarão embargos preventivos nem fiança de carcere seguro, nem outras medidas processuaes de indole analoga, a respeito de nacionaes dos Estados contractantes, por sua unica condição de estrangeiros.

TITULO QUINTO

CARTAS ROGATORIAS E COMMISSÕES ROGATORIAS

Artigo 388

Toda a diligencia judicial que um Estado contractante necessitar praticar em outro, effectuar-se-a mediante cartas rogatorias

ou commissão rogatoria transmitidas por via diplomatica. Sem embargo, os Estados contractantes poderão pactuar ou acceitar entre si, em materia civil ou criminal, qualquer outra forma de transmissão.

Artigo 389

Corresponde ao juiz solicitante decidir a respeito da sua competencia e da legalidade e oportunidade do acto ou prova, sem prejuizo da jurisdição do juiz deprecado.

Artigo 390

O juiz solicitado resolverá sobre a sua propria competencia *ratione materiae* para o acto de que se lhe encarrega.

Artigo 391

O que receber a carta ou commissão rogatoria deve sujeitar-se, quanto ao seu objecto, á lei do deprecante e, quanto á fórmula de a cumprir, á sua propria lei.

Artigo 392

A deprecada será redigida na lingua do Estado deprecante e será acompanhada de uma traducção na lingua do Estado deprecado, devidamente certificada por interprete juramentado.

Artigo 393

Os interessados na execução das cartas rogatorias de natureza privada deverão constituir procuradores, correndo por sua conta as despesas que esses procuradores e as diligencias occasionem.

TITULO SEXTO

EXCEPÇÕES QUE TEM CARACTER INTERNACIONAL

Artigo 394

A litispendencia, por motivo de pleito em outro Estado contractante, poderá allegar-se em materia civil quando a sentença, que fôr dada em um delles, tiver de produzir effeitos de causa julgada no outro.

Artigo 395

Em assumptos penas não se poderá allegar excepção de litispendencia por causa pendente em outro Estado contractante.

Artigo 396

A excepção de causa julgada, que se fundar em sentença de

outro Estado contractante, só poderá allegar-se quando a sentença tenha sido pronunciada com o comparecimento das partes ou de seus representantes legítimos, sem que se haja suscitado questão de competencia do tribunal estrangeiro baseada em disposições deste Código.

Artigo 397

Em todos os casos de relações jurídicas submettidas a este Código poderão suscitar-se questões de competencia por declinatoria fundada em seus preceitos.

TITULO SETIMO

DA PROVA

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES SOBRE A PROVA

Artigo 398

A lei que rege o delicto ou a relação de direito, objecto de acção civil ou commercial, determina a quem incumbe a prova.

Artigo 399

Para decidir os meios de prova que podem utilizar-se em cada caso, é competente a lei do logar em que se realizar o acto ou facto que se deseja provar, exceptuando-se os não autorizados pela lei do logar em que corra a acção.

Artigo 400

A fórmula por que se ha-de produzir qualquer prova regula-se pela lei vigente no logar em que se tenha de agir.

Artigo 401

A apreciação da prova depende da lei do julgador.

Artigo 402

Os documentos passados em cada um dos Estados contractantes terão nos outros o mesmo valor em juízo que os passados nesse, se reunirem os requisitos seguintes:

1. Que o assumpto ou materia do acto ou contracto seja lícito e permitido pelas leis do paiz do outorgamento e daquelle em que o documento se utiliza;
2. Que os outorgantes tenham aptidão e capacidade legal para obrigar-se conforme sua lei pessoal;
3. Que em seu outorgamento se tenha observado as fórmulas e

solemnidades estabelecidas no paiz onde se tenham verificado os actos ou contractos;

4. Que o documento esteja legalizado e preencha os demais requisitos necessarios para a sua authenticidade no logar onde delle se faça uso.

Artigo 403

A força executoria de um documento subordina-se ao direito local.

Artigo 404

A capacidade das testemunhas e a sua recusa dependem da lei a que se submetta a relação de direito, objeto da acção.

Artigo 405

A fórmula de juramento subordinar-se-á á lei do juiz ou tribunal perante quem se preste e a sua efficacia á que regula o facto sobre o qual se jura.

Artigo 406

As presumpções derivadas de um facto sujeitam-se á lei do logar em que se realizar o facto de que nascem.

Artigo 407

A prova indicaria depende da lei do juiz ou tribunal.

CAPITULO II

REGRAS ESPECIAIS SOBRE A PROVA DE LEIS ESTRANGEIRAS

Artigo 408

Os juizes e tribunaes de cada Estado contractantes applicarão de officio, quando proceda, as leis dos demais, sem prejuizo dos meios probatorios a que este capítulo se refere.

Artigo 409

A parte que invoque a applicação do direito de qualquer Estado contractante em um dos outros, ou esteja em desacordo com ella, poderá justificar o seu texto, vigencia e sentido, mediante certidão devidamente legalizada, de dois advogados em exercicio no paiz de cuja legislação se trate.

Artigo 410

Na falta de prova ou se por qualquer motivo o juiz ou o tribunal a julgarem insuficiente, poderão solicitar de officio, pela via diplomatica, antes de dar resolução, que o Estado de cuja

legislação se trata, facilite um informe sobre o texto, vigencia e sentido do direito applicavel.

Artigo 411

Cada Estado contractante obriga-se a subministrar aos outros, no mais breve prazo possivel, a informaçao a que o artigo anterior se refere e que deverá proceder de seu tribunal supremo, ou de qualquer de suas camaras ou secções, o da procuradoria geral ou da secretaria do Ministerio da Justiça.

TITULO OITAVO

DO RECURSO DE CASSAÇÃO

Artigo 412

Em todo Estado contractante onde existir o recurso de cassação, ou instituição correspondente, poderá elle interpôr-se por infracção, interpretação erróea ou applicação indevida de uma de outro Estado contractante, nas mesmas condições e casos em que o possa quanto ao direito nacional.

Artigo 413

Serão applicaveis ao recurso de cassação as regras estabelecidas no capitulo segundo do titulo anterior, mesmo que o juiz ou tribunal inferior tenham já feito uso dellas.

TITULO NONO

DA FALLENCIA

CAPITULO I

UNIDADE DA FALLENCIA

Artigo 414

Se o credor concordatario, ou em concurso, ou fallido, não tiver mais que um domicilio civil ou mercantil, não pôde haver mais que um juizo de processos preventivos, concursos ou fallencia, ou uma suspensão de pagamentos, quitação e moratoria para todos os seus bens e todas as suas obrigações nos Estados contractantes.

Artigo 415

Se uma mesma pessoa ou sociedade tiver em mais de um Estado contractante varios estabelecimentos mercantis, inteiramente separados economicamente, pôde haver tantos juizos de processos preventivos e quebra como estabelecimentos mercantis.

CAPITULO II

UNIVERSALIDADE DA FALLENCIA E SEUS EFFEITOS

Artigo 416

A declaratoria de incapacidade do fallido ou do que tenha reunido credores, tem effeitos extraterritoriaes nos Estados contractantes, mediante previo cumprimento das formalidades de registo ou publicação, que a legislação de cada um delles exija.

Artigo 417

O auto de declaratoria de fallencia passado em um dos Estados contractantes, executar-se-á nos outros Estados nos casos e fórmula estabelecidos neste Código para as resoluções judiciaes; mas produzirá, desde que seja definitiva e para as pessoas a respeito das quaes o seja, os effeitos de cousa julgada.

Artigo 418

As facultades e funções dos syndicos nomeados em um dos Estados contractantes em vista das disposições deste Código, terão effeito extraterritorial nos demais, sem neccessidade de trâmite algum local.

Artigo 419

O effeito retroactivo da declaração de fallencia e annullação de certos actos por consequencia desses juizos, determinar-se-ão pela lei dos mesmos e serão applicaveis ao territorio dos demais Estados contractantes.

Artigo 420

As acções reaes e os direitos da mesma indole continuarão sujeitos, não obstante a declaração de fallencia, á lei da situação das cousas a que affectem e á competencia dos juizos do lugar em que estas se encontrarem.

CAPITULO III

DA CONCORDATA E DA REHABILITAÇÃO

Artigo 421

A concordata entre os credores e o fallido terá effeitos extraterritoriaes nos demais Estados contractantes, exceptuando o direito dos credores por acção real que a não tiverem aceitado.

Artigo 422

A rehabilitação do fallido tem tambem efficacia extraterrito-

rial nos demais Estados contractantes, desde que se torne definitiva a resolução judicial que a determine e conforme os seus termos.

TITULO DECIMO

EXCEPÇÃO DE SENTENÇAS PRONUNCIADAS POR TRIBUNAES ESTRANGEIROS

CAPITULO 1

MATERIA CIVIL

Artigo 423

Toda a sentença civil ou contencioso-administrativa pronunciada em um dos Estados contractantes, terá força e poderá executar-se nos demais, se reunir as seguintes condições:

1. Que tenha competencia para tomar conhecimento do assunto e julgal-o, de accordo com as regras deste Código, o juiz ou tribunal que a tiver pronunciado;
2. Que as partes tenham sido citadas pessoalmente ou por seu representante legal, para a accão;
3. Que a sentença não offend a ordem publica ou o direito publico do paiz onde se a quer executar;
4. Que seja executoria no Estado em que tiver sido pronunciada;
5. Que seja traduzida autorizadamente por um funcionario ou interprete official do Estado em que se ha-de executar, se ahí fôr diferente o idioma empregado;
6. Que o documento em que conste reuna os requisitos para ser considerado como authentico no Estado de que proceda, e os que requeira, para que faça fé, a legislação do Estado em que se aspira cumprir a sentença.

Artigo 424

A execução da sentença deverá ser solicitada ao juiz do tribunal competente para a levar a effeito, depois de satisfeitas as formalidades requeridas pela legislação interna.

Artigo 425

Contra a resolução judicial, no caso a que o artigo anterior se refere, conceder-se-ão todos os recursos que as leis desse Estado concedam a respeito das sentenças definitivas pronunciadas em juizo declaratorio de maior quantia.

Artigo 426

O juiz ou tribunal, a quem se pedir a execução, ouvirá, antes de a decretar ou negar, e por termo de vinte dias, a parte contra quem se dirija e ao fiscal ou ministerio publico.

Artigo 427

A citação da parte, a quem se deve ouvir, far-se-á por meio de carta ou commissão rogatoria, segundo o disposto neste Código, se tiver o seu domicilio no estrangeiro, e não tiver no paiz representação bastante, ou na fórmula estabelecida pelo direito local, se tiver domicilio no Estado deprecado.

Artigo 428

Passado o prazo que o juiz ou tribunal indicar para o comparecimento, continuará a marcha do processo haja ou não comparecido o citado.

Artigo 429

Se se negar o cumprimento, devolver-se-á a executoria a quem a tiver apresentado.

Artigo 430

Quando se resolver cumprir a sentença, submeter-se-á a sua execução aos trâmites determinados pela lei do juiz ou tribunal para as suas proprias sentenças.

Artigo 431

As sentenças definitivas pronunciadas por um Estado contra-ctante que, por seus termos, não sejam executaveis, produzirão nos demais os efeitos de causa-julgada se reunirem as condições que para esse fim determina este Código, salvo as relativas á sua execução.

Artigo 432

O processo e os efeitos regulados nos artigos anteriores, applicar-se-ão nos Estados contractantes ás sentenças proferidas em qualquer delles por arbitros ou interventores amigaveis, sempre que o assumpto que as motiva possa ser objecto de trasacção nos termos da legislação do paiz em que a execução se solicitar.

Artigo 433

Applicar-se-á tambem esse mesmo procedimento ás sentenças civeis passadas em qualquer dos Estados contractantes por um tribunal internacional, que se refiram a pessoas ou interesses privados.

CAPITULO II

ACTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA

Artigo 434

As determinações tomadas em actos de jurisdição voluntaria,

em materia de commercio, por juizes ou tribunaes de um Estado contractante ou por seus agentes consulares, executar-se-ão nos demais Estados segundo os trámites e na forma indicados no capitulo anterior.

Artigo 435

As resoluções em actos de jurisdição voluntaria, em materia civil, procedentes de um Estado contractante, serão aceitas pelos demais, se reunirem as condições exigidas por este Código, para a efficacia dos documentos outorgados em paiz estrangeiro e procedam de juiz ou tribunal competente, e terão por consequinte efficacia extraterritorial.

CAPITULO III

MATERIA PENAL

Artigo 436

Nenhum Estado contractante executará as sentenças proferidas em um dos outros em materia penal, quanto ás sanções dessa natureza que hajam imposto.

Artigo 437

Poderão, sem embargo, executar-se as ditas sentenças no que toca á responsabilidades civil e a seus effeitos sobre os bens do condenado, se forem proferidas pelo juiz ou tribunal competente segundo este Código e com audiencia do interessado e se se cumprirem as demais condições formaes e de processo que o capitulo primeiro deste titulo estabelece.

DECLARAÇÕES E RESERVAS

RESERVAS DA DELEGAÇÃO ARGENTINA

A Delegação Argentina deixa constancia das seguintes reservas que formula ao Projecto de Convenção de Direito Internacional Privado submetido ao estudo da Sexta Conferencia Internacional Americana.

I.—Entende que a codificação do Direito Internacional Privado deve ser “gradual e progressiva”, especialmente no que se refere a instituições que nos Estados Unidos tenham identidade ou analogia de caracteres fundamentaes.

2.—Mantem em vigor os Tratados de Direito Civil International, Direito Penal International, ratificados em Montevideu no anno de 1889, com os seus Convenios e Protocolos respectivos.

3.—Não aceita principios que modifiquem o sistema da “lei de domicilio”, especialmente tudo o que se opponha ao texto e espirito da legislação argentina.

4.—Não aprova disposições que affectem directa ou indirectamente, o principio sustentado pelas legislações civil e com-

mercial da Republica Argentina, de que, "as pessoas juridicas devem exclusivamente a sua existencia á lei do Estado que as auctorise e por consequencia não são nacionaes nem extrangeiras; suas funções se determinam por dita lei em consonancia com os preceitos derivados do "domicilio" que ella lhes reconhece".

5.—Não aceita principios que admittam ou tendam a sancionar o divorcio ad-vinculum.

6.—Acceita o sistema da "unidade das successões" com a limitação derivada da "lex rei sitae" em materia de bens immoveis.

7.—Admitte todo o principio que tenda reconhecer em favor da mulher, os mesmos direitos civis conferidos ao homem de maior idade.

8.—Não aprova os principios que modifiquem o sistema de "jus soli" como meio de adquirir a nacionalidade.

9.—Não admite preceitos que resolvam conflictos referentes á "dupla nacionalidade" com prejuizo da applicação exclusiva do "jus soli".

10.—Não aceita normas que permittam a intervenção de agentes diplomaticos e consulares, nos juizos de sucessão que interessem a estrangeiros, salvo os preceitos já establecidos na Republica de Argentina e que regulam esa intervenção.

11.—No regime de Lettra de Cambio e Cheques em geral, não admite disposições que modifiquem criterios aceitos nas Conferencias Universaes, como as dc Haya de 1910 e 1912.

12.—Faz a expressa reserva da applicação da "lei do pavilhão" nos casos referentes ao Direito Maritimo, especialmente no que se refere ao contracto de fretamento e suas consequencias juridicas, por considerar que devem de submeter-se á lei e jurisdição do paiz do porto de destino.

Este principio foi sustentado com exito pela secção argentina da International Law-Association na 3la. sessão desta e actualmente é uma das chamadas "regras de Buenos Aires".

13.—Reaffirma o conceito de que todos os delitos commetidos em aeronaves, dentro do espaço aereo nacional ou em barcos mercantes estrangeiros, deverão julgar-se e punir-se pelas autoridades e leis dos Estados em que se encontram.

14.—Ratifica a these approvada pelo Instituto Americano de Direito Internacional, na sua sessão de Montevideu de 1927, cujo conteúdo é o seguinte:—"A nacionalidade do reo não poderá ser invocada como causa para negar a sua extradição."

15.—Não admite principios que regulamenteem as questões internacionaes do trabalho e situação jurídica dos operarios como fundamento das razões expostas, quando se discutiu o artigo 198 do Projecto de Convenção de Direito Civil Internacional, na Junta Internacional de Jurisconsultos, assembléa do Rio de Janeiro de 1927.

A Delegação argentina faz saber que, como já o manifestou no Illustre Comissão numero 3, ratifica na Sexta Conferencia Internacional Americana, os votos emitidos e attitude assumida pela Delegação argentina na Assemblea da Junta Internacional

de Jurisconsultos, celebrada na cidade do Rio de Janeiro, nos
meses de Abril e Maio de 1927.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Sente muito não poder dar a sua approvação desde agora ao Código Bustamante, posto que dada a Constituição dos Estados Unidos da América, as relações dos Estados membros da União Federal e as atribuições e poderes do Governo Federal, se lhes torna difficult. O Governo dos Estados Unidos da América mantém firme a ideia de não desligar-se da América Latina, pelo que, de acordo com o artigo sexto da Convenção, que permite a cada Governo adherir-se mais tarde, fará uso do privilegio desse artigo a fim de que, depois de examinar cuidadosamente o Código em todas as suas obrigações, possa aderir pelo menos a uma grande parte do mesmo. Por estas razões a Delegação dos Estados Unidos da América se reserva o seu voto na esperança de poder aderir-se, como disse, em parte ou em uma parte considerável das suas modalidades.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO URUGUAY

A Delegação do Uruguai faz reservas tendentes a que o critério dessa Delegação seja coerente com o que sustentou na Junta de Jurisconsultos do Rio de Janeiro o Dr. Pedro Varela, Catedrático de Faculdade de Direito do seu país. Mantém-as declarando que o Uruguai dá a sua aprovação ao Código em geral.

RESERVAS DA DELEGAÇÃO DO PARAGUAY

1.—Declara que o Paraguai mantém a sua adhesão aos Tratados de Direito Civil Internacional, Direito Commercial Internacional, Direito Penal Internacional e Direito Processual Internacional que foram ratificados em Montevidéu em 1888 e 1889, com os Convenios e Protocolos que os acompanham.

2.—Não está de acordo em modificar o sistema da “Lei do domicilio” consagrado pela legislação civil da República.

3.—Mantém a sua adhesão ao princípio da sua legislação, de que as pessoas jurídicas devem exclusivamente sua existência à Lei do Estado que as autoriza e que, por consequência, não são nacionais nem estrangeiras; as suas funções estão assinaladas pela lei especial de acordo com os princípios derivados do domicilio.

4.—Admite o sistema de unidade de sucessões, com a limitação derivada da “Lex rei sitae” em matéria de bens imóveis.

5.—Está conforme com todo o princípio que tenda a reconhecer em favor da mulher os mesmos direitos civis concedidos ao homem de maior idade.

6.—Não aceita os princípios que modifiquem o sistema do “Jus soli” como maneira de adquirir a nacionalidade.

7.—Não está conforme com os preceitos que resolvam o problema “da dupla nacionalidade” com prejuizo da applicação exclusiva do “jus soli”.

8.—Adhera ao criterio aceite nas Conferencias universaes sobre o regimen da Lettra de Cambio e Cheques.

9.—Faz reserva da applicação da “Lei do Pavilhão” em assumptos relacionados com o Direito Maritimo.

10.—Está de acordo em que os delictos commettidos em aeronaves dentro do espaço aereo nacional ou em barcos mercantes estrangeiros, devem ser julgados pelos tribunaes do Estado em que se encontrem.

RESERVA DA DELEGAÇÃO DO BRASIL

1.—Impugnada a emenda substitutiva que propoz para o artigo 53, a Delegação do Brasil nega a sua approvação ao artigo 52 que estabelece a competencia da lei de domicilio conjugal para regular a separação de corpos e o divorce, assim como tambem ao artigo 54.

DECLARAÇÕES QUE FAZEM AS DELEGAÇÕES DE COLOMBIA E COSTA RICA

As Delegações de Colombia e Costa Rica subscrevem o Código de Dereito International Privado em conjunto com a reserva expressa de tudo quanto possa estar em contradicção com a legislação colombiana e a costarricense.

No que se refere a pessoas juridicas a nossa opinião é que elles devem de estar submettidas á lei local para tudo o que se refira ao “seu conceito e reconhecimento”, como intelligentemente o dispõe o artigo 32 do Código, em contradição (pelo menos apparente) com as outras disposições do mesmo como os artigos 16 e 21. Para as legislações subscritas, as pessoas juridicas não podem ter nacionalidade nem de acordo com os principios scientificos nem em relação com as mais altas e permanentes conveniencias de America. Teria sido preferivel que no Código que vamos aprovar, se tivesse omitido tudo quanto possa servir para afirmar que as pessoas juridicas, singularmente as sociedades de capitales, tem nacionalidade.

As delegações subscritas ao aceitar a transacção consignada no artigo 7º entre as doutrinas europeas da personalidade do direito e a genuinamente americana do domicilio para reger o estado civil e a capacidades das pessoas em direito internacional privado, declararam aceitar essa transacção para não retardar a sahida do Código que todas as nações de America esperam hoje, como uma das obras mais transcendentaes desta Conferencia, mas affirmam emphaticamente que essa transacção deve de ser transitoria porque a unidade juridica do Continente tem de verificar-se á volta da lei do domicilio, unica que salvaguarda efficazmente a soberania e independencia dos povos de America. Povos de immigração como o são ou virão a ser todas estas republicas,

não podem encarar sem grande inquietação que os imigrantes europeos tragam a pretensão de invocar na America as suas proprias leis de origem para governar aqui o seu estado civil de capacidade de contractar. Admittir esta possibilidade (que consagra o principio da lei nacional, reconhecido parcialmente pelo Código) é crear na America um Estado dentro do Estado e pôr-nos quasi sob o regimen das capitulações que a Europa impõe durante seculos ás nações de Asia, por ella consideradas como inferiores nas suas relações internacionaes. As Delegações que subscrevem fazem votos porque muito breve desapareçam de todas as legislações americanas todos os vestigios das theorias (mais politicas que juridicas) preconisadas por Europa para conservar aqui a jurisdição sobre os seus nacionaes establecidos em terras livres da America e tem esperança de que a legislação de continente se unifique de acordo com os principios que submettem o estrangeiro imigrante ao imperio sem restrições das leis locaes. Com a esperança, pois, de que em breve a lei do domicilio será a que reja na America o estado civil e a capacidade das pessoas, e na certeza de que ella será um dos aspectos mais caracteristicos do Panamericanismo juridico que todos anciamos crear, as delegações subscriptas votam o Código de Direito Internacional Privado o aceitam a transacção doutrinaria em que o mesmo se inspira.

Referindo-se ás disposições sobre o divorcio, a Delegação Colombiana formula a sua reserva absoluta no que se refere ao que regula o divorcio pela lei do domicilio conjugal, porque considera que para tais effetitos, e dado o excepcional carácter transcendental e sagrado do matrimonio (base da sociedade e do mesmo Estado), Colombia não pode aceitar dentro do seu territorio a applicação de legislações estranhas.

As delegações, aparte isto, desejam manifestar a sua admiração entusiasta pela fecunda obra do Dr. Sanchez de Bustamante que este Código representa nos seus 500 artigos concebidos em clausulas lapidares que bem podiam servir como exemplo para os legisladores de todos os povos. Desde hoje o Dr. Sanchez de Bustamante, será não somente um dos filhos mais esclarecidos de Cuba, mas tambem um dos mais eximios cidadãos da grande patria americana que pode com justiça jactar-se de produzir homens de scienza e estadistas tão insignes como o autor do Código de Direito Internacional Privado, que estudamos e que a Sexta Conferencia Internacional Americana vae adoptar em nome de toda a America.

RESERVAS DA DELEGAÇÃO DO SALVADOR

Reserva primeira: especialmente applicavel aos artigos 44, 146, 176, 232, 233.

No que se refere ás incapacidades que podem ter os estrangeiros segundo a sua lei pessoal para testar, contractar, comparecer em juizo, exercer o commercio ou intervir em actos ou

contractos mercantis, se faz a reserva de que no Salvador, ditas incapacidades não serão reconhecidas nos casos em que os actos ou contractos tenham sido celebrados no Salvador, sem infracção á lei salvadorenha e para terem effeitos no seu territorio nacional.

Reserva segunda: applicavel ao artigo 187, paragrapho ultimo.

No caso de communidade de bens imposta aos casados como lei pessoal por um Estado estrangeiro, somente será reconhecida no Salvador, se se confirma por contracto entre as partes interessadas, cumprindo-se todos os requisitos que a lei salvadorenha determina, ou determine no futuro, referentes a bens situados no Salvador.

Reserva terceira: especialmente applicavel aos artigos 327, 328 e 329.

Reserva que não será admissivel, no concernente ao Salvador, a jurisdição de juizes ou tribunaes estrangeiros nos juizos e diligencias de successões e nos concursos de credores e quebra em todos os casos em que affectem bens immoveis, situados no Salvador.

RESERVAS DA DELEGAÇÃO DA REPUBLICA DOMINICANA

1.—A Delegação da Republica Dominicana deseja manter o predominio da Lei Nacional naquellas questões que se referem ao estado e capacidade dos dominicanos, onde quer que estes se encontren por isto não pode acceptar senão com reservas, aquellas disposições do Jrojecto de Codificação em que se dá privilegio á lei "do domicilio" ou á lei local; tudo isto, não obstante o principio conciliador enunciado no artigo 7º do Projecto do qual é uma applicação o artigo 53 do mesmo.

2.—No que se refere a nacionalidade, titulo 1º. livro 1º. artigo 9 e seguintes, estabelecemos uma reserva, no que se refere primeiro, á nacionalidade das sociedades, e segundo, muito especialmente, ao principio geral da nossa constituição politica, pela qual a nenhum dominicano se lhe reconhecerá outra nacionalidade que não seja a dominicana enquanto resida em territorio da República.

3.—Em quanto ao domicilio das sociedades estrangeiras, quaesquer que fossem os seus estatutos e o logar no qual o tivessem fixado, ou em que tenham o seu principal establecimento, etc., reservamos este principio de ordem publica na Republica Dominicana: qualquer pessoa que physica ou moralmente exerça actos da vida jurídica no seu territorio, terá por domicilio o logar onde possua um establecimento, uma agencia ou um representante qualquer. Este domicilio é attributivo de jurisdição para os tribunaes nacionaes naquellas relações juridicas que se referem a actos intervindos no paiz, qualquer que seja a natureza delles.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO EQUADOR

A Delegação do Equador tem a honra de assignar por com-

pleto a Convenção do Código de Direito Internacional Privado em homenagem ao Dr. Bustamante. Não crê necessario particularizar reserva alguma, exceptuando, somente, a faculdade geral contida na mesma Convenção que deixa aos governos a liberdade de ratifical-a.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE NICARAGUA

Nicaragua em assumptos que desde agora e no futuro considera de algum modo sujeitos ao Direito Canonico, não poderá applicar as disposições do Código de Direito Internacional Privado que estejam em conflito com aquelle Direito.

Diz que, como o declarou verbalmente em varios casos durante a discussão, algumas disposições do Código approuvado estão em desacordo com as disposições expressas da legislação de Nicaragua ou com os principios que são base dessa legislação; mas como uma homenagem á obra insigne do ilustre autor daquelle Código, prefere em vez de descriminar as reservas do caso, fazer esta declaração e deixar que os poderes publicos de Nicaragua formulem essas reservas ou reformem até onde seja possivel a legislação nacional nos casos de incompatibilidade.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE CHILE

A delegação de Chile compraz-se em apresentar as suas mais calorosas felicitações ao eminente e sabio jurisconsulto americano, Sr. Antonio Sanchez de Bustamante, pela magna obra que realizou redigindo um projecto de Código de Direito Internacional Privado, destinado a reger as relações entre os Estados de America. Este trabalho é uma contribuição poderosa para o desenvolvimento do panamericanismo jurídico, que todos os paizes do Novo Mundo desejam ver fortalecido e progredindo. Apesar de que esta obra grandiosa de codificação não pode realizar-se em breve espaço de tempo, porque precisa de ser pensada e reflectida pelos Estados que na mesma devem de participar, a Delegação de Chile, não será um obstáculo para que esta Conferencia Panamericana, aprove um Código de Direito Internacional Privado; mas résalvará o seu voto nas matérias e nos pontos que julgue convenientes, em especial, nos pontos referentes á sua política tradicional ou á sua legislação nacional.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE PANAMÁ

Ao emitir o seu voto a favor do projecto de Código de Direito Internacional privado na sessão celebrada por esta Comissão no dia 27 de Janeiro ultimo, a Delegação da Republica de Panamá manifestou que na sua oportunidade apresentaria as reservas que julgassem necessarias, caso para isso tivesse lugar. Esta attitude da Delegação de Panamá obedeceu a certas duvidas que tinha sobre o alcance e extensão de algumas disposições contidas no Projecto, especialmente no que se refere a applicação da lei

nacional do estrangeiro residente no paiz, o que teria dado logar a um verdadeiro conflito, visto que na Republica de Panamá impõe o sistema de lei territorial desde o preciso momento em que se constituiu como estado independente. Apesar disto, a Delegação panamenha crê que todas as dificuldades que se pudessem apresentar nesta delicada matéria foram previstas e ficaram satisfatoriamente resolvidas por intermeio do artigo setimo de Projecto, segundo o qual "cada Estado contractante applicará como leis pessoais as do domicilio ou as da nacionalidade, segundo o sistema que tenha adoptado ou no futuro adopte a legislação interior". Como todos os outros Estados que subscrevam e ratificarem a Convenção respectiva, Panamá ficará, pois, em plena liberdade de applicar a sua propria lei, que é a territorial.

Entendidas assim as coisas, á Delegação de Panamá lhe é altamente grato declarar, como realmente o faz, que lhe dá a sua approvação ao Projecto de Código de Direito Internacional Privado, ou Código Bustamante, que é como deveria chamar-se em homenagem ao seu autor, sem a menor reserva.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE GUATEMALA

Guatemala adoptou na sua legislação civil, o sistema de domicilio, mas ainda que assim não fosse, os artigos conciliatórios do Código fazem harmonizar perfeitamente qualquer conflito que pudesse suscitar-se entre os diferentes Estados, segundo as escolas diversas a que tenham sido filiados.

Por consequencia, pois, a Delegação de Guatemala se accommoda perfeitamente á modalidade que com tanta ilustração, genialidade e criterio científico, se ostenta no Projecto de Código de Direito Internacional Privado e deseja deixar gravado que o aceita absolutamente e sem reservas de especie alguma.

CERTIFICO: que la presente Convención es traducción del texto en español, de la Convención y del Código de Derecho Internacional Privado, con las reservas hechas por los Estados Signatarios, aprobados en la Sexta Conferencia Internacional Americana en su sesión del 13 de febrero e insertos en el Acta Final de la Conferencia suscrita en idioma español por las delegaciones de los veintiún Estados representados en la Conferencia y depositada en la Secretaría de Estado de la República de Cuba.

Miguel Hidalgo
Subsecretario de Estado, Encargado

del Despacho.